


FACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO SOCIALISTA, CENTRALIZADO, POLICIAL Y MILITARISTA

**COMENTARIOS SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DEL
ANTEPROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 2007**

ESTUDIOS POR:

ALLAN R. BREWER-CARÍAS

**COLECCIÓN
TEXTOS
LEGISLATIVOS N° 42
1ª EDICIÓN**

 **editorial jurídica venezolana**

CARACAS 2007

**HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO SOCIALISTA,
CENTRALIZADO, POLICIAL Y MILITARISTA**

**Comentarios sobre el alcance y sentido de las propuestas de
Reforma Constitucional 2007**

COLECCIÓN TEXTOS LEGISLATIVOS

Títulos publicados

1. *Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, Hildegard Rondón de Sansó y Gustavo Urdaneta Troconis, 13^{ra} Ed., 2^{da} reimpresión, Caracas 2006, 267 pp.
2. *Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público*, con Estudios de Alberto Arteaga S., Allan R. Brewer-Carías, Humberto Njaim y Manuel Rachadell, 3^{ra} Ed., Caracas 1989, 256 pp.
3. *Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, 3^{ra} Ed. Caracas 1991, 144 pp.
4. *La Constitución y sus Enmiendas*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, 3^{ra} Ed. actualizada, Caracas 1991, 218 pp.
5. *Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías y Carlos M. Ayala Corao, 5^{ta} Ed., Caracas 1996, 217 pp.; 6^a Ed. con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, Carlos M. Ayala Corao y Rafael Chavero Gazdik, Caracas, 2007, 241 pp.
6. *Ley Orgánica de Ordenación Urbanística*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, Cecilia Sosa Gómez, Carlos M. Ayala Corao y Humberto Romero-Muci, 3^{ra} Ed., Caracas 1989, 280 pp.
7. *Ley Orgánica del Régimen Municipal*, con introducción general de Allan R. Brewer-Carías, Caracas 1988, 256 pp.
8. *Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, y Josefina Calcaño de Temeltas, 3^{ra} Ed. Actualizada, Caracas 1994, 359 pp.
9. *Ley de Mercado de Capitales*, con Estudio de Hugo Nemirovsky, Caracas 1989, 690 pp.
10. *Ley Orgánica de Régimen Municipal 1989*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, Hildegard Rondón de Sansó y Carlos M. Ayala Corao, 2^{da} Ed. ampliada, Caracas 1994, 379 pp.
11. *Leyes y Reglamentos para la Descentralización Política de la Federación*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, Carlos Ayala Corao, Jorge Sánchez Mellen, Gustavo José Linares Benzo y Humberto Romero-Muci, 3^{ra} Ed. actualizada, Caracas 1995, 445 pp.
12. *Código de Derechos Humanos*, Compilación y Estudio preliminar de Pedro Nikken, Caracas 1991, 632 pp.
13. *Ley Orgánica del Sufragio*, con Estudio de Allan R. Brewer-Carías, Caracas 1993, 241 pp.
14. *Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia*, con Estudios de Allan R. Brewer-Carías, Gustavo Linares Benzo, Luis A. Ortiz Álvarez y Faustino Flamarique Riera, Caracas 1996, 250 pp.
15. *Ley Orgánica de la Justicia de Paz*, Victorino, Márquez F., Julio C. Fernández T., Marcos R. Carrillo P., Eva Josko de Güeron, Julio Andrés, Borges, Carlos E., Ponce S. María Elena, Sandia de Segnini, 1^{ra} Ed., Caracas 1996, 329 pp.
16. *Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ricardo Antequera P. y Gileni, Gómez Muci, 1^{ra} Ed., Caracas 1998, 464 pp.
17. *Comentarios analíticos al Código Orgánico Tributario*, José Andrés, Octavio, 1^{ra} Edición, Caracas 1998, 413 pp.
18. *Legislación sobre propiedad industrial*, Gileni Gómez Muci y Ricardo Antequera Parilli, Caracas 1999, 346 pp.
19. *Código Penal de Venezuela*, Belén Pérez Chiriboga, Caracas 2000, 936 pp.
20. *La Constitución de 1999*, Allan R. Brewer-Carías, 1^{ra} Edición, Caracas 2000, 429 pp., 2^{da} Ed., Caracas 2000, 505 pp., 3^{ra} Ed., (reimpresión), Caracas 2001, 505 pp., 4^{ta} Ed., Caracas 2004, 1190 pp.
21. *Régimen Legal de las Concesiones Públicas aspectos Jurídicos, Financieros y Técnicos*, Alfredo Romero Mendoza (coordinador), Jesús Caballero Ortiz, Manuel Rachadell, Víctor R. Hernández-Mendible, Chris Brown, Christian C.D. Petersen, Andrés Germán Otero L., José Gómez Oriol, Antonio Vives Llabres y Prólogo de Allan R. Brewer-Carías, Caracas 2000, 241 pp.

22. *El Régimen Legal de las ofertas públicas de adquisición de acciones y de tomas de control de empresas*, Allan R. Brewer-Carías, Caracas 2000, 150 pp.
23. *Leyes sobre los servicios públicos domiciliarios agua, electricidad, gas*, María Elena Sandía de Segnini, José Araujo-Juárez, Oscar A. Rodríguez Pacanins y Jorge A. Neher, Caracas 2001, 266 pp.
24. *Ley Orgánica de la Administración Pública*, por Allan R. Brewer-Carías y Rafael Chavero Gazdik, 2^{da} Ed. 2^{da} reimpresión, Caracas 2006, 234 pp.
25. *Ley Orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento*, María Elena Sandía de Segnini, Caracas 2002, 129 pp.
26. *Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social*, Allan R. Brewer-Carías, Gustavo Linares Benzo, Dolores Aguerrevere Valero y Caterina Balasso Tejera, Caracas, 2002, 201 pp.
27. *Ley del Estatuto de la Función Pública*, Gustavo Briceño Vivas y Joaquín Bracho Dos Santos, 1^a Ed., 3^a Reimpresión, Caracas 2006, 139 pp.
28. *Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia*, Allan R. Brewer-Carías, 3^{ra} Ed. corregida y aumentada, 2^{da} Reimpresión, Caracas 2006, 375 pp.
29. *Estudio del Código Orgánico Procesal Penal reformado el 14-11-2001*, Belén Pérez Chiriboga, 1^{ra} Ed., Caracas 2004, 844 pp.
30. *Leyes Orgánicas del Poder Ciudadano*, Allan R. Brewer-Carías, Roxana Orihuela, María Alejandra Correa, Gustavo Briceño Vivas y José Ignacio Hernández, 1^{ra} Edición, 1^{ra} Reimpresión, Caracas 2006, 401 pp.
31. *Régimen Legal de Nacionalidad, Ciudadanía y Extranjería*, Allan R. Brewer-Carías, Caracas 2005, 136 pp.
32. *Ley sobre Medidas de Salvaguardia*, Duilio David Matheus Rodríguez, Caracas 2005, 174 pp.
33. *Ley de protección al consumidor y al usuario*, José Ignacio Hernández, David Quiroz Rendón, Faustino Flamerique y Rafael de Lemos Matheus, Caracas 2005, 229 pp.
34. *Ley Orgánica del Poder Público Municipal*, Allan R. Brewer-Carías, Fortunato González Cruz, José Ignacio Hernández, Luis Fraga Pittaluga, Manuel Rachadell, Adriana Vigilancia, Daniela Urosa Maggi, 2^{da} Edición corregida y aumentada, Caracas 2005, 650 pp.
35. *Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte)*, Asdrúbal Aguiar, José Ignacio Hernández, Margarita Escudero, Ana Cristina Núñez Machado, Juan Manuel Raffalli A., Carlos Urdaneta Sandoval, Allan R. Brewer-Carías, Juan Cristóbal Carmona Borjas, Caracas 2005, 304 pp.
36. *Manual Jurídico sobre Comunicación Social*, Belén Pérez Chiriboga, Caracas 2006, 384 pp.
37. *Ley contra los Ilícitos Cambiarios*, José Ignacio Hernández G., Andrés Troconis, Gustavo Muci Facchín, Vicente Villavicencio, Caracas 2006, 184 pp.
38. *Régimen Jurídico de Seguridad Social (Estudio constitucional y legal del Derecho a la Seguridad Social y del Sistema de Seguridad Social)*, Freddy Alberto Mora Bastidas, Caracas 2007, 576 pp.
39. *Manual Didáctico sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros*, José Félix Ruíz Montero, Caracas, 2007, 285 pp.
40. *Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Reglamento Parcial)*, Juan Carlos Pró Rísquez, Gabriel e Angulo y José Ignacio Hernández, Caracas 2007, 264 pp.
41. *Ley de Aguas*, Allan R. Brewer-Carías, Caracas 2007, pp. 139.
42. *Hacia la consolidación de un Estado socialista, centralizado, policial y militarista*, Allan R. Brewer-Carías, Caracas 2007, 160 pp.

© by Allan R. Brewer-Carías
Email: abrewer@bblegal.com
www.allanbrewercarias.com

Hecho el depósito de Ley
Depósito Legal: lf 54020073403513
ISBN: 978-980-365-121-3

Editorial Jurídica Venezolana
Avda. Francisco Solano López, Torre Oasis, P.B., Local 4, Sabana Grande,
Apartado 17.598 - Caracas, 1015, Venezuela
Teléfono 762-25-53 / 762-38-42/ Fax. 763-52-39
Email fejv@cantv.net
<http://www.editorialjuridicavenezolana.com.ve>

Diagramación, composición y montaje por: Francis Gil, en letra
Book Antigua 11, Interlineado Exacto 14, Mancha 21 x 12.5

La edición consta de 750 ejemplares

ALLAN R. BREWER-CARÍAS

*Profesor de la Universidad Central de Venezuela
Vice Presidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado
Adjunct Professor of Law, Columbia Law School*

**HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN
ESTADO SOCIALISTA, CENTRALIZADO,
POLICIAL Y MILITARISTA**

**Comentarios sobre el alcance y sentido del
Anteproyecto de Reforma Constitucional
2007**

COLECCIÓN TEXTOS LEGISLATIVOS

Nº 42

Editorial Jurídica Venezolana
Caracas, 2007

SOBRE EL FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 74 de 25-01-2006 (Revista de Derecho Público, N° 105, 2006, pp. 76 ss.), señaló que un fraude a la Constitución ocurre cuando se destruyen las teorías democráticas “mediante el procedimiento de cambio en las instituciones existentes aparentando respetar las formas y procedimientos constitucionales”, o cuando se utiliza “el procedimiento de reforma constitucional para proceder a la creación de un nuevo régimen político, de un nuevo ordenamiento constitucional, sin alterar el sistema de legalidad establecido, como ocurrió con el uso fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial en la Alemania de la Constitución de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los líderes fascistas, en términos de dudosa legitimidad, la plenitud del poder constituyente, otorgando un poder legislativo ilimitado”; y que un falseamiento de la Constitución ocurre cuando se otorga “a las normas constitucionales una interpretación y un sentido distinto del que realmente tienen, que es en realidad una modificación no formal de la Constitución misma”, concluyendo con la afirmación de que “Una reforma constitucional sin ningún tipo de límites, constituiría un fraude constitucional”.

INTRODUCCIÓN

EL NUEVO FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN: LA PROPUESTA DE “TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y CREACIÓN DE UN NUEVO ORDENAMIENTO JURÍDICO” PARA ESTABLECER UN ESTADO CENTRALIZADO, SOCIALISTA, POLICIAL Y MILITARISTA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE “REFORMA CONSTITUCIONAL”

En enero de 2007, el Presidente de la República anunció que propondría una serie de reformas a la Constitución de 1999¹, para cuya elaboración designó una **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución**², presidida por la Presidenta de la Asamblea Nacional e integrada, entre otros, por los siguientes altos funcionarios del Estado: el Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional y otros cuatro diputados; la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; el Defensor del Pueblo; el Ministro del Trabajo; la Procuradora General de la República y el Fiscal General de la República. Entre las disposiciones del Decreto estaba la expresa indicación de que el trabajo del Consejo debía realizarse “de conformidad con los lineamientos del Jefe de Estado en estricta confidencialidad” (art. 2)³, lo que de por sí es contrario a los principios de cualquier reforma constitucional en un país democrático.

1 Véase en *Gaceta Oficial* N° 36.860 de 30-12-1999.

2 Véase Decreto N° 5138 de 17-01-2007, *Gaceta Oficial* N° 38.607 de 18-01-2007.

3 Ello también lo declaró públicamente, además, la Presidenta de la Asamblea Nacional al instalarse el Consejo. Véase en *El Universal*, 20-02-2007.

Las pautas que en diversos discursos y alocuciones fue dando el Presidente de la República para la reforma constitucional, apuntaban, por una parte, a la conformación de un **Estado del Poder Popular o del Poder Comunal, o Estado Comunal**, estructurado desde los Consejos Comunales como unidades políticas primarias u organizaciones sociales **no electas mediante sufragio universal, directo y secreto**, supuestamente dispuestos para canalizar la participación ciudadana, pero conforme a un sistema de **conducción centralizado** desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional, donde **no hay autonomías territoriales**; y por la otra, a la estructuración de un **Estado socialista**, sustituyendo al sistema de libertad económica y Estado de economía mixta que existe en Venezuela, por un sistema de economía estatista y colectivista, sometido a una planificación centralizada, minimizando el rol del individuo y eliminando todo vestigio de libertad económica y de propiedad privada.

Es decir, se trata de una modificación que implica **transformar radicalmente al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico**. Para ello, conforme al artículo 347 de la Constitución, ineludiblemente que se requería la convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente conforme al artículo 347 de la Constitución, no pudiendo pretenderse hacer dicha modificación mediante una "reforma constitucional". Lo que en ella se plantea, **excepción hecha de las que se refieren a los derechos laborales (arts. 87 y 90) que no justifican reforma constitucional alguna pues lo que se propone puede establecerse mediante ley**, definitivamente no consiste sólo en "una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional", que es lo que conforme al artículo 342 de la Constitución se pudiera realizar mediante el procedimiento de la "reforma constitucional", que sólo exige la discusión y sanción del proyecto por la Asamblea Nacional y un referendo aprobatorio.

Sin embargo, a pesar de las previsiones constitucionales, lamentablemente y una vez más, se repite en este caso la táctica política que ha sido un común denominador del régimen instalado en el país a partir de 1999, que es actuar en fraude a la Constitución, es decir,

utilizando las instituciones existentes aparentando respetar las formas y procedimientos constitucionales, para proceder, conforme lo ha advertido el Tribunal Supremo, "a la creación de un nuevo régimen político, de un nuevo ordenamiento constitucional, sin alterar el sistema de legalidad establecido"⁴. Eso ocurrió en febrero de 1999, mediante la convocatoria del referendo consultivo sobre la Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución entonces vigente de 1961; ocurrió con el decreto del régimen transitorio de los Poderes Públicos a la Constitución de 1999, que no fue sometido al referendo aprobatorio de la misma; y ha venido ocurriendo en los años subsiguientes, con la destrucción progresiva de la democracia desde el ejercicio del poder y el sucesivo secuestro de los derechos y libertades públicas, supuestamente utilizando previsiones legales y constitucionales.

En esta ocasión, una vez más se pretende utilizar fraudulentamente las previsiones constitucionales para fines distintos a los establecidos en ellas, pues se pretende mediante el procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución, producir una transformación radical del Estado, y **trastocar el Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia de orden civil, para convertirlo en un Estado Socialista, Centralizado y Militarista**, donde desaparece la democracia representativa, la alternabilidad republicana y toda idea de descentralización del poder, y donde todo se concentra en la decisión del Jefe de Estado. Ello no es posible constitucionalmente, y como lo reseñó el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia antes citada, en sentido similar, ello ocurrió "con el uso fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial en la Alemania de la Constitución de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los líderes fascistas, en términos de dudosa legitimidad, la

4 Véase la sentencia de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 74 de 25-01-2006, en *Revista de Derecho Público*, N° 105, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2006, pp. 76 y ss.

plenitud del poder constituyente, otorgando un poder legislativo ilimitado”⁵.

Todo este fraude constitucional comenzó a evidenciarse con las propuestas de reforma elaboradas por el **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución** cuya divulgación se efectuó en junio de 2007 y cuya autenticidad a pesar del “pacto de confidencialidad” ordenado por el Presidente, es indudable⁶ (en lo adelante: *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*), en las que se formularon proyectos de cambios radicales respecto de una serie de artículos de la Constitución⁷, y que si bien, en algunos casos, el Presidente de la República no ha repetido en su **Anteproyecto para la primera reforma constitucional**, presentado ante la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2007 (en lo adelante: *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*), el mismo muestra cual es el pensamiento y la intención de los más altos funcionarios del gobierno y el Estado que formaron dicho Consejo, por lo que tienen

5 Véase la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 74 de 25-01-2006, en *Revista de Derecho Público*, N° 105, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2006, pp. 76 y ss.

6 El documento circuló en junio de 2007 con el título **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “Modificaciones propuestas”**. El texto completo fue publicado como *Proyecto de Reforma Constitucional. Versión atribuida al Consejo Presidencial para la reforma de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela*, Editorial Atenea, Caracas 01 de julio de 2007, 146 pp.

7 En el documento del Consejo Presidencial, se formularon propuestas de reforma respecto de los siguientes artículos de la Constitución: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, , 24, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 44, 47, 50, 52, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 67, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 133, 140, 141, 143, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 187, 186, 188, 189, 191, 192, 193, 198, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 279, 280, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 337, 338, 341, 342, 344, 348 y 350.

que tomarse en cuenta, ya que en definitiva, en su mayoría, son consecuencia de las propuestas formuladas por el Presidente, o son las orientaciones futuras para las próximas reformas constitucionales ya anunciadas⁸.

En efecto, en el texto de las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se evidencia que una serie de artículos fundamentales de la transformación del Estado no fueron siquiera mencionados, a los efectos, precisamente de que fuera el Presidente de la República el que formulara las propuestas de reforma sobre los mismos, como en efecto ocurrió en el texto del **Anteproyecto** que presentó ante la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2007⁹. En el documento presentado por el Presidente, además, claramente se anuncia que se trata de un **Anteproyecto** para una **primera** reforma constitucional, con lo que se anuncia que en el futuro vendrán otras reformas.

Por tanto, con el anteproyecto para la primera reforma constitucional presentado por el Presidente de la República (en lo adelante *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*) ante la Asamblea Nacional en agosto de 2007, y con las propuestas de reforma de la Constitución elaboradas por el Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución (en lo adelante *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*) y publicitadas en junio de 2007, **que complementan el Anteproyecto**, si son analizadas en su conjunto, se evidencia, **excepción hecha de las que se refieren a los derechos laborales (arts. 87 y 90) que no justifican reforma constitucional alguna pues lo que se propone puede establecerse mediante ley**, que lo que se busca efectuar es una radical transformación del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico para:

8 Recuérdese que la propuesta del Presidente de la República en su Anteproyecto fue para una "primera reforma constitucional".

9 En el Anteproyecto presentado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, se formulan propuestas respecto de los artículos 11, 16, 18, 67, 70, 87, 90, 100, 112, 113, 115, 136, 141, 156, 167, 168, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 300, 302, 305, 307, 318, 320, 321, 328 y 329.

PRIMERO, transformar el Estado en un **Estado Centralizado, de poder concentrado bajo la ilusión del Poder Popular, lo que implica la eliminación definitiva de la forma federal del Estado, imposibilitando la participación política y degradando la democracia representativa; todo ello**, mediante la supuesta organización de la población para la participación en los Consejos del Poder Popular, como los Comunales, que son instituciones sin autonomía política alguna, **cuyos miembros se declara que no son electos**, y que son controlados desde la Jefatura del gobierno y para cuyo funcionamiento, el instrumento preciso es el partido único que el Estado ha tratado de crear en los últimos meses.

SEGUNDO, transformar el Estado en un **Estado Socialista, que implica la eliminación de la libertad económica y de la iniciativa privada, así como la casi desaparición de la propiedad privada, dándosele al Estado la propiedad de los medios de producción, la planificación centralizada y la posibilidad de confiscar bienes de las personas materialmente sin límites, configurándolo como un Estado del cual todo depende, y a cuya burocracia queda sujeta la totalidad de la población; lo que choca con las ideas de libertad y solidaridad social que se proclaman en la propia Constitución, sentando las bases para que el Estado sustituya a la propia sociedad y a las iniciativas particulares, minimizándoselas.**

TERCERO, transformar el Estado en un **Estado Militarista**, dado el rol que se le da a la "Fuerza Armada Bolivariana" en su configuración y funcionamiento, toda sometida al Jefe de Estado, y con la creación del nuevo componente de la **Milicia Popular Bolivariana.**

Además, en particular, conforme a las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* formuladas por el Consejo Presidencial, dado el carácter acentuadamente **regresivo y represivo** que contienen en materia de protección y garantía de derechos humanos, la intención de sus redactores fue buscar configurar al Estado como **Estado Policial**, lo que sin duda orienta el sentido de las futuras reformas anunciadas.

En esta forma, siete años después de la sanción de la Constitución de 1999, el mismo Presidente de la República que en aquél

momento motorizó la concepción y sanción de dicha Constitución a través de sus seguidores quienes controlaron totalmente la Asamblea Constituyente; en 2007 anuncia el propósito de cambiar de nuevo la Constitución de 1999, pero con el objeto, **de transformar, ahora si, radicalmente, el sistema político constitucional venezolano**, estableciendo un **Estado Centralizado del Poder Popular, como Estado Socialista, de economía estatal y centralizada, y como Estado Militarista**, lo que se aparta radicalmente de la concepción del Estado civil social y democrático de derecho y de justicia, de economía mixta que reguló la Constitución de 1999. Con las reformas propuestas, además, materialmente **desaparece la democracia representativa y las autonomías político territoriales**, sustituyéndosela por una supuesta democracia “participativa y protagónica” controlada total y centralizadamente por el Jefe de Estado, en la cual queda proscrita toda forma de descentralización política y autonomía territorial.

Nuestro propósito en estas notas, es analizar el sentido y alcance del “**Anteproyecto, para la 1era. Reforma Constitucional, Propuesta del Presidente Hugo Chávez, Agosto 2007**” (en lo adelante *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*) que ha presentado el Presidente de la República a la Asamblea Nacional. Sin embargo, tratándose de un “Anteproyecto” que por esencia es susceptible de cambios, modificaciones y adiciones en las tres discusiones que tiene que darle la Asamblea Nacional, es obligante, además, analizar las **Propuestas de Reforma Constitucional formuladas en junio de 2007 por la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional** (en lo adelante *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*) presidida por la Presidenta de la propia Asamblea Nacional, y como se ha dicho, integrada entre otros por el Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional y otros diputados; la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; el Defensor del Pueblo; el Ministro del Trabajo; la Procuradora General de la República y el Fiscal General de la Republica; lo cual haremos confrontándolas, en cada caso, con los aspectos más relevantes del texto vigente de la Constitución de 1999 que se busca destruir, precisamente para entender lo que se está proponiendo.

Insistimos, es obligante analizar ambas propuestas, pues las formuladas por el Presidente de la República en su Anteproyecto, si bien sólo se refieren formalmente a 33 artículos de los 350 de la Constitución, lo que en ellas se propone conlleva necesariamente modificaciones en casi todos los otros artículos a los que se refieren las propuestas de reforma formuladas por el Consejo Presidencial. Por ello, el anuncio oficial que hizo el Presidente de la República de que su propuesta de reforma sólo modifica “menos de 10% del articulado de la Constitución vigente”¹⁰, en definitiva es un fraude más, para engañar al pueblo, pues el carácter sustancial de las mismas afecta casi todo el texto constitucional, de manera que de aprobarse el anteproyecto muchas otras normas deberán ajustarse a dichas reformas, tal como lo ha “reconocido” la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, correspondiendo a la Asamblea realizar las modificaciones¹¹, precisamente conforme a las Propuestas ya elaboradas por el Consejo Presidencial. Además, se insiste, se trata de una “primera reforma”, por lo que sin duda vendrán otras.

La orientación de las reformas constitucionales que se han propuesto en 2007, en todo caso, derivan de ambos documentos, que se complementan, por lo que sería un engaño más en el que no se puede caer, analizar sólo y aisladamente lo que formalmente propuso el

10 Véase *El Universal*, Caracas 16-08-2007 (Política). Por lo demás, ese es el titular de una de las notas de “Prensa Presidencial/Marynés Ladera”, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas 16-08-2007.

11 En este sentido llama la atención lo afirmado el 17-08-2007 por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Presidenta de la Sala Constitucional y miembro del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional en el sentido de que, según reseñó Juan Francisco Alonso: “los diputados de la Asamblea Nacional no están facultados para realizar ninguna modificación distinta a las 33 que planteó el jefe del Estado, **salvo que alguno de los cambios contenidos en el proyecto de reforma altere otras normas.**” “La reforma fue planteada por el Presidente, por lo tanto es lo que presentó el Presidente lo que debe ser estudiado (...) Si (algún artículo) tuviese **conexión con los que se van a reformar, entonces por técnica legislativa deberían adecuarse, porque no puede haber artículos contradictorios**”, afirmó, al ser consultada sobre la posibilidad de que el Parlamento cambie alguna de las normas referidas a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial”. Véase en *El Universal*, 18-08-07.

Presidente en agosto de 2007 y no lo que propuso su Consejo Presidencial en junio de 2007, integrado por los más altos funcionarios del Estado. Tanto el Presidente de la República como su Consejo, dada la trascendencia de los cambios propuestos, debieron haber recurrido al procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente regulado en los artículos 347 y siguientes de la Constitución y no al procedimiento de "reforma constitucional" previsto en los artículos 342 y siguientes del texto fundamental. Al hacerlo, comenzaron el proceso de reforma violando la Constitución¹².

Por otra parte, el Presidente de la República en la presentación del Anteproyecto ante la Asamblea Nacional, fue marcadamente explícito en anunciar que se trataba de un *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional*, lo que significa que vendrán otras reformas futuras, cuyo contenido puede desde ya deducirse de las propuestas de reforma de la Constitución elaboradas por el **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución**. De allí, además, lo indispensable que resulta el análisis de estas.

12 En este sentido el Rector del Consejo Nacional Electoral, Sr. Vicente Díaz, el día 16-08-2007 indicó "que la propuesta presidencial para reformar el texto constitucional modifica las disposiciones fundamentales y por ello sería necesario convocar una Asamblea Constituyente para su aprobación". Véase en **Unión Radio, 16 de agosto de 2007**, <http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=212503>. El inicio del procedimiento de reforma ante la Asamblea Nacional, por tanto, podría ser impugnado ante la Jurisdicción Constitucional, por inconstitucionalidad. Sin embargo, el día 17-08-2007, adelantándose a cualquier impugnación y emitiendo opinión impunemente prejuzgando cualquier asunto, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Presidenta de la Sala Constitucional (es decir de la Jurisdicción Constitucional) y miembro del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional, según reseñó el periodista Juan Francisco Alonso: "dejó en claro que la Sala Constitucional no tramitará ninguna acción relacionada con las modificaciones al texto fundamental, hasta tanto éstas no hayan sido aprobadas por los ciudadanos en el referendo. "Cualquier acción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad", precisó". Véase en *El Universal*, 18-08-07.

Ahora bien, para precisar el sentido y alcance de las propuestas de reformas constitucionales formuladas en 2007, y además, para evidenciar que las mismas afectan los aspectos más fundamentales del Estado, **excepción hecha de las que se refieren a los derechos laborales (arts. 87 y 90) que no justifican reforma constitucional alguna pues lo que se propone puede establecerse mediante ley**, las analizaremos a continuación, dividiendo este estudio en las siguientes ocho partes, en las que analizaremos:

I. *Los cambios en los principios fundamentales de la organización del Estado*, que buscan transformar el Estado democrático descentralizado en un Estado socialista centralizado.

II. *Los cambios en el sistema político*, que buscan transformar la democracia representativa en una supuesta participación popular conducida por el Poder Central.

III. *Los cambios en la forma del Estado*, que buscan eliminar definitivamente los vestigios de Federación centralizada mediante la centralización total del Estado.

IV. *Los cambios en la organización del Poder Nacional*, que buscan acentuar el presidencialismo.

V. *Los cambios en la Constitución económica*, que buscan transformar un Estado social y promotor de la economía mixta, en un Estado socialista de economía estatal centralizada y confiscatoria.

VI. *Los cambios en los derechos laborales*: una “reforma” constitucional inútil;

VII. *Los cambios en el régimen de la Fuerza Armada*, que buscan transformar el Estado civil en un Estado Militarista.

VIII. *El sentido de las “futuras” reformas constitucionales ya anunciadas*

PRIMERA PARTE

LOS CAMBIOS EN LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO: DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DESCENTRALIZADO AL ESTADO SOCIALISTA CENTRALIZADO

El Presidente de la República, durante todo el año 2007, y en particular en su Discurso de Presentación del Anteproyecto de Constitución ante la Asamblea Nacional ha señalado que el propósito central de la reforma propuesta es **“la construcción de la Venezuela bolivariana y socialista”** (art. 4); es decir, sembrar **“el socialismo en lo político y económico”**, lo que no se hizo en la Constitución de 1999. Cuando ésta se sancionó -dijo- **“no proyectábamos el socialismo como camino”**, agregando, que **“así como el candidato Hugo Chávez repitió un millón de veces en 1998, “Vamos a Constituyente”, el candidato Presidente Hugo Chávez dijo: “Vamos al Socialismo”, y todo el que votó por el candidato Chávez, votó por ir al socialismo”**¹³, de manera que por ello, el Anteproyecto de Constitución que presentó, es para **“la construcción del Socialismo Bolivariano, el Socialismo venezolano, nuestro Socialismo, nuestro modelo socialista”** (p. 34), cuyo **“núcleo básico e indivisible”** es **“la co-**

13 Es decir, se pretende imponer al 56% de los votantes que no votaron por la reelección presidencial, la voluntad expresada por sólo el 46% de los votantes inscritos en el Registro Electoral que votaron por la reelección del Presidente. Según las cifras oficiales del CNE, en las elecciones de 2006, de un universo de 15.784.777 votantes inscritos en el Registro Electoral, sólo 7.309.080 votaron por el Presidente.

munidad", "donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes, tendrán el poder de construir su propia geografía y su propia historia" (p. 23). Y todo ello bajo la premisa de que "**sólo en el socialismo será posible la verdadera democracia**" (p. 35), pero de una supuesta "democracia" que, como lo propuso el Presidente en su proyecto de reforma del artículo 136 de la Constitución, "**no nace del sufragio ni de elección alguna**, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población". Es decir, una "democracia" que no es democracia, pues no hay democracia sin elección de representantes.

Todas estas propuestas las resumió el Presidente en su Discurso, así: "en el terreno político, profundizar la **democracia popular bolivariana**; en el terreno económico, preparar las mejores condiciones y sembrarlas para la construcción de un **modelo económico productivo socialista**, nuestro modelo, lo mismo en lo político la **democracia socialista**; en lo económico, el modelo productivo socialista; en el campo de la Administración Pública incorporar novedosas figuras para aligerar la carga, para dejar atrás el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia administrativa, cargas pesadas del pasado, que todavía tenemos encima como rémoras, como fardos en lo político, en lo económico, en lo social" (p. 74).

Y todas estas propuestas de construcción del socialismo, además, el Presidente las vinculó al proyecto de Bolívar elaborado en 1819, el cual -dijo- "**es perfectamente aplicable a un proyecto socialista: perfectamente se puede tomar la ideología bolivariana originaria, como elemento básico de un proyecto socialista**" (p. 42)¹⁴.

14 Debe recordarse que solo un mes antes del Discurso del Presidente de la República en la presentación de su Anteproyecto de reforma de la Constitución, quien fuera su Ministro de la Defensa hasta el 18-07-2007, General en jefe, Raúl Baduel, en su discurso al dejar el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, había dicho que el llamado del Presidente "a construir el **Socialismo del Siglo XXI**, implica la **necesidad imperiosa y urgente de formalizar un modelo teórico propio y autóctono de Socialismo que esté acorde a nuestro contexto histórico, social, cultural y político**", pero que "este modelo teórico **hasta los momentos, ni existe ni ha sido formulado**".

Estas propuestas, sin duda, tocan las bases fundamentales del Estado, en particular, en relación a la ampliación constitucional de la llamada doctrina bolivariana; a la sustitución del Estado democrático y social de derecho por el Estado Socialista; a la eliminación de la descentralización como política de Estado en aras de la participación política; a la desarticulación de la organización de la Administración Pública, y a la eliminación definitiva de la disciplina presupuestaria y del principio de la unidad del tesoro.

I. LA DOCTRINA BOLIVARIANA COMO SUPUESTA DOCTRINA DEL ESTADO SOCIALISTA

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999, fue el cambio de la denominación de la República de Venezuela por el de “República Bolivariana de Venezuela” (art. 1), que fue propuesta por el Presidente de la República en su trabajo *Ideas Fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República*, (Caracas 05-08-99) presentado a la Asamblea Nacional Constituyente. Ello, si bien fue rechazada por la mayoría oficialista de los constituyentes en la primera discusión del proyecto de Constitución, luego estos cambiaron radicalmente su parecer, aprobándola en segunda discusión (*Gaceta Constituyente (Diario de Debates)*, Noviembre 1999-Enero 2000, Sesión de 12-11-99, N° 42, pp. 4 a 6).

El anterior nombre de “República de Venezuela”, había sido el que había tenido la República entre 1811-1821 y luego, desde 1830 hasta 1999, con la sola excepción del período 1821-1830 cuando Venezuela desapareció como Estado independiente al ser integrada a la República de Colombia, precisamente a propuesta de Simón Bolívar. La verdad es que esta última organización política fue la que respondió a lo que podría considerarse una concepción “bolivariana” del Estado, donde Venezuela simplemente no existió como tal.

El cambio de nombre, por tanto, en 1999 nada tenía que ver con Simón Bolívar y su pensamiento, y ni siquiera con la idea de construcción del socialismo -pues incluso, como lo dijo el Presidente en su discurso del 15 de agosto de 2007, en ese momento no estaba planteado-, y realmente obedeció a una motivación político partidaria.

ria, partisana o partidista que inicialmente derivó de la denominación del Movimiento político que había sido establecido por el Presidente de la República que, como partido político, sin embargo no podía funcionar con esa denominación por utilizar el nombre del Libertador. De manera que fue el “partido bolivariano” el que le dio el nombre a la República, habiéndose hecho en la Constitución referencia al tema “bolivariano”, además, en el artículo 107, al referirse a la obligatoriedad de la enseñanza en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, de los principios del **ideario bolivariano**.

La doctrina bolivariana, ahora identificada por el Presidente de la República con el modelo socialista político económico del Estado, además de identificar al Estado mismo, es decir, a la República, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se lo utiliza para afirmar que “**la Republica Bolivariana de Venezuela es el producto histórico de la confluencia de varias culturas**” (art. 100), y además, para calificar a la Fuerza Armada, como **Fuerza Armada Bolivariana** (art. 156,8; 236,6; 328 y 329) y a sus componentes como **Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana, Guardia Territorial Bolivariana y Milicia Popular Bolivariana** (Art. 329). Además, en el artículo 328, se propone que las funciones de la Fuerza Armada Bolivariana para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, se deben realizar “mediante el estudio, planificación y ejecución de la **doctrina militar bolivariana**”.

El tema de la doctrina bolivariana como doctrina del Estado, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también se formuló para agregar en varios artículos, así: en el artículo 152 sobre los principios que deben guiar las relaciones internacionales de la República, se propone agregar que “**se rigen por la Doctrina Bolivariana**”; y también, como lo propuso el Presidente en su Anteproyecto, para la denominación de la **Fuerza Armada Bolivariana** en los artículos 236,6; 266,3; y 291.

II. LA SUSTITUCIÓN DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA POR EL ESTADO SOCIALISTA

El artículo 2 de la Constitución define a Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, con lo que se sigue la tradición del constitucionalismo contemporáneo construido, precisamente, para diseñar un **Estado no socialista**, tal como se recogió en la Constitución de la República Federal de Alemania de 1949 (art. 20,1), en la Constitución española de 1978 (art. 1º) y en la Constitución de Colombia de 1991 (art. 1º).

En esta concepción de Estado liberal de economía mixta no socialista, la idea de **Estado social** es la de un Estado con obligaciones sociales, de procura de la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en la actividad económica y social, como Estado prestacional. Tal carácter social deriva principalmente del valor fundamental de la igualdad y no discriminación (arts. 2 y 21); y de la declaración del principio de la justicia social como base del sistema económico (art. 299).

El **Estado democrático**, es el que fundamenta toda la organización política de la Nación en el principio democrático representativo, que deriva del Preámbulo (sociedad democrática) y de los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Constitución, al identificar como valor fundamental del constitucionalismo a la democracia, que se tiene que ejercer mediante representantes (democracia representativa) además de mediante elementos de democracia directa.

El **Estado de derecho** es el Estado sometido al imperio de la Ley o legalidad como lo señala el Preámbulo, lo que implica el sometimiento de la actuación del Estado a controles judiciales independientes (arts. 7, 137, 258, 334 y 336); lo que implica también que se lo defina como un **Estado de justicia**, que tiene que tender a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal (art. 26).

La propuesta de crear un **Estado Socialista** en lugar del tradicional Estado democrático y Social de derecho y de justicia, aún cuando el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007* no haga mención al artículo 2 de la Constitución, es

evidente que el mismo resultará cambiado radicalmente, pues **un modelo de Estado Socialista es absolutamente incompatible con el Estado democrático y Social de derecho y de justicia**. Es un engaño más, por tanto, formular una propuesta de reforma constitucional para establecer un Estado Socialista sin que se cambie el artículo 2 de la Constitución. Ello, sin embargo, se ha hecho para pretender argumentar que no se están tocando los aspectos fundamentales del Estado y que por ello no se recurrió al procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución¹⁵. Es decir, un fraude más a la Constitución.

En particular, las referencias al **Estado Socialista** están en las propuestas de reforma referidas al artículo 16, donde se crean las Comunas y Comunidades como “el núcleo espacial básico e indivisible del **Estado Socialista Venezolano**”; al artículo 70, donde al definirse los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio directo de su soberanía, se indica que es “para la **construcción del socialismo**”, haciéndose mención a las diversas asociaciones “constituidas para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la **solidaridad socialista**”; al artículo 112 donde se indica, en relación con el modelo económico del Estado, que es para crear “las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una **Economía Socialista**”; y al artículo 113 que precisa la necesidad de la constitución de “empresas mixtas y/o unidades de **producción socialistas**”.

Además, en el Anteproyecto del Presidente se busca derogar y sustituir el artículo 158 de la Constitución de 1999 **que define a la descentralización como política nacional**, para “**profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales**”, y establecer, en cambio, sólo que “El Estado promoverá como política nacional, **la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder**

15 Ello lo declaró la Presidenta de la Asamblea Nacional el 23 de agosto de 2007 al aprobarse el Anteproyecto de Reforma Constitucional, en bloque, en primera discusión. Véase *El Universal*, Caracas, 24-08-2007.

y creando las mejores condiciones para la construcción de una **Democracia Socialista**".

La misma orientación que adopta el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007* fue la que se siguió en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, entre las cuales se destaca la referencia en el artículo 62 en relación con la participación del pueblo en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, indicándose que ello "constituye la esencia del ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo y de su protagonismo en función del desarrollo social integral para la **construcción de la sociedad socialista**"; al artículo 70, que al igual que lo indicado en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, también se precisan los "medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio directo de su soberanía, para la **construcción del socialismo**"; al artículo 113 sobre la prohibición de los monopolios, donde se indica que ello es "en aras de materializar los **principios de la economía socialista** y humanista"; al artículo 299, sobre los principios del régimen socioeconómico de la República, en el cual se indica que su objetivo general es "asegurar el establecimiento de una **sociedad socialista** que propenda al desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad"; al artículo 300 que se refiere a la creación de empresas públicas, donde se precisa que en lugar de que las mismas realicen "actividades sociales o empresariales" como indica la Constitución de 1999, se busca regularlas sólo "para la promoción y realización de los fines de la **economía socialista**"; y al artículo 316 sobre el sistema tributario, donde al regularse el principio de la progresividad se dispone que su objetivo es que "paguen cualitativa y cuantitativamente más tributos quienes mayores niveles de egresos y patrimonios posean, todo bajo la óptica de la solidaridad y el **modelo tributario socialista**".

III. LA ELIMINACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO

La Constitución de 1999 en su artículo 4 precisó que “La República Bolivariana de Venezuela es un **Estado federal descentralizado** en los términos consagrados por esta Constitución”; incorporando algunos aspectos que se habían establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, relativos a la transferencia a los Estados de competencias que eran del Poder Nacional. La descentralización en esta forma, como política de Estado se reflejó en varias normas de la Constitución, como sucedió, por ejemplo, en el artículo 6 (que define al gobierno como *descentralizado*), en el artículo 16 (al hablar de “la autonomía municipal y la **descentralización** político-administrativa”; en el artículo 84 (que se refiere al sistema público nacional de salud *descentralizado*); en los artículos 269 y 272 (sobre la administración de justicia y penitenciaria descentralizada); en el artículo 285 (sobre la administración electoral descentralizada); y en el artículo 300 (sobre organización administrativa económica del Estado funcionalmente descentralizada).

Pero además, respecto de todas las actividades públicas, la Constitución de 1999 al establecer los principios de la *política nacional de descentralización*, exige que la misma “**debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población** y creando las mejores condiciones, tanto **para el ejercicio de la democracia** como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales” (art. 158). Por ello, el artículo 185 identificó al Consejo Federal de Gobierno como “el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de *descentralización* y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios”; y el artículo 166 de la Constitución dispuso que los Estados “*descentralizarán* y transferirán a los Municipios los servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público”; y en general, el artículo 184 exigió que

mediante ley, el Estado cree “**mecanismos abiertos y flexibles** para que los Estados y los Municipios *descentralicen* y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlo”, entre otros aspectos, promoviendo “la creación de nuevos sujetos de *descentralización* a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estatales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estatales y municipales”(art. 184,6).

Todo esto se elimina en las propuestas contenidas en el *Ante-proyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, así como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en las cuales siguiendo la orientación de esa práctica política de los últimos años, definitivamente se busca **centralizar totalmente el Estado y eliminar todo vestigio de descentralización como organización y política pública, de autonomía territorial y de democracia representativa a nivel local**, es decir, de la unidad política primaria en el territorio. Ello, sin duda toca un aspecto fundamental y medular del Estado que no puede ser cambiado mediante una reforma constitucional¹⁶.

16 Con toda precisión, la periodista Sara Carolina Díaz, en una nota publicada (“6 artículos sobre descentralización son susceptibles a modificación”) en el diario “*El Universal*” observó, con razón, que “al menos 6 artículos de la Carta Magna referidos a la descentralización, que no fueron mencionados en la propuesta de reforma, son susceptibles de sufrir modificaciones, luego de que el Presidente propusiera modificar el artículo 158 de manera tal de sustituir la descentralización como política nacional por la participación protagónica, entre otros. Esos artículos son el 84, 157, 165, 269, 272 y 294. La palabra descentralización aparece de modo explícito en 14 artículos del texto constitucional de 1999 y en 5 de ellos el Presidente propone eliminar dicha palabra. De los otros 9 artículos, que se supone no serán tocados, estos 6 mencionan la descentralización en distintos ámbitos como cárceles, salud y funciones de la Asamblea Nacional, y los otros 3 están contenidos en el preámbulo y en parte de los 9 de los principios fundamentales de la Carta Magna. Estos principios son considerados intocables por el oficialismo para no justificar una Constituyente. Sin embargo fueron, al menos en lo referente a la descentralización, trastocados (y elimina-

En efecto, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, así como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone eliminar todo vestigio de “descentralización política”, comenzando por el principio fundamental de **descentralización y autonomía territorial** del artículo 16 de la Constitución de 1999 que exige que la división político territorial de la República garantice siempre “**la autonomía municipal y la descentralización político administrativa**”, como elementos básicos de la democracia de participación (autonomía y descentralización), proponiéndose en cambio una división territorial que sólo garantice “la participación del Poder Popular.”

Además, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se deroga y elimina el artículo 158 de la Constitución de 1999 que como se indicó, definió la *política nacional de descentralización* para “profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”. En lugar de esta norma, en el Anteproyecto se propone redactar el artículo 158 así: “**El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una Democracia Socialista**”, constituyendo esta redacción, como lo indicó el Presidente de la República en su Discurso de presentación del Anteproyecto, “el desarrollo de lo que nosotros entendemos por descentralización, porque el concepto cuartorepublicano de descentralización es muy distinto al concepto que nosotros debemos manejar. Por eso, incluimos aquí la participación pro-

dos) en la reforma que plantea el presidente Chávez a los artículos 16, 184, 185, 300 y el mencionado 158. El artículo 4 parte de estos principios fundamentales “intocables”, establece que Venezuela es un estado federal descentralizado. La presidenta de la AN, Cilia Flores, ha insistido en que estos principios no serán modificados. Sin embargo, ha reconocido que es probable que modifiquen artículos más allá de los 33 propuestos. La justificación es que otros artículos pueden verse afectados. La presidenta del TSJ, Luisa E. Morales, dijo que sólo deben cambiar los artículos de la propuesta y los que tengan relación directa con estos artículos”. Véase en *El Universal*, Caracas 24, 08-2007.

tagónica, la transferencia del poder y crear las mejores condiciones para la construcción de la democracia socialista”.

Por otra parte, en cuanto a las referencias que se hacen en los artículos 269 y 272 (administración de justicia y penitenciaria **descentralizada**) y en el artículo 295 (administración electoral **descentralizada**) de la Constitución sobre la descentralización, las mismas se propone sean eliminadas en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, e, incluso, la palabra descentralización se elimina respecto de las empresas públicas en el artículo 300 tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*.

IV. LA FRAGMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Una de las innovaciones más importantes de la Constitución de 1999 fue el haber incorporado una normativa específica destinada a regular los principios fundamentales de la Administración Pública del Estado, buscando su racionalización, y en especial disponiendo en el artículo 141, como principios fundamentales, primero, que la Administración Pública **está al servicio de los ciudadanos**; segundo, que se fundamenta en los principios de **honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública**, y tercero, que debe actuar con **sometimiento pleno a la ley y al derecho**, lo que implica la formulación constitucional del **principio de legalidad**.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone eliminar todos estos principios fundamentales sobre la Administración Pública, eliminando el principio de que como un universo está al **servicio de los ciudadanos**, sustituyendo la norma del artículo 141 por otra en la que se dispone que **está al sólo servicio del Estado, eliminándose el derecho de los ciudadanos a que la Administración esté a su servicio**. Se propone en efecto, que el artículo 141 disponga que: “Las administraciones públicas son las estructuras organizativas **destinadas a servir de**

instrumento a los poderes públicos, para el ejercicio de sus funciones, y para la prestación de los servicios”.

En la redacción que se propone del artículo 141, además, se busca fragmentar a la Administración Pública, pasándose de un régimen universal de “la Administración Pública” a regular a “las administraciones públicas”, las cuales, incluso, contra toda técnica legislativa, se las clasifica en las siguientes dos “categorías”: **“las administraciones públicas burocráticas o tradicionales**, que son las que atienden a las estructuras previstas y reguladas en esta constitución y las leyes; y **“las misiones”**, constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de **sistemas excepcionales, e incluso, experimentales**, los cuales serán **establecidos por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales”**.

Es decir, con la reforma constitucional propuesta, en lugar de corregir el descalabro administrativo producido por la indisciplina presupuestaria de fondos asignados a “misiones” fuera de la organización general del Estado, se pretende constitucionalizar el desorden administrativo, calificándose a las estructuras administrativas del Estado como “burocráticas o tradicionales”, renunciando a que las mismas sean reformadas para convertirlas en instrumentos para precisamente atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población. Y todo ello, dejando la organización de la Administración Pública **a la sola voluntad del Presidente de la República** mediante reglamentos.

V. EL ABANDONO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y DE LA UNIDAD DEL TESORO

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, aún cuando no se propone reforma alguna expresa en relación con los artículos 313 y 314 de la Constitución que establecen el principio general de la disciplina presupuestaria, con la propuesta de reforma que se formula en relación con el artículo 321 se está eli-

minando la disciplina presupuestaria como principio fundamental de la administración económica y financiera del Estado.

En efecto, conforme a los artículos 313 y 314 de la Constitución, la administración económica y financiera del Estado se tiene que regir por un presupuesto aprobado anualmente por la Asamblea Nacional mediante ley, en el cual deben indicarse las estimaciones de ingresos públicos y los gastos públicos anuales que puede efectuar el Ejecutivo nacional, de manera tal que en el artículo 314 se declara que “no se hará ningún tipo de gasto que no hay sido previsto en la ley de Presupuesto”, siendo la excepción, sólo, en casos de créditos adicionales al presupuesto para gastos no previstos o con partidas insuficientes, que también deben ser aprobados por la Asamblea nacional.

Todo este sistema de disciplina presupuestaria que exige que en el presupuesto estén la totalidad de los ingresos estimados y de los gastos proyectados, se busca desquiciar formalmente, al proponerse en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, la reforma del artículo 321, en el cual, en lugar de establecer, como lo hace la Constitución de 1999, que la ley debe establecer “un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios”, el cual debe funcionar bajo los “principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”; se propone en relación con la **administración de las reservas internacionales (art. 318)**, que “**el Jefe del Estado establecerá**, en coordinación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las **reservas necesarias para la economía nacional**, así como el monto de las **reservas excedentarias**, las cuales se destinarán a **fondos que disponga el Ejecutivo Nacional** para inversión productiva, desarrollo e infraestructura, **financiamiento de las misiones** y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación”, con lo que se propugna la ruptura definitiva del principio de la unidad del Tesoro.

En esta forma, se busca constitucionalizar el mecanismo de financiamiento paralelo al presupuesto, mediante **fondos creados por el sólo Ejecutivo Nacional** destinado a las misiones, que como se dijo, también se propone que estén a cargo de “misiones” como organizaciones administrativas públicas paralelas a la Administración Pública burocrática y tradicional”.

Se observa, sin embargo, que en la propuesta de reforma del artículo 184 de la Constitución que se formula en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se precisa que será la ley la que debe crear “un Fondo destinado al financiamiento de los proyectos de los Consejos Comunales”.

SEGUNDA PARTE:

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA POLÍTICO: DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA SUPUESTA PARTICIPACIÓN POPULAR CONDUCTIDA POR EL PODER CENTRAL

I. LA ELIMINACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A NIVEL LOCAL Y SU SUSTITUCIÓN POR UNA SUPUESTA “PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA”

El artículo 5º de la Constitución, se establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Con esta norma, si bien se siguió la tradición republicana de la soberanía popular iniciada en 1811, en particular, en la Constitución de 1999 el concepto de representatividad política (democracia indirecta) se complementó con la previsión del ejercicio directo de la democracia, mediante los mecanismos de participación previstos en el artículo 62 que consagra el derecho de todos los ciudadanos “de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes”.

La democracia, por tanto, para ser tal, tiene que ser representativa, pudiendo **además**, establecerse mecanismos de democracia directa; y por ello, en la Constitución de 1999 se exige que la representatividad democrática **siempre tiene que tener su fuente en elecciones populares universales, directas y secretas** (art. 70), destinadas a elegir los titulares de los órganos que ejercen el Poder Público

que, por supuesto, son los que establece la Constitución conforme a los principios de distribución y separación del Poder Público (art. 136). En el texto de la Constitución de 1999 si bien es cierto que se eliminó la palabra “representativo” para calificar al gobierno (art. 6), se precisa en dicha norma que debe ser “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Sin embargo, no existe ni puede existir democracia que no sea representativa, siendo de la esencia del régimen político democrático la idea de que el pueblo, titular de la soberanía, no la ejerce directamente, sino a través de representantes.

Esta democracia representativa, por supuesto, no se opone a democracia participativa, y ambas se diferencian de los mecanismos de democracia directa como la que deriva de los referendos (consultivas, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios) (arts. 78 ss.) que perfeccionan la democracia, al igual que de las consultas populares, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas (art. 62), todas reguladas como formas de participación política en la Constitución.

Sin embargo, la democracia representativa no puede pretender ser sustituida por la “democracia participativa”; ello es una falsedad para no calificarla de ilusión. La democracia, para que sea participativa, además de esencialmente representativa, lo que tiene que permitir al ciudadano es participar en los asuntos públicos, **teniendo acceso al poder cuando lo tiene que tener cerca**, lo que necesariamente implica un bien arraigado y desarrollado sistema de gobierno local, en cada lugar, asentamiento urbano o rural, que sólo puede estar **basado en la descentralización política, es decir, en la creación de entidades políticas autónomas que permitan el autogobierno local**. En ese sentido, participar es sólo posible cuando mediante la descentralización, se crean autoridades locales en los niveles territoriales más pequeños, lo que implica desparramar el poder.

Ello, por supuesto, es contrario a la concentración del Poder y al centralismo que es lo que encubriéndolo con el tema del socialismo y la “participación protagónica” es lo que se busca en las propuestas

de reformas constitucionales de 2007, al pretender eliminarse de la Constitución, como antes se ha comentado, toda referencia a la descentralización política. Lo que se está proponiendo, en definitiva es la sustitución de la democracia representativa por una supuesta “democracia participativa”, pero acabando con la propia democracia como régimen político, tratando de sustituirla por un régimen autoritario, centralizador y concentrador del Poder que impide la participación política al no existir entidades locales autónomas. Ello, como se dijo, se busca con las propuestas para **eliminar todo vestigio de autonomía territorial y de descentralización política, con lo que no puede haber democracia participativa**. Como se dijo, la participación democrática exige la existencia de **entes políticos territoriales autónomos**, sin los cuales aquella no pasa de ser una **simple movilización controlada desde el Poder Central**. Ello es lo que ocurre, precisamente, con los Consejos Comunales recién creados por ley, cuyos miembros **no son electos mediante sufragio sino designados bajo el control del propio Poder Ejecutivo Nacional**, lo cual se busca ahora consolidar constitucionalmente, con la propuesta de reforma del artículo 16 al referirse a la división territorial para supuestamente garantizar “la participación del Poder Popular”.

En efecto, conforme al artículo 16 del *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, el Poder Popular se desarrolla de abajo hacia arriba, a partir de las **Comunidades**, “cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del **Estado Socialista Venezolano**, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia”. Estas **Comunidades** estarán agrupadas en **Comunas**, que serán “áreas o extensiones geográficas” que son “células geo-humanas del territorio”; y estas, a su vez, estarán agrupadas, en **ciudades** que se conciben como “**la unidad política primaria de la organización territorial nacional**”, entendidas “**como todo asentamiento poblacional dentro del Municipio**”. En esta forma, es a partir de la **Comunidad y la Comuna**, que “**el Poder Popular desarrollará formas de agregación comunitaria Político-Territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de Democracia Directa.**”

La propuesta de reforma formulada en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, respecto del artículo 136, en todo caso, es precisa al referirse al Poder Popular y establecer que el mismo **“se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”**, pero que siendo el pueblo **“el depositario de la soberanía”** el mismo **“la ejerce directamente a través del Poder Popular”**, con la precisión de que **“éste no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”**.

En definitiva, lo que se busca en esta “primera reforma”, es poner fin a la democracia representativa a nivel local, y con ello, de todo vestigio de autonomía política territorial que es la esencia de la descentralización.

Esto mismo es lo que se había formulado en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en relación con el artículo 61, al buscarse agregar que **“La participación del pueblo en forma efectiva, suficiente y oportuna en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados constituye la esencia del ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo y de su protagonismo”**; sin garantizar que ello sea mediante entes político territoriales autónomos, lo que hace la propuesta esté vacía de democracia representativa. Además, respecto del artículo 62, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se busca cambiar el **sentido y propósito de la participación democrática**, calificándola solo como el mecanismo para la construcción de una **sociedad socialista**, proponiéndose que la norma disponga que **“La participación del pueblo en forma efectiva, suficiente y oportuna en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados constituye la esencia del ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo y de su protagonismo en función del desarrollo social integral para la construcción de la sociedad socialista”**.

Por otra parte, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, los medios de participación política del artículo 70, se los identifica como medios del pueblo en ejercicio **directo** de su soberanía **“para la construcción del socialismo”**, agregándose entre los medios de participación de orden político, además, a los **Consejos Comunales**. Las Propuestas también buscan agregar a los medios de participación en lo social y económico, a **“la gestión directa y democrática por parte de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social, colectiva o del Estado”** y a **“las empresas de producción social, las organizaciones financieras comunales y microfinancieras”**.

Por otra parte, en cuanto a la eliminación de la **democracia representativa a nivel local**, como resulta del *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007* y en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, ello se reafirma en materia de elección de los jueces de paz que en la Constitución se garantiza que debe ser **“por votación universal, directa y secreta”** y que en la propuesta de reforma del artículo 258, lo que se establece es que los jueces de **“paz. serán designados por la asamblea de ciudadanos por votación universal, directa y secreta”**, es decir, **eliminando el carácter popular de la elección**.

En definitiva, en nombre de la **“democracia participativa”** lo que se busca es eliminar la democracia representativa a nivel local, y sustituirla por una supuesta **“democracia directa”** de **“participación”** en asambleas de ciudadanos, comunidades, comunas y ciudades, **que no son entes políticos territoriales autónomos**, todas controladas desde el Poder Central; y si bien en las propuestas de reforma de los artículos 16 y 136 se habla de formas de autogobierno y del autogobierno de las ciudades, no se indica que los mismos deban ser el resultado de una elección popular.

Debe indicarse, por último, en relación con las organizaciones del Poder Popular que como la Constitución de 1999 reconoció el derecho de los trabajadores y de la comunidad, para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, para realizar

cualquier tipo de actividad económica (art. 118); ahora, conforme a las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca que en el artículo 118 se agregue, a los “**consejos comunales, organizaciones comunitarias, comunidades indígenas, empresas de producción social**”, con la precisión de que el Estado debe ejercer “**la supervisión e incluso la intervención** necesaria para evitar que se **desvíen** de su objetivo comunitario, cooperativo y de interés social, para constituirse en **meros instrumentos de intereses privados particulares**”.

II. LA ELIMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ALTERNABILIDAD REPUBLICANA CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN INDEFINIDA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Conforme al artículo 4 de la Constitución, el gobierno de la República y de todas las entidades políticas que la componen tiene que ser democrático alternativo, y de allí las limitaciones que la Constitución establece respecto de la reelección de funcionarios.

En efecto, en cuanto al Presidente de la República, el artículo 230, cambiando radicalmente la tradición constitucional anterior, estableció la posibilidad de la reelección inmediata del Presidente de la República, aún cuando por una sola vez, para un nuevo período; el artículo 192 dispuso que los diputados a la Asamblea Nacional podían ser reelegidos sólo “por dos periodos consecutivos como máximo”; el artículo 160 dispuso que los Gobernadores de Estado podían ser “reelegidos, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”; el artículo 162 dispuso que los legisladores a los Consejos Legislativos de los Estados podían ser reelegidos sólo “por dos periodos consecutivos como máximo”; y el artículo 174 dispuso que los Alcaldes podían ser “reelegidos, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se ha propuesto reformar el artículo 230, aumentando el período constitucional del Presidente de la República a **siete años**, y establecerse que el Presidente de la República “**puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo período**”.

III. EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE ASOCIACIÓN POLÍTICA Y EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS ACTIVIDADES ELECTORALES

En un marcado criterio reactivo contra los partidos políticos, en la Constitución de 1999 se eliminó tal expresión estableciéndose, en cambio, un conjunto de regulaciones contra lo que habían sido los partidos políticos tradicionales, pero garantizándose el derecho de los ciudadanos de asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección.

Ahora bien, uno de los problemas vinculados a los partidos políticos había sido el tema del financiamiento público de los mismos que regulaba la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, lo que había conducido a un acaparamiento inequitativo de dichos fondos. Los redactores de la Constitución reaccionaron contra ello, prohibiendo simplemente dicho financiamiento público y exigiendo control respecto del financiamiento privado de los partidos (art. 67), con lo que se retrocedió en lo que es la constante en todo el mundo democrático, habiéndose abierto, de hecho, la posibilidad de financiamiento público irregular e ilegítimo a los partidos de gobierno.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, al igual que en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca modificar la prohibición establecida en el artículo 67 de financiamiento de los partidos políticos con fondos provenientes del Estado, previéndose que **“el Estado podrá financiar las actividades electorales”**, pero sin indicarse si se trata de un financiamiento a los partidos políticos en general o a las actividades electorales del partido único socialista o de los candidatos a reelección. En las propuestas se establece además una remisión a la ley para establecer **“los mecanismos para el financiamiento, el uso de los espacios públicos y accesos a los medios de comunicación social en las campañas electorales, por parte de las referidas asociaciones con fines políticos”**.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se agregaba que la ley debía establecer esos mecanismos **“para el financiamiento transparente de las actividades electorales”**, el uso de los

espacios públicos y acceso a los medios de comunicación social en las campañas electorales, por parte de las asociaciones con fines políticos”.

Sin embargo, tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca eliminar la prohibición general que regula el artículo 67 de la Constitución de 1999, en el sentido de que “Las direcciones de las asociaciones con fines **políticos no podrán contratar con entidades del sector público**”. En un sistema de partido único oficialista, la eliminación en la propuesta es un llamado a la legitimación de la imbricación total entre el partido y el Estado.

Por otra parte, tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en la propuesta de reforma del artículo 67 se establece una prohibición general en cuanto al “financiamiento a las asociaciones con fines políticos o a quienes participen en procesos electorales por iniciativa propia, por parte de **gobiernos o cualquier otra entidad pública o privada extranjeros**”.

TERCERA PARTE:
LOS CAMBIOS EN LA FORMA DEL ESTADO:
DE LA FEDERACIÓN CENTRALIZADA A LA
CENTRALIZACIÓN TOTAL DEL ESTADO

La forma del Estado venezolano, desde que se creó la República en 1811, y luego, desde que se reconstituyó la República en 1830, ha sido siempre formalmente la de una **Federación**, en la cual el Poder Público está distribuido en el territorio entre **entidades políticas territoriales autónomas** en tres niveles: el nivel nacional (República), el nivel estatal (Estados) y el nivel municipal (Municipios), cuyas respectivas autonomías garantiza la propia Constitución.

Con todos sus altibajos, y a pesar de la tendencia a centralizar la Federación, esa ha sido la forma del Estado que siempre hemos tenido, y que implica la distribución vertical del Poder Público. Esta forma de Estado federal, sin embargo, aún cuando sin eliminarla formalmente, desaparece con las reformas propuestas, de nuevo, en fraude a la Constitución.

I. EL DESMORONAMIENTO DE LA FORMA FEDERAL DEL ESTADO

1. El vaciamiento del contenido territorial de la federación

En efecto, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, si bien no se elimina expresamente la Federación, la verdad es que de tal manera se la vacía de contenido, que materialmente desaparece.

En particular, en cuanto a los Estados y Municipios sobre cuya concepción se monta el sistema federal, conforme a la propuesta de reforma del artículo 16, si bien no se los elimina expresamente, de la norma **desaparece la garantía constitucional de la autonomía municipal y la descentralización político administrativa** que establece dicha norma de la Constitución de 1999 como condición esencial de la división territorial, sentándose las bases para vaciarlos de sentido y de competencias. Además, en cuanto a los Municipios, en la propuesta de reforma se les quita el carácter de **unidad política primaria** que el artículo 168 de la Constitución de 1999 les garantiza, y se dispone, en cambio, que “la unidad política primaria de la organización territorial nacional será **la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del Municipio, e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas**”.

Estas **Comunas** conforme al mismo artículo 16, “serán las células geo-humanas del territorio y **estarán conformadas por las Comunidades**, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia”. Y se concluye indicando que “a partir de **la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollará formas de agregación comunitaria Político-Territorial**, las cuales serán reguladas en la Ley, y **que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de Democracia Directa**”.

La propuesta de reforma del *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, en el artículo 16 agrega, además, que “la **Ciudad Comunal** se constituye cuando en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las **Comunidades** organizadas, las **Comunas** y los Autogobiernos Comunales, estando su creación a un referéndum popular **que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministros**”.

Pero además, en la propuesta de reforma del artículo 136 relativo al Poder Público, se precisa el esquema, indicándose que “**El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos co-**

municipales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”, y que el mismo, es decir, el Poder Popular “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”. Se trata, en definitiva, de la eliminación de la democracia representativa y de la autonomía política local, es decir, de la descentralización política como condición para la participación política.

2. *La nueva división territorial de la república sujeta al Poder Central y con autoridades no electas*

Con todo el esquema antes indicado, lo que se propone en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, es el descuartizamiento de la forma de federal del Estado que, como se dijo, implica la división política del territorio en “entidades políticas”, es decir, que gozan esencialmente de autonomía política territorial, y cuyo gobierno, como lo exige el artículo 6 de la Constitución, debe ser entre otros aspectos “electivo”.

En efecto, en lugar de la organización política de la República montada en la división del territorio nacional en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, todas con gobiernos democráticos electos mediante sufragio, en la reforma del artículo 16 que se propone en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, “el territorio nacional se conforma a los fines político-territoriales y de acuerdo con la nueva geometría del poder, por un **Distrito Federal** en el cual tendrá su sede la capital de la República, por los **Estados**, las **Regiones Marítimas**, los **Territorios Federales**, los **Municipios Federales** y los **Distritos Insulares**”, quedando “la vigencia de los Territorios Federales y de los Municipios Federales supeditada a la realización de un referéndum aprobatorio en la entidad respectiva”, ya que con la creación de los mismos se afecta la división política territorial de los Estados. Se dispone, sin embargo, que la organización político-territorial de la República se debe regir por una Ley Orgánica.

Además, conforme a la propuesta del mismo artículo 16, y dejando aparte las de orden local ya referidas mediante las cuales el Municipio se vacía en las Comunidades, comunas y ciudades, a partir de las cuales se propone desarrollar el Poder Popular, se busca autorizar al **Presidente de la República, en Consejo de Ministros**, para que “previo acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional”, pueda “**crear mediante decreto, Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca la Ley**”. Es decir, con la propuesta de reforma, la división político territorial de la República deja de ser una materia de rango constitucional como siempre lo ha sido, y se pretende que pase a ser una materia ni siquiera de regulación mediante ley, sino de la sola regulación ejecutiva.

Respecto de esas entidades territoriales nuevas, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se indica que los “**Distritos Funcionales**” que pueden ser conformados “por uno o más Municipios o Lotes Territoriales de estos, **sin perjuicio del Estado al cual pertenezcan**”, se crearán conforme a las características históricas, socio-económicas y culturales del espacio geográfico correspondiente, así como en base a las potencialidades económicas que, desde ellos, sea necesario desarrollar en beneficio del país”; y que la creación de los mismos “implica la elaboración y activación de una **Misión Distrital con el respectivo Plan Estratégico-funcional a cargo del Gobierno Nacional**, con la participación de los habitantes de dicho Distrito Funcional y en consulta permanente con sus habitantes”.

En cuanto a las **Ciudades federales**, conforme a la propuesta de reforma, su organización y funcionamiento debe hacerse “de conformidad con los que establezca la ley respectiva”, y en este caso, también implica “la activación de una Misión Local con su correspondiente plan estratégico de desarrollo”.

En cuanto a los **Territorios Federales, los Municipios Federales y las Ciudades Federales**, se trata, conforme a la propuesta de reforma, no de entidades políticas con alguna autonomía, sino de en-

tidades sujetas al Poder Central, de manera que se propone que sea “el Poder Nacional” el que designe a “las autoridades respectivas, por un lapso máximo que establecerá la Ley y sujeto a mandatos revocables”.

En cuanto a las “**Provincias Federales**”, en la propuesta de reforma se dispone que las mismas “se conformarán como unidades de agregación y coordinación de políticas territoriales, sociales y económicas a escala regional, siempre en función de los planes estratégicos nacionales y el enfoque estratégico internacional del Estado venezolano”, y se “constituirán pudiendo agregar indistintamente Estados y Municipios, sin que estos sean menoscabados en las atribuciones que esta Constitución les confiere”.

En forma esquemática, todas estas propuestas de división territorial que en general quedarían a la sola decisión del Poder Ejecutivo, darían lugar al siguiente esquema:

REPÚBLICA

<i>C. 1999</i>	<i>Reforma 2007</i>
Estados/Distrito Capital	Estados/ Distrito Federal
Territorios y Dependencias Federales	Territorios federales (art. 16; 156,11; 236,3), Regiones marítimas, Distritos insulares (art. 16); Dependencias federales (art. 156,10), Provincias federales (arts. 16; 156,11; 36,3), Territorios Comunales (art. 156,11)
	Distritos funcionales (art. 16).
	Misión Distrital, Misión Local (art. 16)
Municipios:	Municipios
unidad política primaria	Municipios federales (art. 16)

Otras entidades locales

Ciudad: **unidad política primaria** (art. 16)

Ciudades federales (arts. 16; 156,11; 236,3)

Ciudades Comunales (art. 16; 156,11)

Comunas (arts. 16; 18; 84)

Comunidades (art. 16; 18)

Asamblea de Ciudadanos
(Consejo Comunal) (arts.
70; 136; 184

(Consejos obreros, Consejos
campesinos, Consejos
estudiantiles) (art. 70; 136)

Como se dijo, si bien en las propuestas del *Anteproyecto* no se propuso la eliminación formal de los Estados y Municipios, sin embargo, como se verá, las propuestas en materia de distribución de competencias y de vaciamiento de las mismas en los Consejos Comunales, hacen que materialmente desaparezcan por inoperantes. Por otra parte, y salvo en el caso de los Estados y Municipios, todas las otras entidades territoriales se establecen sin garantía alguna de que sus gobiernos serán electos mediante sufragio universal, directo y secreto. Al contrario, como nuevas organizaciones que se integran al Poder Popular, lo que se propone en el artículo 136 es establecer que como “El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular”, **“este no nace del sufragio ni de elección alguna**, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”. Es decir, el principio del fin de la democracia representativa.

Todas estas propuestas del *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, en cierta forma ya se habían anunciado en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también en relación con el artículo 16, en el cual al buscarse cambiar la divi-

sión político territorial, solo se agrega a los “**territorios Comunales**” aún cuando sin definirse, y al disponerse que el objetivo de la división territorial era garantizar “la participación del **Poder Popular**”, cuya definición conceptual no se establece, ya que no se conoce la propuesta de reforma del artículo 136. En cuanto a la creación de los territorios federales especiales que conforme a la Constitución de 1999 exige que se haga mediante Ley Orgánica previa la realización de un referendo también, esta exigencia se busca eliminarla, y se le atribuye tal **facultad al Presidente de la República** previa aprobación de la mayoría de la Asamblea Nacional. Igual sucede con la creación de territorios Comunales.

La creación de estos territorios, por supuesto, afecta el de los Estados, y por ello, el artículo 16 de la Constitución de 1999 exige la participación activa de la población del mismo para aprobar mediante **referendo** toda afectación del territorio del Estado, lo que se **buscó eliminar** en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*.

3. *La nueva concepción de la Ciudad Capital sin autonomía política ni gobierno democrático local*

Una de las reformas importantes en la Constitución de 1999 fue la de asegurar definitivamente un régimen de gobierno local descentralizado y democrático para la ciudad capital, garantizando la autonomía municipal y la participación política de las diversas entidades que componen la ciudad. Por ello la figura del gobierno metropolitano a dos niveles: para asegurar el gobierno global (metropolitano) de la ciudad y a la vez, asegurar el gobierno local. En esta forma se eliminó el Distrito Federal que había quedado como vestigio decimonónico del esquema tradicional de las federaciones, en el cual la ciudad capital carecía de autogobierno.

En las propuestas de reforma constitucional que se han anunciado en 2007, lamentablemente, se propone volver al mismo esquema del siglo XIX, ya superado en todas las Federaciones del mundo, de ausencia de gobierno local en la ciudad capital.

En efecto, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, en relación con el artículo 18, se propone

eliminar el Distrito Capital y la organización municipal del mismo, y su sustitución por un **Distrito Federal**, que se propuso revivir, pero **sin garantía constitucional alguna de la autonomía municipal o territorial** ni “carácter democrático y participativo de su gobierno” como lo establece la Constitución de 1999, con lo cual se busca que pase a estar **controlado por el Poder Nacional, como fue la concepción original del Distrito Federal en 1863**, para que en la capital de la República y sede del **Poder nacional, no exista gobierno local y democrático alguno con autonomía**. En lugar del artículo 18 de la Constitución de 1999 se propone que la norma se redacte de manera de regular a la ciudad de Caracas como la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional, remitiendo a una ley especial el establecimiento “de la unidad político territorial de la ciudad de Caracas, la cual será llamada la Cuna de Bolívar y Reina del *Guaraira Repano*”. Dicha organización, dependiente del Poder Central, se concibe sin autonomía local alguna, agregándose en la norma que “El Poder Nacional **por intermedio del Poder Ejecutivo** y con la colaboración y participación de todos los entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, así como del **Poder Popular, sus Comunidades, Comuna, Consejos Comunales** y demás organizaciones sociales, dispondrá todo lo necesario para el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes territoriales de expansión y, en general, lograr la mayor suma de humanización posible en la Cuna de Bolívar y Reina del *Guaraira Repano*”.

Estas propuestas de reforma se habían anunciado en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en relación con el artículo 18 de la Constitución, también **eliminando el Distrito Capital** y la organización municipal del mismo, creando en su lugar un **Distrito Federal sin autonomía municipal o territorial** ni gobierno democrático.

4. *El sistema nacional de ciudades y el derecho a la ciudad*

Por otra parte, en la misma norma del artículo 18 de la Constitución, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, sin que ello tenga relación directa con el Distrito federal, se propone incorporar la definición de políticas de ordenamiento territorial y urbano, en el sentido de que el Estado Venezolano debe desarrollar “una política integral, para articular un **sistema nacional de ciudades**, estructurando lógica y razonablemente las relaciones entre las ciudades y sus territorios asociados y uniendo y sustentando las escalas locales y regionales en la visión sistémica del país”.

Se propone agregar, además, que “a tales efectos, el Estado enfrentará toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra, los desequilibrios económicos, las asimetrías en la dotación de servicios e infraestructura, así como sobre las condiciones de accesibilidad, físicas y económicas, de cada uno de los componentes del citado sistema nacional de ciudades”.

Además, se indica que todos los ciudadanos “sin discriminación de genero, edad, etnia, orientación política y religiosa o condición social, disfrutarán y serán titulares del **Derecho a la Ciudad**, y ese derecho debe entenderse como el beneficio equitativo que perciba, cada uno de los habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, tanto en el contexto urbano regional como en el Sistema Nacional de Ciudades”.

Estas disposiciones serán aplicables a todo el Sistema Nacional de Ciudades y a sus componentes regionales.

II. EL ABANDONO DEL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL PODER PÚBLICO EN NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL CON LA INCORPORACIÓN DEL PODER POPULAR

En las Constituciones venezolanas, la forma federal del Estado concretizada en la distribución vertical del Poder Público, comenzó a expresarse formalmente en texto constitucional en la Constitución

de 1858, que estableció que “El Poder Público se divide en Nacional y Municipal” (art. 9), a lo que posteriormente, a partir de la Constitución de 1925, se agregó el Poder Municipal. Por ello, el artículo 136 de la Constitución de 1999 dispone en su artículo 136 que: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional”.

Esta distribución tradicional del Poder público se busca cambiar radicalmente en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, al proponerse que en el artículo 136 se agregue un nuevo nivel territorial de distribución del Poder Público, además del poder municipal, del poder estatal y del poder nacional, que es el **Poder Popular**. En relación con este último, como ya se ha destacado, se propone que en la norma se indique que “el pueblo es el depositario de la soberanía y la **ejerce directamente** a través del Poder Popular” y que “**éste no nace del sufragio ni de elección alguna**, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”, el cual “se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”.

Estas propuestas relativas al Poder Popular ya se habían anunciado en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en las cuales en forma indirecta aparecía el concepto de **Poder Popular**, **por ejemplo**, en la propuesta de reforma del artículo 16 donde se indica que “la división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la **participación del Poder Popular**”; en la propuesta de reforma del artículo 149 donde se busca agregar a las categorías de contratos del Estado, además de los de interés municipal, estatal o nacional, los **contratos de interés público comunal**; en la propuesta de reforma del artículo 174, que busca agregar un párrafo indicando que el Alcalde está obligado “a rendir cuenta de su gestión, anual y públicamente, mediante un informe que presentará ante el **Consejo Municipal del Poder Popular** y ante la **Federación de los Consejos Comunales existentes en el Municipio**”; en la propuesta de reforma del artículo 175, en la cual se indica que “la fun-

ción legislativa del Municipio corresponde al **Concejo Municipal del Poder Popular**"; en la propuesta de reforma del artículo 186, donde se identifica a la Asamblea Nacional, como "**Asamblea Nacional del Poder Popular**"; en la propuesta de reforma del artículo 189,3, sobre incompatibilidades de elección donde se habla de **funcionarios comunales**; en la propuesta de reforma del artículo 239, en la cual se atribuye al Vicepresidente de la República la competencia de "presidir el **Consejo de Gobierno del Poder Popular**" (art. 239,6); en la propuesta de reforma del artículo 293, en la cual se faculta al Consejo Nacional Electoral para "cooperar en los procesos electorales de otras **organizaciones del Poder Popular**"; en la propuesta de reforma del artículo 297 en la cual se cambia la configuración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano para estar "por Diputados y voceros de los **diferentes sectores del Poder Popular**"; y en la propuesta de reforma del artículo 350, en la cual se hace referencia al "pueblo de Venezuela en **ejercicio del Poder Popular**".

III. LA "NACIONALIZACIÓN" DE COMPETENCIAS QUE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 ATRIBUYE A LOS ESTADOS

La Constitución en su artículo 136, al organizar al Estado "Federal" conforme al principio de la distribución vertical del Poder Público, distribuye y asigna diversas competencias a los tres niveles de gobierno, es decir, al Poder Nacional, al Poder Estatal y al Poder Municipal, aún cuando siguiendo la tendencia centralista de los últimos cien años, centralizó casi todas las competencias públicas en el nivel nacional, con muy pocas competencias en el nivel estatal intermedio y con competencias en materia de la vida local atribuida a los Municipios.

En todo caso, las competencias de cada nivel territorial deben ejercerse con autonomía, en el sentido de que ésta no podría ser limitada por ley nacional posterior, pues de ello se trata, al establecerse una distribución constitucional del Poder Público en el territorio. En la Constitución, sin embargo, la regulación del funcionamiento y la organización de los Consejos Legislativos Estadales se remite a la ley nacional (art. 162), lo cual, además de contradictorio con la atri-

bución de los Estados de dictarse su Constitución para organizar sus poderes públicos (art. 164, ord. 1), es una intromisión inaceptable del Poder Nacional en el régimen de los Estados.

En cuanto a los Municipios, la autonomía municipal tradicionalmente garantizada en la propia Constitución, también se encuentra interferida, al señalarse que los Municipios gozan de la misma, no sólo “dentro de los límites” establecidos en la Constitución, sino en la ley nacional (art. 168), con lo cual el principio descentralizador básico, que es la autonomía, queda minimizado.

Por otra parte, en cuanto a la distribución de competencias entre los entes territoriales, el proceso de descentralización exigía, ante todo, la asignación efectiva de competencias tributarias a los Estados, sobre todo en materia de impuestos al consumo, como sucede en todas las Federaciones, lo que no se satisfizo, de manera que los Estados han seguido dependientes del Situado Constitucional.

Ahora, en las Propuestas de reforma 2007 relativas a la distribución de competencias públicas entre los tres niveles territoriales de gobierno, las mismas **terminan de centralizar materialmente todas las competencias del Poder Público en el nivel nacional**, mediante la asignación de nuevas competencias al Poder Nacional; mediante la **centralización de competencias** que tienen los Estados en la Constitución de 1999, que se eliminan; y mediante la obligación impuesta a los Estados y Municipios de transferir sus competencias a los Consejos Comunales, con lo que se quedan como entelequias vacías.

Entre las nuevas competencias que se busca asignar al Poder Nacional tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, está la del **Registro Civil de Bienes** (art. 156,5), quizás ignorándose que desde el siglo XIX esta es y ha sido una competencia del Poder Nacional establecida en el Código Civil (Registro Público).

También se busca, en las propuestas de reforma 2007, asignar al Poder nacional competencia en materia de las **políticas de control fiscal** (art. 156,22), lo que implica la **centralización total de la mate-**

ria en la **Contraloría General de la República**, eliminándose la su-
puesta autonomía de las contralorías de los Estados y Municipios
(art. 290). Estas propuestas se complementan con la que se formula
respecto del artículo 163 en las *Propuestas de Reforma del CPRC,*
junio 2007, en el cual se busca que las **Contralorías estatales** ejerzan
el control sobre las Administraciones de los Estados, respecto del
“cumplimiento de las metas, objetivos y programas previstos en los
respectivos presupuestos, **bajo la rectoría de la Contraloría General
de la República**”. Igualmente se propone en dichas Propuestas, en
relación con las **Contralorías Municipales**, que las mismas deben
actuar bajo la **rectoría de la Contraloría General de la República**
(art. 176).

Se busca agregar también, como competencia nacional, la relati-
va a los **teleféricos** (art. 156, 28).

Llama la atención que en el artículo 156, se busque atribuir al
Poder Nacional competencia además de en materia de derecho in-
ternacional privado que siempre ha sido del ámbito nacional, com-
petencia en cuanto a la **legislación de derecho internacional públi-
co**. No se entiende cómo se pretende que el derecho internacional
público, **cuya creación corresponde a la comunidad internacional y
a las relaciones entre Estados**, se pueda atribuir al Poder nacional
de la República.

Además, en el artículo 156,30, que regula los servicios públicos
domiciliarios se busca atribuir al Poder Nacional, competencia en
materia de servicios de **telefonía por cable, inalámbrica y satelital y
televisión por suscripción**, ignorando que todos son servicios de
telecomunicaciones ya atribuidos al Poder Nacional en la misma
norma (art. 156, 28). Igualmente, se busca asignar al Poder Nacional
en el artículo 156, 32, competencia en materia de **legislación econó-
mica y financiera** ignorando que un Título entero de la Constitución
(Título VI) se destina a la materia como competencia nacional.

Entre las materias que tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Re-
forma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de
Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone asignar al Poder Nacio-
nal, destacan aquellas que implican una completa centralización de

competencias en el Poder Nacional y de ahogamiento definitivo de las competencias estatales y municipales, al pretenderse atribuir al Poder Nacional en el artículo 156,10, competencia para **“la ordenación y gestión del territorio y el régimen territorial del Distrito Federal, los Estados, los Municipios, las Dependencias Federales y demás entidades regionales”** y en el Artículo 156,11, competencia para **“la creación, ordenación, y gestión de Provincias federales, Territorios federales y Comunes, Ciudades Federales y Comunes”**. En esta forma, los Estados y Municipios dejan de ser **“entidades políticas”** y pasan a **depender totalmente del nivel nacional**, como **órganos sin autonomía alguna, es decir, como administraciones periféricas del Poder central** sometidas a la ordenación y gestión que establezca el Poder Nacional.

Por ello en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también se propone eliminar la obligación que la Constitución impone a la Asamblea Nacional de **“velar por la autonomía de los Estados”** (art. 187,16). En este esquema de sumisión centralista en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también se propone reformar el artículo 164,2 de la Constitución de 1999, para establecer que los Estados tengan competencia para ejercer **“la coordinación de sus municipios y demás entidades locales** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 ordinal 10 de esta Constitución” lo que implica la **eliminación de la autonomía municipal**.

Por ello, incluso, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, relativa al artículo 168 sobre la **autonomía municipal**, se propone eliminar de ella, **“la gestión de las materias de su competencia”**, y se propone agregar que el ejercicio de las competencias por los municipios, debe realizarse **“en armonía con las orientaciones, la planificación y las políticas del Poder Nacional”** (art. 176).

Además, tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en relación con el artículo 156,32, se busca atribuir al Poder Nacional competencia en cuanto a la legislación **administrativa**, lo que implica la **centralización total de la legislación sobre la Administración Pública**, así sea estatal o municipal.

Por último, tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca eliminar varias competencias que en la Constitución de 1999 se atribuyen tanto a los Estados y Municipios, y asignarlas al Poder Nacional, como una muestra más de la **orientación totalmente centralista** de la propuesta. En particular, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se busca atribuir en el artículo 156,27, al Poder Nacional (“nacionalizar”) la competencia que el artículo 164,10 de la Constitución de 1999 atribuyó a los Estados en materia de la **conservación, administración y aprovechamiento de autopistas y carreteras nacionales** como un avance en el proceso de descentralización, lo que implica también la modificación de los ordinales 9 y 10 del artículo 164 de la Constitución, que asignan competencia a los Estados en materia de “la conservación, administración y aprovechamiento de **carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial**, en coordinación con el Ejecutivo Nacional”.

Además, en esta misma orientación, tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone eliminar la competencia de los Estados establecida en el artículo 164,5 de la Constitución de 1999 en materia del **régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, las salinas y ostrales**, dejándose a los Estados competencias en materia de administración de tierras baldías” (art. 164, 5), lo que se atribuye al Poder nacional (art. 156,17). En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, sin embargo, se prevé la posibilidad de que el régimen y aprovechamiento de dichos minerales no metálicos se pueda “delegar” a los Estados (156,17).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también se **propuso eliminar** la competencia de los Estados establecida en el artículo 164,5 de la Constitución de 1999 en materia de “organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable”, buscándose **eliminar la competencia de los Estados en relación con la policía municipal**, y disponerse la centrali-

zación total del régimen de las policías, al proponerse sustituir esa norma por el artículo 164,6 que sujeta a “la organización de la policía estatal **conforme a las competencias que la legislación nacional determine**”. Igualmente en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en materia de **policía municipal**, se buscó disponer que la competencia municipal en la materia se ejerza **conforme a la legislación nacional**” (art. 178,15).

La competencia establecida en el artículo 164,7 de la Constitución de 1999 en materia de “La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos **de papel sellado, timbres y estampillas**”, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se buscó minimizar y neutralizar con la propuesta de agregar al nuevo artículo 164,7 que esa competencia es “sin menoscabo de la obligación de **aceptar especies de valor equivalente expedidas por el Poder Nacional u otros estados**”.

Por otra parte, el artículo 165 de la Constitución al regular las materias de **competencia concurrente**, es decir, que corresponden a los tres niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal), dispone que su regulación se debe realizar “mediante leyes de bases dictadas por el Poder nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados”. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **convertir dichas competencias concurrentes en competencias exclusivamente nacionales** al proponerse en dicho artículo 165, pura y simplemente, que “las materias objeto de **competencias concurrentes serán reguladas por el Poder Nacional**”, perdiendo los Estados toda competencia en la materia.

Por último, tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, el **golpe de gracia definitivo a la forma federal del Estado**, es la propuesta de eliminar la tradicional **competencia residual** de los Estados establecida en el artículo 164,11 de la Constitución de 1999, en el sentido de que les corresponde “todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal”; buscándose sustituir esta disposición en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR*,

agosto 2007, por otra que establezca una situación inversa, es decir, atribuir la competencia residual al Poder Nacional en el artículo 156 al proponerse su redacción indicando que corresponde al Poder Nacional **“toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza, o que no este atribuido expresamente a la competencia estatal o municipal”**, y en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, por la atribución a los Estados sólo de “todo lo que le atribuya esta Constitución o Ley Nacional” (art. 164,11).

Además, en cuanto a la competencias de los Estados en materia de ingresos, si bien en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007* se propone aumentar su monto a un 25% de los ingresos ordinarios estimados en la ley de presupuesto (donde no están los recursos derivados de las reservas excedentarias), **se propone eliminar** del artículo 167,5 de la Constitución la exigencia de la Constitución de 1999 de que “El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estatales para atender adecuadamente los servicios de su competencia”.

Por último, en materia de competencia nacional compartida con la municipal, se propone **eliminar toda referencia al ámbito municipal** de la previsión del artículo 156,14 de la Constitución de 1999 según la cual compete al Poder Nacional la creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, **“cuya recaudación y control corresponda a los municipios, de conformidad con esta Constitución”**. Por ello, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone en el artículo 156,15 agregar como competencia del Poder Nacional, la **“recaudación de los impuestos territoriales o sobre predios rurales”**, y en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se propone eliminar del artículo 179 de la Constitución de 1999, como ingreso municipal, **“el impuesto territorial rural o so-**

bre predios rurales” que se busca que pase a ser un impuesto nacional exclusivamente.

IV. LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE DESPRENDERSE (DESCENTRALIZAR) SUS COMPETENCIAS Y TRANSFERIRLAS EN LOS ÓRGANOS DEL PODER POPULAR

La Constitución de 1999 en su artículo 184 estableció el principio de que la ley debía crear mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo entre otras, la transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos; la participación de las comunidades y de ciudadanos, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción; y la creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estatales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estatales y municipales.

En esta materia, el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, redefine materialmente el Estado democrático federal descentralizado y busca convertirlo en un Estado Comunal centralizado no democrático. En efecto, en relación con el antes mencionado artículo 184 de la Constitución, la propuesta del *Anteproyecto* establece que esa “descentralización y transferencia”

que debe regular la ley debe ser hecha a **“las Comunidades organizadas, a los Consejos Comunales, a las Comunas y otros Entes del Poder Popular”**, implicando incluso, entre otros casos, **“la asunción por parte de las organizaciones comunales de la gestión de las empresas públicas municipales y/o estatales”(ord. 2), y “la transferencia a las organizaciones Comunales de la administración y control de los servicios públicos estatales y municipales, con fundamento en el principio de corresponsabilidad en la gestión pública”(ord. 7).**

En la propuesta, además, como se ha visto, se define la estructura de **“la Comunidad organizada”** indicando que **“tendrá como máxima autoridad la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas del Poder Popular, quien en tal virtud designa y revoca a los órganos del Poder Comunal en las comunidades, Comunas y otros entes político-territoriales que se conformen en la ciudad, como la unidad política primaria del territorio”**; y además, que **“El Consejo Comunal constituye el órgano ejecutor de las decisiones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, articulando e integrando las diversas organizaciones comunales y grupos sociales, igualmente asumirá la Justicia de Paz y la prevención y protección vecinal”**, que han sido competencias tradicionales de los Municipios. Además, se dispone que **“por Ley se creará un Fondo destinado al financiamiento de los proyectos de los Consejos Comunales”**.

Este esquema institucional, por supuesto hay que concatenarlo con lo que el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, propone para reformar el artículo 136, relativo al Poder Popular y **eliminar todo vestigio democrático representativo**, al indicar, como antes se ha dicho, que **“El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población” y “se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”**.

En cuanto a la **“promoción de la participación”** en el ejercicio de las competencias municipales que prevé el artículo 178 de la Constitución, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca encasillar el tema al buscar precisar que se trata de **“la promoción de la participación protagónica del pueblo organizado desde la comunidad”**. Por otra parte, en materia de **descentralización y transferencia de servicios “a las comunidades y grupos vecinales”** que regula el artículo 184 de la Constitución de 1999, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* también se buscó encasillar dicha descentralización sólo a **“las comunidades organizadas como una política primaria de la organización nacional de la República”** y **“previa planificación democráticamente elaborada”** (art. 184).

V. LA LIMITACIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución, los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y de autonomía, comprende, la elección de sus autoridades; la gestión de las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, y que sus actos **“no pueden ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con la Constitución y la ley”**; por lo que no pueden ser revisados, en forma alguna, por los órganos del Poder Nacional ni de los Estados.

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca eliminar esta última autonomía jurídica e institucional de los Municipios que establece el artículo 168 de la Constitución de 1999, dejándose entonces a la ley la posibilidad de establecer que los actos de los Municipios **“pueden ser impugnados ante otros órganos del Estados no judiciales.”**

VI. LA SUSTITUCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO POR UN CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO

Otra innovación de la Constitución de 1999, fue la creación del Consejo federal de Gobierno, que aún cuando nunca ha funcionado,

se lo concibió en el artículo 185 como un ente intergubernamental encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del **proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios**, que presidía el Vicepresidente Ejecutivo y debía estar integrado por los Ministros, los Gobernadores, un Alcalde por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley, del cual debía depender el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se cambia radicalmente esta entidad, y en la propuesta de reforma del artículo 185 se lo busca convertir en un ente exclusivamente nacional, como **Consejo Nacional de Gobierno, totalmente desligado de la política de descentralización que se elimina de la Constitución**, encargado de “evaluar los diversos proyectos comunales, locales, estatales y provinciales, para articularlos al plan de desarrollo integral de la nación, dar seguimiento a la ejecución de las propuestas aprobadas y realizar los ajustes convenientes a los fines de garantizar el logro de sus objetivos”. Se propone que ahora sea presidido por el Presidente de la República quien lo convoca, e integrado por los Vicepresidentes, los Ministros, los Gobernadores y Alcaldes **“convocados por el Presidente de la República”**.

CUARTA PARTE

LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PODER NACIONAL: LA ACENTUACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, las propuestas que se formulan en relación con los órganos del Poder nacional, se refieren básicamente a los que conforman el Poder Ejecutivo, con una acentuación creciente del presidencialismo.

I. LA EXTENSIÓN DEL PERÍODO PRESIDENCIAL

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, lo primero que se ha propuesto, además de **establecer la reelección indefinida** del Presidente de la república, es la **extensión del período presidencial de seis a siete años**, en forma contraria a la tradición constitucional venezolana (art. 230).

II. LOS NUEVOS ÓRGANOS EJECUTIVOS: LOS VICEPRESIDENTES

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999, fue la creación del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, pero para disipar cualquier duda sobre la posible inclusión de un elemento del parlamentarismo en el texto constitucional, con la previsión expresa de que es del libre nombramiento y remoción del Presidente de la República (art. 225).

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, en relación con el artículo 225 se ha propuesto que además de cambiarle el nombre al Vicepresidente Ejecutivo por **Primer Vicepresidente, el Presidente pueda designar Vicepresidentes**, en el número “**que estime necesario**”, quienes también ejercen el Poder Ejecutivo.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en las propuestas de reforma de los artículos 236,3; 238; 239,10; 241, y 243, se repite esta propuesta de creación de la figura de los “**Vicepresidentes para determinado territorio, sector o materia**, quienes tendrán las competencias que les asigne el Presidente”, configurándose dicho funcionario como un mecanismo para reforzar la acción directa del Presidente en el territorio o en determinadas materias, independientemente del sistema de distribución vertical del Poder Público o de las posibles autonomías territoriales que puedan existir, con lo que se acentúa aún más el **centralismo de Estado controlado por el Presidente**.

III. LA EXTENSIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El artículo 236 de la Constitución de 1999 enumera las competencias del Presidente de la República siguiendo la tradición constitucional anterior, con algunas innovaciones como la de formular el Plan de desarrollo nacional y dirigir su ejecución con la aprobación de la Asamblea (art. 236, 18) y fijar el número, organización y competencia de los Ministerios y otros organismos de la Administración (art. 236,20).

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, en las reformas al artículo 236 de la Constitución, se proponen nuevas atribuciones del Presidente de la República, y la ampliación de las que tiene, en la siguiente forma:

1. Se le atribuye la competencia para no sólo dirigir las acciones del Gobierno, sino del **Estado**, y **además**, coordinar las relaciones con los otros Poderes Públicos Nacionales en su carácter de Jefe de Estado (art. 236, 2).

2. Se le atribuye una nueva competencia para incidir en la organización territorial del Estado, **creando “las Provincias Federales, los Territorios Federales y/o las Ciudades Federales según lo establecido en la Constitución y designar sus autoridades, según la ley”** (art. 236,3).

3. Se le atribuye la competencia para **“formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución”** (art. 236,19), eliminándose la necesaria aprobación de la Asamblea Nacional en relación con la formulación y ejecución del Plan Nacional de desarrollo que dispone la Constitución de 1999 (art. 236, 18).

4. En lugar de **“dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente”** y de **“ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos”** como dicen los artículos 236,5 y 236,6 de la Constitución de 1999, se propone asignarle la competencia para **“comandar la Fuerza Armada Bolivariana en su carácter de Comandante en Jefe, ejerciendo la Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades, determinando su contingente”** (art. 236,6), y **“promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes”** (art. 236,7).

Además, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se le asignan al Presidente de la República competencias para:

1. En el artículo 11 se propone asignarle al Presidente de la República competencia para **“decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de defensa, en cualquier parte del territorio y demás espacios geográficos de la República”** y para **“decretar Autoridades Especiales en situaciones de contingencia, desastres naturales, etc.”**.

2. En el artículo 16 se propone asignarle competencia para **convocar referendo popular** en caso de constitución de una **Ciudad Comunal** cuando en la totalidad de su perímetro se hayan estable-

cido las Comunidades organizadas, las Comunas y los Autogobiernos Comunales.

3. En el mismo artículo 16 se propone asignarle competencia al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados de la Asamblea Nacional, para **“crear mediante decreto, Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca la Ley”**; y al **“Gobierno Nacional, la elaboración y activación de una Misión Distrital con el respectivo Plan Estratégico-funcional con motivo de la creación de un Distrito Funcional”**.

4. En el artículo 18 se propone atribuir al **“Poder Ejecutivo”** con la colaboración y participación de todos los entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, así como del Poder Popular, sus Comunidades, Comuna, Consejos Comunales y demás organizaciones sociales, al **disponer “todo lo necesario para el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes territoriales de expansión”**.

5. En el artículo 141 se le asigna al **“Poder Ejecutivo”** competencia para establecer como **“administraciones públicas” mediante reglamentos organizativos y funcionales, a “las misiones”**, como **“organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales, e incluso, experimentales”**.

6. En el artículo 318 se propone asignar al Presidente de la República o al Poder Ejecutivo competencia para, en coordinación con el Banco Central de Venezuela, fijar **“las políticas monetarias”** y ejercer **“las competencias monetarias del Poder Nacional”**; conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, **“lograr la estabilidad**

de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria"; compartir con el Banco Central de Venezuela, la función "de participar en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés"; y como administrador de la Hacienda Pública Nacional, administrar y dirigir las reservas internacionales de la República manejadas por el Banco Central de Venezuela.

7. En el artículo 321 se propone atribuirle al "Jefe del Estado", en el marco de su función de administración de las reservas internacionales, el establecer, en coordinación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas excedentarias, las cuales se deben destinar a fondos que "disponga el Ejecutivo Nacional para inversión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento de las misiones y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación".

IV. LA TRANSFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

Otra innovación de la Constitución de 1999 fue el establecimiento del Consejo de Estado como **órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional, de carácter intergubernamental**, con competencia para recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión (art. 251); el cual debía estar presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente de la República; un representante designado por la Asamblea Nacional; un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado por el conjunto de mandatarios estatales (art. 252). Dicho órgano, nunca se configuró.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone cambiar radicalmente la configuración de este Consejo de Estado, y convertirlo en un órgano exclusivamente nacional, como **órgano superior de consulta y asesoramiento del**

Estado y Gobierno Nacional, el cual en forma por demás incongruente se propone que ejerza sus atribuciones **“con autonomía funcional”**, aun cuando **“sus opiniones o dictámenes no tendrán carácter vinculante”**. Se propone atribuirle competencia para: “1. Emitir opinión sobre el objeto de la consulta. 2. Velar por la observancia de la Constitución y el ordenamiento jurídico. 3. Emitir dictámenes sobre los asuntos que se sometan a su consideración y 4. Recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos de especial trascendencia (art. 251).

A tal efecto, la propuesta de reforma cambia la conformación del Consejo de Gobierno y dispone que lo preside el Presidente de la República y estará además conformado, por el Presidente de la Asamblea Nacional; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente del Poder Ciudadano, el Presidente del Consejo Nacional Electoral y las personas que el Presidente de la República considere necesario convocar para tratar la materia a la que se refiere la consulta (art. 252).

QUINTA PARTE

LOS CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA: DE UN ESTADO SOCIAL Y PROMOTOR DE ECONOMÍA MIXTA, A UN ESTADO SOCIALISTA, DE ECONOMÍA ESTATAL CENTRALIZADA Y CONFISCATORIA

Uno de los componentes normativos esenciales de toda Constitución contemporánea, es la *Constitución Económica* que tiene por objeto establecer los principios del régimen de las relaciones económicas y el papel que, en las mismas, corresponde a la iniciativa privada y al propio Estado, y que conforme al constitucionalismo desarrollado desde mitades del siglo pasado, estableció un modelo económico de economía mixta, basado en el principio de la libertad como **opuesto al de economía dirigida**, similar al que existe en todos los países occidentales.

La aplicación práctica de ese modelo constitucional provocó el desenvolvimiento de una economía basada en la libertad económica y la iniciativa privada, pero con una intervención importante y necesaria del Estado para asegurar los principios de justicia social que constitucionalmente deben orientar el régimen económico; lo que se ha acrecentado por el hecho de ser el Estado, titular desde siempre del dominio público sobre el subsuelo.

Conforme a esa orientación, la Constitución de 1999 estableció un **sistema económico de economía mixta, es decir, de economía social de mercado que se fundamenta en la libertad económica, pero que debe desenvolverse conforme a principios de justicia social, que requieren de la intervención del Estado.** Por ello, confor-

me al artículo 299 de la Constitución de 1999, el régimen socioeconómico de la República se fundamenta en los siguientes principios: justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad.

El sistema de economía mixta en la Constitución, por otra parte, conforme se dispone expresamente en el artículo 299, obliga al Estado, **“conjuntamente con la iniciativa privada”, a promover “el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia, equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”**.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone cambiar radicalmente ese modelo, acentuando el desequilibrio existente entre lo público y lo privado, y transformarlo en un sistema de **economía estatal, de planificación centralizada, propia de un Estado y economía socialista**.

I. LA ELIMINACIÓN DE LA LIBERTAD ECONÓMICA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL AL LIBRE EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En efecto, el artículo 112 de la Constitución establece como uno de los principios fundamentales del sistema constitucional, el derecho de todas las personas de poder **dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia**, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social, a cuyo efecto, **el Estado está obligado a promover “la iniciativa privada**, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y

servicios que satisfagan las necesidades de la población, la **libertad de trabajo, empresa, comercio, industria**, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone **eliminar este derecho y la libertad económica**, y sustituir esta norma por otra en la cual lo que se propone es que se establezca la definición de una política estatal para promover “el desarrollo de un **Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente**, fundado en los valores humanísticos de la **cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales**, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible”; agregándose que el Estado, asimismo, “**fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista**”.

Es decir, en un artículo como el 112 ubicado en el Capítulo constitucional sobre los **derechos económicos**, simplemente se **elimina el derecho al libre ejercicio de las actividades económicas y la propia libertad económica**. Ello, por supuesto, es contrario al principio de la progresividad en materia de derechos humanos y constitucionales que garantiza el artículo 19 de la Constitución. Además, debe destacarse en esta misma orientación que en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, respecto del artículo 299, se propuso eliminar de su texto el principio de **libre competencia**, y en su lugar se busca establecer los principios de “predominio del interés común sobre el individual, ética pública y emulación”, estableciéndose como fines del sistema económico no sólo asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad, sino “**el establecimiento de una sociedad socialista**”. Por

otra parte, la promoción del desarrollo económico no se asigna “**al Estado conjuntamente con la iniciativa privada**”, sino “**al Estado conjuntamente con la sociedad**”

En la Constitución de 1999, por otra parte, se establecen un conjunto de atribuciones que facultan al Estado para regular el ejercicio de los derechos económicos, en particular, al precisarse el régimen de la prohibición de los monopolios (art. 113), declarándose contrarios a los principios fundamentales de la Constitución las actividades tendientes a su establecimiento o que conduzcan a su existencia. También se declaró como contrario a dichos principios, el abuso de la posición de dominio que puedan adquirir los agentes económicos independientemente de su causa. En todos estos casos, la norma faculta al Estado para adoptar las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **cambiar radicalmente el régimen de la actividad económica**, estableciéndose en la propuesta de reforma del artículo 113 una serie de limitaciones a la misma que van mucho más allá de la restricción de los monopolios y la posición dominante de empresas, privilegiándose la **economía estatal y los medios de producción socialista**.

En esta orientación, se propone agregar a la norma, que en general no se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los y las particulares que vulneren los **métodos y sistemas de producción social y colectiva** con los cuales se afecte la **propiedad social y colectiva** o impidan o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios.

Además, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone agregar a la norma que en los casos de explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del

dominio de la Nación de carácter estratégico, o de la prestación de servicios públicos vitales, el Estado podrá **reservarse la explotación o ejecución de los mismos, directamente o mediante empresas de su propiedad**, sin perjuicio de establecer empresas de **propiedad social directa, empresas mixtas y/o unidades de producción socialistas**, que aseguren la soberanía económica y social, respeten el control del Estado, y cumplan con las cargas sociales que se le impongan, todo ello conforme a los términos que desarrollen las leyes respectivas de cada sector de la economía". Con ello, como se propone en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, lo que se busca es establecer que la prohibición de los monopolios no se aplica a aquellos casos en los cuales el Estado **"los establezca, reservándose actividades o servicios en función del interés social, en aras de materializar los principios de la economía socialista y humanista"**, indicándose, además, que el Estado podrá **asumir posiciones de control** cuando por razones de estrategia así lo requiera.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, además, en relación con este artículo 113, se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución no sólo las actividades que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio, sino también de un **"oligopolio, monopsonio u oligopsonio"**; se prohíbe la posición de dominio sólo en relación con las empresas **de propiedad privada**; y se propone incluir una disposición conforme a la cual, "el Estado, en corresponsabilidad con los particulares **planificará y adoptará las medidas** que fueren necesarias para **evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas**, teniendo como finalidad la **protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía"**. También se propone declarar en la norma que **"la concentración de la propiedad privada sobre los medios de comunicación y empresas del mismo ramo**, vinculado a ello, en condiciones de monopolio y oligopolio, es contraria tanto al derecho, a la pluralidad y libertad de la comunidad como al interés social, y **será materia de limitación, regulación y sanción por la ley**, la cual dispondrá me-

didadas expeditas para evitar esta indebida restricción de la competencia.

II. LA ELIMINACIÓN DE LA GARANTÍA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Por otra parte, otro de los pilares fundamentales de la Constitución de 1999, además de la libertad económica, es la garantía del derecho de propiedad privada, que conforme al artículo 115 de la Constitución de 1999, se lo concibe como el derecho que tiene toda persona **“al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”**, aún cuando sometida a **“las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”**. Dicha garantía implica que **“sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”**.

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone cambiar radicalmente el régimen de la **propiedad privada, la cual se busca que quede materialmente eliminada y reducida a la que pueda existir sobre los bienes de consumo, quedando por tanto minimizada y marginalizada en relación con la propiedad pública**. Además, contrario a lo que garantiza la Constitución de 1999 al prohibir las confiscaciones, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca constitucionalizar las confiscaciones.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007* en efecto, respecto del artículo 115 de la Constitución, en lugar de garantizarse la propiedad privada, lo que se propone es que se reconozca y garantice son **“las diferentes formas de propiedad”**, las cuales se enumeran así:

1. **“La propiedad pública** es aquella que pertenece a los entes del Estado; **la propiedad social** es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones, y **podrá ser de dos tipos:**

A. **“La propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad”, y**

B. **“La propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad comunal, o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana;”**

2. **“La propiedad colectiva es la perteneciente a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado”;**

3. **“La propiedad mixta es la conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación”; y**

4. **“La propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos”.**

La propiedad privada, en consecuencia, queda reducida a los bienes de consumo a los medios de producción. Debe destacarse, por otra parte, que en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, incluso se incluyó otra posible redacción del artículo 115, en la cual se restringe aún más el ámbito de la propiedad privada, que quedaría reducida a las remuneraciones del trabajo, y a los bienes necesarios para satisfacer las necesidades vitales, así: “En virtud que el trabajo es el origen de todo valor económico, todos y todas tienen derecho a la propiedad privada sobre las remuneraciones, ingresos y ahorros provenientes de su trabajo, así como sobre los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades costeados por ellos, incluida la vivienda adquirida de tal forma o mediante título legítimo, así como el derecho de herencia sobre tales bienes. Se reconoce también la propiedad privada personal sobre los instrumentos de trabajo de profesionales, investigadores, artesanos, artistas o grupos de producción familiar siempre que no sean aplicados como medios de producción para explotar el trabajo de terceros”.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, por otra parte, se propone agregar en la norma del artículo 115 que “toda propiedad, estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”; y que “por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los Órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley”.

Con esta propuesta, al igual que la formulada en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se pretende constitucionalizar el mecanismo de la ocupación previa, ratificándose el principio de la indemnización oportuna en materia de expropiación.

Debe destacarse, además, que en lugar de la prohibición de las confiscaciones, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca establecer lo contrario, en el sentido de que: “La propiedad cuyo uso atente o afecte los derechos de terceros o de la sociedad, podrá ser objeto de confiscación por parte del Gobierno Nacional, de acuerdo a la ley”.

En esta redacción del artículo 115, además, se busca establecer la posibilidad de la expropiación sin garantía judicial alguna, así: “La República podrá declarar mediante resolución administrativa la expropiación de bienes por causa de utilidad pública o interés social, a cuyo efecto pagará justa indemnización determinada por los órganos de los poderes públicos, de acuerdo con la ley”.

Con estas propuestas de reforma, simplemente desaparece el derecho de propiedad como elemento fundamental del orden jurídico, lo que sin duda es la intención de las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en las cuales se generalizan las confiscaciones que en la Constitución de 1999 se encuentran prohibidas salvo en los casos permitidos por la propia Constitución y, en particular, por vía de excepción, mediante sentencia firme, respecto de los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,

responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, o de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes (art. 116 y 271).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en cambio, en relación con el artículo 115, se busca establecer como principio general que **“La propiedad cuyo uso atente o afecte los derechos de terceros o de la sociedad, podrá ser objeto de confiscación por parte del Gobierno Nacional, de acuerdo a la ley”**. Además, en relación con el artículo 116, relativo a la prohibición de las confiscaciones, se propone, no sólo **eliminar la necesidad de sentencia firme**, sino ampliar la excepción para incluir la posibilidad de confiscación en los casos de delitos de **“falsificación de moneda y operaciones comerciales y legítimas de bienes prohibidos o regulados”**; y **“de trata de personas y la destrucción de recursos naturales y de la ecología**, así como los de las personas incurso en las contravenciones señaladas en los artículos 114 y 117 de esta Constitución, quedando a salvo los derechos del afectado de recurrir ante los Tribunales competentes”. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también se buscan establecer también la **confiscación**, en materia de **seguridad alimentaria** (art. 305) y de eliminación del **latifundio** (art. 307).

III. LA ELIMINACIÓN DEL LATIFUNDIO

El artículo 307 de la Constitución de 1999 declara al régimen latifundista como contrario al interés social, y remite al legislador para disponer lo conducente **en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas**, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola.

Por otra parte, la norma establece el derecho de los campesinos y demás productores agropecuarios a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por la ley respectiva, con la obligación para el Estado de **proteger y promover las formas asociativas y**

particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola, y para velar por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola con el objeto de asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente dispone el mismo artículo constitucional, que el legislador creará contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola.

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone eliminar del artículo 307 toda idea de promover la desaparición del latifundio mediante medidas **tributarias** para gravar las tierras ociosas, así como la política de transformar el latifundio en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola; por una sustitución de la disposición que establezca que **“la República determinará mediante Ley la forma en la cual los latifundios serán transferidos a la propiedad del Estado, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades u organizaciones sociales capaces de administrar y hacer productivas las tierras”**.

Se propone agregar a la norma, además, que a los fines de garantizar la producción agrícola, el Estado **protegerá y promoverá la propiedad social**; y que la ley **creará tributos sobre las tierras productivas que no sean empleadas para la producción agrícola o pecuaria**.

Por último, se propone agregar a la norma que **“se confiscarán aquellos fundos cuyos dueños ejecuten en ellos actos irreparables de destrucción ambiental, los dediquen a la producción de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o la trata de personas o los utilicen o permitan su utilización como ámbitos para la comisión de delitos contra la seguridad y defensa de la Nación”**.

Debe mencionarse, por último, en materia de derechos económicos, que otra innovación de la Constitución de 1999 fue el derecho que regula el artículo 117, de todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no

engañoso sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca agregar a dicha norma, en primer lugar, la indicación de que las personas también **“tienen derecho a producir socialmente”**; en segundo lugar, declarar que queda **“terminantemente prohibida la paralización directa o indirecta de los servicios de prestaciones públicas, como consecuencia de acciones y omisiones de personas o grupo de personas que afecten el interés social”**, con la indicación de que **“la ley determinará severamente las sanciones para este tipo de conductas y facultará al Estado para tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios o prestaciones públicas, en función de la primacía del interés colectivo sobre el interés individual”**; en tercer lugar, la previsión general de que los ciudadanos **“de manera individual, así como los comités de usuarios, consejos comunales y otras organizaciones sociales tienen el deber y el derecho de ejercer la vigilancia y contraloría social, no solo sobre la calidad de los bienes y servicios, sino sobre la diligencia y la efectividad en el cumplimiento del deber de los funcionarios encargados de garantizar tales derechos y de ejercer contra ellos acciones de amparo y de cualquier índole por negación de derechos constitucionales y legales”**.

La política comercial se reguló en el artículo 301 de la Constitución, reservándose al Estado, a los efectos de defender las actividades económicas de las **empresas nacionales públicas y privadas, disponiendo en relación con las inversiones extranjeras que estarán sujetas a las mismas condiciones que la inversión nacional**. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar dentro de los objetivos de la política comercial defender y promover no sólo las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas, sino de las **empresas mixtas, cooperativas y otras unidades productivas comunitarias nacionales; eliminándose toda referencia a las inversiones extranjeras**.

Por último, en cuanto a los ilícitos económicos, es decir, a **“la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos”** que conforme al artículo 114 de la Constitución deben

ser penados severamente de acuerdo con la ley; en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca establecer en la norma en forma más amplia que “la **destrucción de los bienes de la República y de los entes públicos, de las organizaciones sociales, cooperativas y comunidades indígenas**, así como el daño causado a ello por acción u omisión, **el ilícito económico, la falsificación de moneda, el tráfico ilícito de divisas, adulteración de bienes de primera necesidad, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos**, originan responsabilidad civil y administrativa y serán penados severamente de acuerdo con la ley”.

IV. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

En cuanto a la intervención del Estado en la economía, la forma clásica es mediante la constitución de empresas públicas, respecto de cuya regulación, el artículo 300 de la Constitución remitió a la ley nacional para el establecimiento de las condiciones para su creación como entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca cambiar la concepción de esta regulación, **eliminándose toda referencia a la descentralización** y reduciéndose la posibilidad de creación de empresas o entidades para la promoción y realización de **los fines de la economía socialista**. En particular, en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone que la norma sólo se refiera a la creación de **empresas o entidades regionales**, para la promoción y realización de actividades económicas o sociales, **bajo los principios de la economía socialista**, estableciendo los mecanismos de control y fiscalización que aseguren la transparencia en el manejo de los recursos públicos que en ellas se inviertan, y su razonable productividad económica y social

En cuanto a la reserva de actividades al Estado, el artículo 302 de la Constitución, luego de intensos debates estableció que “el Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera”, agregando que también se puede reservar en la misma forma “industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”. En esta forma, si bien la reserva de la industria petrolera efectuada mediante la Ley Orgánica de 1975, adquirió rango constitucional en el texto de 1999, ello se sujetó a lo que estableciera la ley orgánica respectiva, la cual podría ser modificada, como en efecto ha ocurrido en 2000. La reserva que se estableció en 1999, por tanto, no fue ni rígida ni absoluta, sino flexible, conforme lo estableciera la ley orgánica respectiva.

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca cambiar radicalmente la concepción de esta regulación, proponiéndose el establecimiento de la reserva en la propia Constitución, **por razones de conveniencia nacional**, en una forma materialmente ilimitada, no sólo respecto de “**la actividad explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos**”, sino de las “**explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico**”, sin precisión ni definición alguna. Con esta propuesta, **todo servicio que se declare en una ley como de interés público, quedaría reservado al Estado.**

Además, se propone agregar a la norma que “el Estado privilegiará por carácter estratégico y de soberanía, el uso de tecnología nacional para el **procesamiento de los hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos**, especialmente de aquellos cuyas características constituyen **la mayoría de las reservas y sus derivados**”.

Una importante innovación en la Constitución de 1999 fue la regulación en el artículo 305 de los principios y políticas en materia de producción de la agricultura sustentable y de la seguridad alimentaria. Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar al artículo 305 una disposición que es-

tablece que “si ello fuere necesario para garantizar la seguridad alimentaria, **la República podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola indispensables a tal efecto, y podrá transferir su ejercicio a entes autónomos, empresas públicas y organizaciones sociales, cooperativas o comunitarias.** Así como utilizar a plenitud las **potestades de expropiación, afectación y ocupación** en los términos de esta Constitución y la Ley”.

V. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN FISCAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO

En materia del régimen fiscal, por primera vez en el constitucionalismo venezolano se incorporaron al texto fundamental un conjunto de normas relativas al Banco Central de Venezuela y a la política macroeconómica del Estado (arts. 318 a 321). En particular, sobre el Banco Central de Venezuela la Constitución de 1999 le atribuyó las competencias monetarias del Poder Nacional para ejercerlas de manera exclusiva y obligatoria, estableciéndose como su objetivo fundamental lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria, y garantizándose su autonomía para la formulación de las políticas de su competencia. La Constitución además, le asignó al banco para el adecuado cumplimiento de su objetivo, la atribución de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.

1. *La eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela*

Tanto en el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, como en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **cambiar total y radicalmente** el régimen de la política monetaria y del Banco Central de Venezuela, **eliminándosele sus competencias y su autonomía, y estableciendo su total dependencia directa del Ejecutivo Nacional.**

A tal efecto, se proponen las siguientes reformas al artículo 318:

En primer lugar, se busca precisar que **“El sistema monetario nacional debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista y el bienestar del pueblo, por encima de cualquier otra consideración.”**

En segundo lugar, las competencias para fijar las políticas monetarias del Poder Nacional que la Constitución de 1999 asignó **“exclusivamente”** al Banco Central, se busca **atribuírselas al Ejecutivo Nacional y al Banco Central “en estricta y obligatoria coordinación”**.

En tercer lugar, se precisa que el objetivo específico del Banco Central de Venezuela, **“conjuntamente con el Ejecutivo Nacional”**, es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria.

En cuarto lugar, se **elimina formalmente la autonomía** del Banco Central, al disponerse que **“es persona de derecho público sin autonomía** para la formulación y el ejercicio de las políticas correspondientes”, y se agrega que sus funciones estarán **supeditadas a la política económica general y al Plan Nacional de Desarrollo** para alcanzar los **objetivos superiores del Estado Socialista** y la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo”.

En quinto lugar, se establece que **las funciones del Banco Central son “compartidas con el Poder Ejecutivo”**, al proponerse precisar en el artículo 118 que para el adecuado cumplimiento de su objetivo específico, el Banco Central de Venezuela **“tendrá entre sus funciones, compartidas con el Poder Ejecutivo Nacional”**, sólo **“participar** en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés”.

En sexto lugar, se **le quita al Banco Central de Venezuela la competencia de “administrar las reservas internacionales”** y en su lugar se propone establecer, que **“las reservas internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, bajo la administración y dirección del Presidente o Presidenta de la República, como administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional”**.

Debe destacarse, que en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, incluso lo que se proponía al eliminarse la **autonomía del Banco Central de Venezuela** para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia, era que el Banco debía **“colaborar y apoyar técnicamente al Ejecutivo Nacional en la formulación de las políticas monetarias, y velar por la ejecución de las mismas”**, con la indicación de que debía ejercer **“sus funciones en estricto cumplimiento de la política económica, financiera, monetaria y productiva general diseñada y establecida por el Ejecutivo Nacional, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación”**; y que debía **“ejecutar la política monetaria y cambiaria formulada por el Ejecutivo Nacional, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales en estricto apego a la política general monetaria establecida por el Ejecutivo Nacional bajo los lineamientos de esta Constitución y las leyes”**.

Por otra parte, en el artículo 320 de la Constitución de 1999, en relación con la coordinación macroeconómica, se estableció una detallada regulación, primero sobre la estabilidad económica y segundo sobre el Fondo de Estabilización macroeconómica. En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, ambas regulaciones se busca cambiarlas radicalmente.

En efecto, el artículo 320 de la Constitución de 1999 dispone que **“el Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”**, disponiéndose la **obligación** para **“el ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela”** de contribuir **“a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos”** y con la precisión de que **“en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”**.

En la norma, además, se precisó que **la actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se debía realizar “mediante un acuerdo anual de políticas”**, en el cual se de-

bían establecer “los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales”. La norma del artículo 320 precisa las formalidades de dicho acuerdo, el cual debe ser firmado por el Presidente del Banco Central de Venezuela y el titular del ministerio responsable de las finanzas, **el cual se debe divulgar en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional**. De acuerdo con la Constitución, es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo “que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos”, debiendo especificarse en el acuerdo, “los resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos”.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone eliminar todo este detallado marco regulatorio para garantizar la estabilidad económica y la coordinación entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central, y en su lugar se propone que el artículo 320 tenga la siguiente redacción: “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social. Igualmente velará por la armonización de la política fiscal con la política monetaria, para el logro de los objetivos macroeconómicos”. Con ello, se elimina todo principio de coordinación entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central, el cual queda sin autonomía como un brazo ejecutor de lo que aquél disponga.

2. *El control de las Reservas Internacionales por el Ejecutivo*

En cuanto al régimen del fondo de estabilización macroeconómica que el artículo 321 de la Constitución de 1999 se exige que se establezca por Ley para “garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios”, con la precisión de que el funcionamiento del fondo debe sujetarse a los “principios básicos la efi-

ciencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone eliminar totalmente la existencia del Fondo de Estabilización macroeconómica, y en su lugar se propone que la norma del artículo 321 quede redactada de manera que de **atribuir “al jefe de Estado” la función “de administración de las reservas internacionales”**, para lo cual se lo autoriza a **“establecer, en coordinación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas excedentarias”** con la expresa indicación de que las mismas se deben destinar **“a fondos que disponga el Ejecutivo Nacional** para inversión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento **de las misiones** y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación”.

SEXTA PARTE

LOS CAMBIOS EN LOS DERECHOS LABORALES: UNA “REFORMA” CONSTITUCIONAL INÚTIL

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, se propone la reforma de dos artículos del capítulo de la Constitución relativo a los derechos laborales, cuyo contenido, en realidad, no ameritan de reforma constitucional alguna para su implementación.

La primera propuesta se refiere al artículo 87, básicamente en relación con al régimen de seguridad social de los trabajadores no dependientes. Dicha norma, en efecto, además de establecer que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, dispone que el Estado debe garantizar la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho; declarando como “fin del Estado fomentar el empleo” y remitiendo a la **ley la adopción de medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores no dependientes**. La norma, además, exige que todo patrono debe garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, obligando al Estado a adoptar medidas y crear instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.

La propuesta de reforma relativa a dicho artículo fundamentalmente consiste, primero, **en eliminar la declaración de que el fomento del empleo es un fin del Estado**; segundo, **en eliminar la**

obligación de los patronos de garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, y sustituirla con la previsión de la obligación del Estado de garantizar que en todos los centros laborales se cumplan las condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales acordes con la dignidad humana y de crear instituciones que permitan el control y supervisión del cumplimiento de estas condiciones de trabajo, y la formulación del principio de que en aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad el patrono “debe adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas condiciones”; y tercero, en lugar de sólo remitir a la ley para la adopción de medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, se propone definir algunos contenidos de la misma al prever que “a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerza por cuenta propia cualquier actividad productiva para el sustento de si mismo y de su familia, la Ley creará y desarrollará todo lo concerniente a un “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, para que con el aporte del Estado y del trabajador, pueda éste último gozar de los derechos laborales fundamentales tales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, post natal y otros que establezcan las leyes”.

La verdad es que para la implementación de lo que se propone en esta “reforma” bastaba sancionar una ley que regulara todos esos aspectos, conforme a la norma vigente. La “reforma”, en realidad, nada cambia en relación a lo que conforme a la norma del artículo 87 de la Constitución pudiera desarrollarse por el legislador.

La segunda de las reformas propuestas en materia de derechos laborales, se refiere al artículo 90 en relación con la jornada de trabajo. En efecto, el artículo 90 de la Constitución de 1999 dispone que “la jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales” y en los casos “en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales”, prohibiéndose a los

patronos a “obligar a los trabajadores a laborar horas extraordinarias”. El artículo, además, establece el principio de que **se debe propender “a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine”** y se debe “disponer lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras”; y consagra el derecho de los trabajadores “al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas”.

La propuesta de reforma relativa a dicho artículo fundamentalmente consiste, primero, en **reducir los límites máximos de la jornada de trabajo a seis horas diarias y treinta y seis horas semanales**, para la jornada diurna; y a **seis horas diarias ni de treinta y cuatro semanales**, para la jornada nocturna, para lo cual, en realidad, hubiera bastado la sanción de una ley, ya que lo que se establece en la Constitución es un límite máximo; y en segundo lugar, en indicar que la **mejor utilización del tiempo libre de los trabajadores no sólo es en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural** de los mismos, sino además, en beneficio de **la educación, formación integral, desarrollo humano, moral, y técnico** de los trabajadores, para lo cual, de nuevo, no es necesario “reformular” la Constitución, bastando que ello se establezca en la ley.

Por tanto, en esta materia laboral, la “reforma” propuesta de los artículos 87 y 90 de la Constitución es un ejercicio inútil, pues lo que en ellas se propone puede establecerse mediante ley en ejecución de las normas de la Constitución de 1999, tal como están redactadas¹⁷.

17 La única explicación razonable de estas “reformas” constitucionales inútiles, es la que se deriva de la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, de que el referendo sobre la aprobación de la Constitución debe ser “en bloque”, y no separadamente, de manera que desestime el posible voto “NO”, que podría significar votar en contra de estas mejoras laborales que, como se dijo, sin embargo, no requieren estar previstas en la Constitución para ser implementadas.

SÉPTIMA PARTE

LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA FUERZA ARMADA: DE UN ESTADO CIVIL A UN ESTADO MILITARISTA

Otra materia que constituyó una novedad en la Constitución de 1999 es la relativa a la Fuerza Armada Nacional dentro del régimen de la seguridad y defensa, con acentuado carácter militarista.

En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, además de cambiarse el nombre de la institución de **Fuerza Armada Nacional por Fuerza Armada Bolivariana** (art. 156,8; 236,6; 328 y 329) y de sus componentes de **Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional**, por **Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana, Guardia Territorial Bolivariana y Milicia Popular Bolivariana** (Art. 329); se formulan propuestas de reforma respecto de los artículos 328 y 329 de la Constitución.

En cuanto al artículo 328 de la Constitución de 1999, el mismo dispone que la Fuerza Armada Nacional **constituye “una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico”**, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. La norma agrega, que **“en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”**, siendo sus pilares fundamentales **“la disciplina, la obediencia y la subordinación”**.

En la propuesta de reforma del artículo 328, en primer lugar, se busca eliminar la previsión constitucional de que la Fuerza Armada es "institución esencialmente profesional, sin militancia política", y en su lugar se propone establecer que constituye "un cuerpo esencialmente patriótico popular y antiimperialista". Con ello, desaparece la institución militar como institución profesional, y desaparece la prohibición de que la misma no tenga militancia política, definiéndosela como "patriótico popular y antiimperialista", lo que busca abrir el camino constitucional para la integración de la Fuerza Armada en el partido político de su Comandante en Jefe, quien ejerce la Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades (como se propone en la reforma del artículo 236,6 de la Constitución).

En segundo lugar, entre los objetivos de la Fuerza Armada, además de ser organizada para "garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico", se propone agregar, además, que es para "preservarla de cualquier ataque externo o interno".

En tercer lugar, en lugar de establecerse que esos objetivos se deben lograr "mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional", se propone que se regule que se deben lograr "mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación". Se incorpora, en esta forma, la "doctrina militar bolivariana", como elemento esencial de la actuación de la Fuerza Armada, aún cuando se desconozca su contenido exacto, se incorporan elementos de guerrilla como "la guerra popular de resistencia", y se convierte a la Fuerza Armada en organización de policía nacional, al atribuírsele la competencia en materia de **seguridad ciudadana y conservación del orden interno**. Además, con la previsión de que entre sus funciones está la de participar en forma "activa

en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación”, **constitucionalizando la militarización del Estado y la Administración.**

En cuarto lugar, en lugar de establecerse como lo prevé la Constitución de 1999 que en el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada **“está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”**, se propone sustituir esta disposición por la indicación de que en **“el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial extranjero”**. La consecuencia de este cambio, es la **eliminación de la prohibición impuesta constitucionalmente a la Fuerza Armada de que pueda estar al servicio de persona o parcialidad política alguna**, lo que de nuevo busca abrir el camino constitucional para la integración de la Fuerza Armada en el partido político de su Comandante en Jefe, quien ejerce la Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades (como se propone en la reforma del artículo 236,6 de la Constitución), quien la puede poner a su servicio o al servicio del partido del gobierno.

Recuérdese, además, que en la reforma que se propone al artículo 236,7, se busca atribuir al Presidente de la República, en tal carácter de Comandante en jefe, la potestad de **promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes (art. 236,7)**, lo que constituye el instrumento para asegurar la sujeción política de los mismos.

En quinto lugar, además de establecerse que sus pilares fundamentales son la Constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación, se propone agregar que **“sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar: “Libertar a la patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo”**.

En cuanto al artículo 329 de la Constitución de 1999, el mismo dispone que, **“el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las**

operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación”, y en cuanto a la Guardia Nacional, la misma debe “cooperar en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”. La norma agrega que “la Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”.

En la propuesta de reforma del artículo 329, en primer lugar, se **umentan a cinco los componentes militares de la Fuerza Armada Bolivariana**, como cuerpos de tierra, mar y aire, organizados administrativamente así: el **Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana, la Guardia Territorial Bolivariana y la Milicia Popular Bolivariana**.

En segundo lugar, se busca disponer en la norma constitucional que los cinco componentes o cuerpos militares se deben “**estructurar en unidades combinadas de guarnición, unidades combinadas de adiestramiento y unidades de operaciones conjuntas**, tanto en el nivel táctico como en el nivel estratégico, a efectos del cumplimiento de su misión”.

En tercer lugar, mediante una “Disposición Transitoria” se busca establecer en cuanto a la Guardia Nacional, además de que la misma “**cambiará su denominación militar por el de Guardia Territorial**”, que dicho cuerpo “se convertirá en un cuerpo esencialmente militar, pudiendo ser destinada por su Comandante en Jefe para conformar cuerpos de tierra, mar y aire como parte integrante de otros componentes militares; y además, que **también podrán formarse cuerpos policiales con una parte de sus recursos humanos, técnicos y materiales**”.

En cuarto lugar, en otra “Disposición Transitoria” se busca establecer que “**las unidades y cuerpos de la reserva militar se transformarán en unidades de la Milicia Popular Bolivariana**”.

Con estas reformas se busca **terminar de acentuar el carácter político de la Fuerza Armada y el militarismo del Estado**, que se había iniciado en la propia Constitución de 1999, de cuyas normas ya había desaparecido “el carácter apolítico y no deliberante” de la

Fuerza Armada que establecía el artículo 132 de la Constitución de 1961; la obligación esencial que tenía la Fuerza Armada Nacional conforme a ese mismo artículo, de asegurar “la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”; la tradicional prohibición de que la autoridad militar y la civil no podían ejercerse simultáneamente que establecía el artículo 131 de la Constitución de 1961; y el control por parte de la Asamblea Nacional respecto de los ascensos de los militares de alta graduación (art. 331, C. 1961).

OCTAVA PARTE

EL SENTIDO DE LO QUE PUEDEN SER LAS “FUTURAS” REFORMAS CONSTITUCIONALES YA ANUNCIADAS

El Presidente de la República, el 15 de agosto de 2007 presentó a la Asamblea Nacional un Anteproyecto de la **Primera reforma** Constitucional, lo que significa que con ello se está anunciando que se **propondrán otras** en el progresivo proceso de destrucción de la democracia y del Estado de Derecho.

Para el diseño de las reformas constitucionales, como se dijo, en enero de 2007 el Presidente designó un **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución** el cual, en junio de 2007 dio a conocer una serie de propuestas de reformas constitucionales, muchas de las cuales fueron incorporadas en el **Anteproyecto** que el Presidente presentó a la Asamblea Nacional en agosto de 2007, o complementan las propuestas formuladas por el Presidente, por lo que se han analizado al estudiar el contenido del Anteproyecto. Las otras propuestas de reformas constitucionales formuladas por el **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución que no guardan relación con el Anteproyecto**, dada la composición del referido Consejo integrado por las altas autoridades del Estado que se han mencionado, sin duda, lo lógico es que servirán de orientación para las futuras reformas, y en todo caso, sirven para precisar el sentido y alcance de las mismas.

A continuación, por tanto, analizaremos las propuestas formuladas por el **Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución** cuya divulgación se efectuó en junio de 2007 (en lo adelante:

Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007), y que no fueron incorporadas por el Presidente en su **Anteproyecto de Primera Reforma Constitucional** o que no tienen relación directa con estas..

I. REFORMAS EN EL RÉGIMEN GENERAL DEL PODER PÚBLICO

1. *Las nuevas orientaciones en materia de relaciones internacionales*

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en relación con los principios que rigen las relaciones internacionales, se propone agregar “la **Doctrina Bolivariana**”, el principio de “**complementación**” “y la consolidación de un **mundo pluripolar**” (art. 152). Además, se propone calificar la “práctica democrática” que la República debe defender en todos los organismos e instituciones, como “**participativa y protagónica**”

Por otra parte, en el 153, se busca agregar como objetivo de la integración latinoamericana y caribeña previsto en el artículo 153 de la Constitución, de defender los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región, el de la “consolidación de los pueblos de nuestra América, como un **bloque de Poder Autónomo entre las naciones latinoamericanas**”; y que en las políticas de integración, además de privilegiar las relaciones con Iberoamérica, la República debe privilegiar las relaciones con “**los países del Sur**”, como política común de toda América Latina “basada en un **Pacto de repúblicas**”.

2. *Las reformas en cuanto al régimen tributario*

El artículo 316 de la Constitución de 1999 dispone que el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, respecto del artículo 316 sobre los principios del sistema tributario, además de establecerse que el mismo procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, se propone agregar el principio de la **“territorialidad de la renta, de acuerdo con el cual los tributos se cancelan al Estado en cuyo territorio esté situada la fuente o la causa de su enriquecimiento”**. Con esta propuesta, se convierte a los Estados de la Federación, a los cuales se los minimiza en las diversas propuestas de reforma y se les quita toda competencia tributaria, **en recaudadores únicos de todos los tributos nacionales**.

En cuanto al principio de la progresividad, en las propuestas de reforma 2007 se propone la transformación del sistema tributario en un **sistema tributario socialista**, al agregar al artículo 316, expresamente, que **“la ley establecerá medidas especiales para asegurar la aplicación estricta del principio de progresividad a los fines de que paguen cualitativa y cuantitativamente más tributos quienes mayores niveles de egresos y patrimonios posean, todo bajo la óptica de la solidaridad y el modelo tributario socialista”**.

En la Constitución de 1999 se regula, además, el principio de la legalidad tributaria (art. 317) y se estableció en forma expresa lo que constituye una novedad en nuestro ordenamiento constitucional, que es el principio de que **“ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”**. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **eliminar del artículo 317 la prohibición general del efecto confiscatorio de los tributos**.

En dicho artículo, después de reiterarse el principio de que no pueden cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes, se propone agregar a la norma una **prohibición general respecto de todo tipo de estímulos fiscales**, en el sentido de que **“en consecuencia, ni los Cuerpos Legislativos ni ninguna otra autoridad de**

la República, los Estados y Municipios podrán en ningún caso suscribir acuerdos, convenios ni contratos con el objeto de excluir a contribuyentes o grupo de contribuyentes de la aplicación de futuras reformas tributarias, ni para garantizarles la estabilidad de ciertas medidas hacendísticas. El capital financiero no podrá ser exonerado de tributos ni gozar de regímenes tributarios más favorables que el aplicado directamente en actividades productivas”.

Esta propuesta prohibitiva se repite y reitera en las propuestas de reforma que se formulan respecto de los artículos 52, 89 y 162.

El artículo 183 de la Constitución prohíbe a los Estados y a los Municipios el establecimiento de tributos sobre importación, exportación o tránsito sobre bienes, sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional; y sobre consumo de bienes en casos específicos. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar al artículo 183 que se refiere a las prohibiciones a los Estados y Municipios, las siguientes prohibiciones: “**contraer deuda pública interna o externa**, salvo en lo relativo a aquellos contratos de gestión ordinaria cuya ejecución se extiende por varios ejercicios fiscales”, y “**celebrar contratos, convenios o acuerdos tendientes a excluir a determinados contribuyentes o grupo de contribuyentes de la aplicación de la reforma tributaria** que la entidad sancione”.

Ello se reitera en las propuestas de reforma del artículo 162.

3. *Las reformas al régimen de la responsabilidad del Estado*

Una de las innovaciones importantes de la Constitución de 1999 en materia de régimen general del ejercicio del Poder Público, fue la previsión expresa del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado; es decir, de las personas jurídicas estatales, básicamente las que resultan de la distribución vertical del Poder Público (Repúblicas, Estados y de Municipios), por los daños y perjuicios que causen los funcionarios en ejercicio de sus funciones. Dispuso así, el artículo 140 que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y dere-

chos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.

La expresión “funcionamiento de la Administración Pública”, de carácter muy genérico, permite que la responsabilidad del Estado se origine cuando la lesión se derive del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a cargo del Estado o en general, de la actividad administrativa realizada por la Administración Pública, como estructura orgánica.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca agregar a la norma del artículo 140, un apartado en el cual se dispone, totalmente **fuera de contexto pues parece que se refiere a un supuesto caso de responsabilidad** contractual y no de responsabilidad extracontractual que es la prevista en la norma, y además, en una forma **muy mal redactada**, que “En ningún caso se reconocerá responsabilidad cuando los daños alegados por los particulares se refieran a la falta de ingreso de beneficios económicos esperados, sean atribuibles a conflictos laborales o a conmociones públicas, o al ejercicio de poderes soberanos discrecionales”.

Además, también se propone agregar al artículo 140 una norma también **fuera de contexto pues su regulación pertenece al Código Civil**, según la cual, “los ciudadanos y ciudadanas asimismo responderán penal, administrativa y patrimonialmente por los daños que causen a los bienes del dominio público y privado de la República, así como a los de los entes o sociedades en las que esta tenga participación o al patrimonio de las comunidades, consejos comunales y otros entes de interés social protegidos por esta Constitución.

4. *Las propuestas de reformas sobre prohibiciones a los Estados*

En las *Propuestas de reforma 2007*, en el artículo 162 se propone **agregar prohibiciones adicionales a “los Estados de la República”**, indicándose que no podrán: “**asumir funciones diplomáticas ni consulares propias; suscribir tratados con países ni con organismos internacionales; contratar deuda pública; y suscribir convenios, acuerdos o contratos con contribuyentes o grupos de contribuyentes específicos con la finalidad de excluirlos de la aplicación de las re-**

formas tributarias". Esto mismo se vuelve a proponer como reforma del artículo 183 que se refiere a las prohibiciones a los Estados y Municipios, al proponerse incluir dos ordinales (3 y 4) con las siguientes prohibiciones: "4. **Contraer deuda pública interna o externa**, salvo en lo relativo a aquellos contratos de gestión ordinaria cuya ejecución se extiende por varios ejercicios fiscales", y "5. **Celebrar contratos, convenios o acuerdos tendientes a excluir a determinados contribuyentes o grupo de contribuyentes de la aplicación de la reforma tributaria** que la entidad sancione".

Prohibiciones similares se repiten en la propuesta de reforma del artículo 317 sobre el sistema tributario.

5. *Las propuestas de reformas sobre limitaciones a los municipios*

Por otra parte, es de observar que en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en el artículo 168 se **busca eliminar de las competencias municipales** la competencia esencial del numeral 2 del artículo 168 relativa a "la **gestión de las materias de su competencia**", con lo que se vaciaría a los Municipios de todo sentido de entidad autónoma. Igualmente se propone **eliminar** la previsión del artículo 168 de la Constitución de 1999 que dispone que las actuaciones de los Municipios, en el ámbito de sus competencias, **se deben cumplir incorporando la participación ciudadana** al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. En el *Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007*, en cambio se propone **encasillar dicha participación ciudadana**, sólo "a través de los **Consejos del Poder Popular** y de los **medios de producción socialista**".

En cuanto al régimen de gobierno y administración del Municipio, el mismo corresponde al Alcalde, quien además, tiene el carácter de la primera autoridad civil (art. 174), y es electo para un período de 5 años pudiendo ser reelecto una sola vez. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en el artículo 174 se propone establecer la posibilidad de reelección indefinida de los Alcaldes.

Además, en las Propuestas de reforma se limita la autonomía municipal, al pretender agregarse al artículo 174 que los Alcaldes están obligados a **rendir cuenta de su gestión**, anual y públicamente, mediante un informe que presentará ante el **Consejo Municipal del Poder Popular** y ante la **Federación de los Consejos Comunales** existentes en el Municipio, y en el caso que ese informe sea improbadado, será sometido en un lapso de 30 días a la consideración de la **Asamblea Nacional para que ésta decida por mayoría de sus integrantes si procede su destitución**.

El artículo 175 de la Constitución, atribuye la función legislativa del Municipio al Concejo Municipal, integrado por concejales elegidos. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en los artículos 174 y 175 al Concejo Municipal se lo denomina **Consejo Municipal del Poder Popular**.

La Constitución de 1999, por otra parte, reguló a las Contralorías Municipales para controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, a cargo de un Contralor designado por el Consejo Municipal, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se limita esta manifestación de la autonomía municipal, y se propone que la Contraloría Municipal actúe **“bajo la rectoría de la Contraloría General de la República”**, estando además, **obligada** a “conocer, procesar y decidir oportunamente todas las denuncias o informaciones que sobre la materia de su competencia le formulen los ciudadanos o ciudadanas individual o colectivamente en el ejercicio de la **Contraloría Social**”.

II. PROPUESTAS DE REFORMA SOBRE EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

1. *Los cambios respecto de la jefatura del Estado*

En relación con el sistema presidencial de gobierno en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se propone que en el artículo 225, se establezca que “el Presidente de la República es el **jefe del estado y Jefe de gobierno, en cuya condición dirige al Ejecuti-**

vo Nacional”, incorporándose a la Constitución una terminología más propia de los sistemas parlamentarios (jefe de gobierno); y en el artículo 236,2 atribuir al Presidente la facultad de “**dirigir las acciones de Estado y de Gobierno y coordinar las relaciones con los otros Poderes Públicas Nacionales** en su carácter de Jefe de Estado”.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* también se busca acentuar, como lo ha propuesto el Presidente de la República en su Anteproyecto, el carácter presidencialista del sistema de gobierno, al pretender eliminar la sola posibilidad de reelección inmediata del Presidente por una sola, y establecer formalmente la posibilidad de **reelección indefinida** del Presidente de la República (art. 230), como lo ha propuesto el Presidente en su Anteproyecto, y al hacer aún **más dificultosa la posibilidad de realización de un referendo revocatorio** del mandato del Presidente de la República (art. 72).

Por otra parte, en cuanto a las competencias del Presidente de la República, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se busca **eliminar la necesaria aprobación de la Asamblea Nacional en relación con la formulación y ejecución del Plan Nacional de desarrollo** por parte del Presidente de la República (art. 236, 18).

2. *La búsqueda de la permeabilidad política entre el ejecutivo y el legislativo*

La Constitución de 1999 estableció el principio de la separación de poderes, lo que en la tradición del sistema presidencial, conforme al sistema de balances y contrapesos, para asegurar la separación entre la Asamblea Nacional como órgano que ejerce el Poder Legislativo y los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, dispuso que los diputados a la Asamblea **no pueden ser designados para cargos ejecutivos, “sin perder su investidura**, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva” (art. 191). Ello significa, que salvo estas excepciones, si un diputado es nombrado Ministro o director de un instituto autónomo, por ejemplo, pierde su investidura de diputado,

y al cesar en su cargo ejecutivo no puede volver a la Asamblea Nacional.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **diluir** la separación de poderes entre el Legislador y el Ejecutivo, al eliminarse la **pérdida de investidura de los diputados** cuando acepten cargos ejecutivos y, al contrario, se establece una total **permeabilidad** al proponerse que los diputados a la Asamblea Nacional puedan aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, **“si son llamados para ejercer cargos cualquiera de los Poderes Públicos Nacionales, previa autorización por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, pudiendo reincorporarse a sus funciones cuando cesen en la gestión y así lo determine la mayoría de los integrantes de la Asamblea”** (art. 191).

3. *La dilución de la responsabilidad del Ejecutivo en los Estados de excepción*

La Constitución de 1999 dispone con precisión las obligaciones del Presidente y su responsabilidad así como de los otros altos funcionarios del Ejecutivo, aún en los casos de que se decreten los Estados de excepción (art. 232).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, si bien en el artículo 232 se propone agregar a las obligaciones del Presidente de “procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República”, la de **“procurar la mayor suma de felicidad posible, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el humanismo ético”**; se elimina la previsión establecida en la Constitución de 1999 de que **la declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad**, ni la del Vicepresidente Ejecutivo, ni la de los Ministros, de conformidad con esta Constitución y con la ley” (art. 232).

4. *La creación de la figura de los vicepresidentes territoriales*

El sistema presidencial venezolano no cambió por el hecho de haberse establecido en la Constitución de 1999 la figura del Vicepresi-

dente Ejecutivo, quien es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República (art. 238). El artículo 225 de la Constitución de 1999, sin embargo, dispone que el Poder Ejecutivo se ejerce además de “por el Presidente de la República”, por “el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros y demás funcionarios” que determine la Constitución, agregando el artículo 226 que “el Presidente de la República es el jefe del Estado y del Ejecutivo nacional, en cuya condición dirige la acción de gobierno”.

Sin embargo, para reforzar aún más el presidencialismo, las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, buscan invertir el sentido de las normas de los artículos 225 y 226. Se propone que el artículo 225 establezca que “el Presidente de la República es el **jefe del estado y Jefe de gobierno**, en cuya condición dirige al Ejecutivo Nacional”, incorporándose a la Constitución una terminología más propia de los sistemas parlamentarios (jefe de gobierno); y se propone que en el artículo 226 (que recoge el texto del 225 de la Constitución de 1999), se agregue que además de al Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente puede nombrar “**Vicepresidentes para determinado territorio, sector o materia**, quienes tendrán las competencias que este les asigne”. Esta previsión se repite en la propuesta de reforma de los artículos 236,3; 238; 239,10; 241, y 243. Se trata de una nueva figura para reforzar la acción directa del Presidente en el territorio o en materias, independientemente del sistema de distribución vertical del Poder Público o de las posibles autonomías, que se establezca, con lo que se acentúa aún más el **centralismo de Estado controlado por el Presidente**. En las Propuestas de reforma 2007, sin embargo, los Vicepresidentes contradictoriamente no aparecen como miembros del Consejo de Ministros, y solo se prevé que podrán ser convocados al mismo (art. 242).

Por otra parte, conforme al artículo 240, la aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo, por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. En estos casos, el funcionario removido no puede optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o de Ministro por el resto del período presidencial. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se reduce la **incompatibilidad** para alguno de los

Vicepresidentes removidos de poder ser designado **Ministro** que establece el artículo 240 de la Constitución de 1999, y solo dispone la incompatibilidad para optar al cargo de **Vicepresidente ejecutivo** para el resto del período.

III. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL: LA ASAMBLEA NACIONAL

1. *La asamblea del Poder Popular*

El Poder Legislativo Nacional se ejerce por la Asamblea Nacional como cuerpo unicameral, con lo que la Constitución de 1999 cambió radicalmente la tradición **bicameral** que caracterizaba a los órganos del Poder Legislativo Nacional, lo que por lo demás es contradictorio con la forma federal del Estado, y con la descentralización política.

Ahora, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca cambiar la denominación de la Asamblea Nacional por la de “Asamblea Nacional del Poder Popular” (art. 186); y además, ampliar sus competencias. Eso se propone en relación con la atribución del Tribunal Supremo de Justicia para decretar, sin mayores precisiones “la destitución del Presidente de la República” (art. 233). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca limitar esta potestad del Tribunal Supremo de Justicia, al exigirse que la **destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia**, queda sujeta a la “previa aprobación de la Asamblea Nacional” (art. 233), lo que refuerza la concentración del poder en la Asamblea. Por otra parte, en cuanto a las causales de falta absoluta del Presidente de la República, en las propuestas de reforma 2007 se busca exigir que en los casos de **renuncia del Presidente**, esta debe ser “escrita, suscrita y debidamente aceptada por la Asamblea Nacional” (art. 233) lo que de nuevo refuerza la concentración de poder en la Asamblea.

Además, las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* buscan ampliar las competencias de la Comisión Delegada de la Asamblea, **agregándose a las atribuciones** de la misma previstas en el artículo 196 de la Constitución de 1999, las de “7. Autorizar al Ejecuti-

vo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley; y 8. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el País”.

2. *Los cambios en materia de revocación de mandato de diputados*

De acuerdo con el artículo 198 de la Constitución, el mandato de los diputados puede ser revocado, y en esta materia, la Constitución reguló expresamente los efectos de la revocatoria al disponer que “no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período” (art. 198).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se busca **eliminar esta congruente y democrática incompatibilidad** de que una vez revocado el mandato, el diputado revocado no pueda optar a cargos de elección en el siguiente período, y solamente establecer, en cambio, que el diputado “revocado, no podrá optar a cargos de elección durante el período para el cual había sido electo”.

3. *Los cambios en el procedimiento de formación de las leyes y la eliminación de los mecanismos de consulta*

Una innovación de importancia en materia de formación de las leyes en la Constitución de 1999, fue la establecida en el artículo 211 en el sentido de que durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, la Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, **deben consultar** a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos (art. 206).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se busca eliminar la participación política en la consulta de las leyes, al eliminarse la exigencia de que la ley debe establecer “**mecanismos de consulta a la sociedad civil**”, como lo prevé el artículo 206, y sustituirla por la expresión “**mecanismos de consulta al pueblo**” que es más imprecisa y elusiva para establecer dichos mecanismos; y en particular, **eliminar toda consulta posible a los Estados**, cuando una ley afecte sus intereses, sustituyéndose el derecho de palabra que tienen los Estados a través de un o una representante designa-

do o designada por el Consejo Legislativo, como lo dispone el artículo 211, por “los representantes de los **Consejos comunales** designados”.

Por otra parte, en cuanto a la sanción de las leyes, las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* buscan agilizar extremadamente el proceso de formación de las leyes, proponiendo **eliminar la exigencia de las dos discusiones necesariamente en días diferentes**, lo que significa que una ley puede recibir **las dos discusiones en un solo día** (art. 207); y eliminando la exigencia de devolución a la Comisión respectiva para que con el tiempo necesario elabore un informe para la segunda discusión, sustituyendo ese procedimiento por uno que permita que en caso de modificaciones “**puedan ser corregidas en la misma sesión**” quedando sancionada la ley, y proponiendo que en “caso contrario la Comisión correspondiente hará las correcciones respectivas y **en la sesión siguiente entregará la versión para su lectura y sanción de la Ley**”.

4. *Los cambios en materia de control parlamentario*

Tanto la Asamblea como sus Comisiones pueden realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento, estando los funcionarios públicos obligados a suministrar las informaciones y documentos que le sean requeridos (art. 223). Las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* buscan limitar las facultades de control al establecer, por una parte, como excepción general a la obligación de los funcionarios de suministrar las informaciones y documentos que les requieran la Asamblea o las Comisiones en sus funciones de control, al agregar al artículo 223 que “**podrán excepcionarse de prestar determinadas informaciones cuando ello afecta la seguridad y defensa de la nación o la materia de reserva legal**”; y por la otra que cuando se trate de la **comparecencia de las máximas autoridades de los poderes públicos, las Comisiones no pueden acordarla sino que la misma debe ser aprobada por la Directiva de la Asamblea Nacional** (art. 224).

IV. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL

1. *La restricción de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial*

El principio de la independencia del Poder Judicial está declarado en el artículo 254 de la Constitución, el cual, además, establece la autonomía financiera del mismo, al disponerse que dentro del presupuesto general del Estado se le debe asignar al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se **elimina este principio de autonomía presupuestaria** y solo se establece que “a tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una **partida anual suficiente del presupuesto ordinario nacional**, para su efectivo funcionamiento (art. 236, 18).

2. *La eliminación de las jurisdicciones en la Constitución*

En la Constitución de 1999 se establecieron normas expresas regulando las **jurisdicciones constitucional** (art. 334), **disciplinaria judicial** (art. 267), contencioso-administrativo (art. 259), electoral (art. 297), **penal militar** (art. 261), **justicia de paz y jurisdicción indígena** (art. 260).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en una confusión entre “Jurisdicción” como conjunto de órganos judiciales con competencias específicas como siempre se ha usado el término en el derecho venezolano, y “jurisdicción” como la función estatal de decidir sobre derecho en casos concretos, particularmente atribuida como función propia a los órganos del Poder Judicial, o “jurisdicción” como ámbito de acción territorial de los órganos del Estado; **propone eliminar de la Constitución la denominación de “Jurisdicción” y sustituirla por “competencia”**. Así se propone en relación con la **Jurisdicción Contencioso Administrativa** (art. 259), **jurisdicción de los pueblos indígenas** (art. 260) **jurisdicción penal militar y jurisdicciones especiales** (art. 261), **Jurisdicción Constitucional** (266,1), y **Jurisdicción disciplinaria judicial** (art. 267, 270) y la **Jurisdicción contencioso electoral** (art. 297); la cual se busca aho-

ra denominar como **competencia contencioso administrativa** (art. 259), competencia en las instancias judiciales de los pueblos indígenas (art. 260); **competencia penal militar** y competencias especiales (art. 261), **competencia constitucional** (266,1), **competencia disciplinaria judicial** (art. 267) y **competencia contencioso electoral** (art. 297). Para sólo destacar el tema de la **Jurisdicción contencioso administrativa o de la Jurisdicción Constitucional**, la propuesta de reforma ignora los principios más elementales y universales del derecho administrativo y del derecho constitucional.

Las Propuestas de reforma 2007, además, en relación con los medios alternativos de solución de conflictos, como el **arbitraje**, la **conciliación** y la **mediación** que el artículo 258 exigen que deben ser promovidos, busca limitar su aplicación en “lo relativo a la **propiedad pública y social**, **materias atinentes al orden público** y demás excepciones establecidas en esta Constitución”.

En relación con las instancias de **justicia de los pueblos indígenas** se **elimina** la limitación de su uso en materias que sean contrarios al **orden público** (art. 260).

En cuanto a la **Jurisdicción penal militar**, que se pretende denominar, competencia penal militar, se **elimina la exigencia de la Constitución (art. 261) de que se registrarán por el sistema acusatorio** remitiéndose solo a lo que disponga el Código Orgánico de Justicia Militar; y además se **elimina** el principio fundamental de que “la **comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios**” que establece el artículo 261, con lo que se abre la posibilidad de que esos delitos cometidos por militares se juzguen por **tribunales militares**.

Por último, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, sin embargo, **eliminan este principio de la elección popular y democrática por votación universal, directa y secreta de los jueces de paz** sustituyéndose la elección popular directa por la **designación “por la asamblea de ciudadanos por votación universal, directa y secreta conforme a la ley”**.

3. *La absurda constitucionalización de la ausencia de jurisdicción disciplinaria*

La Constitución dispone que los jueces sólo pueden ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley (art. 255), es decir, los juicios disciplinarios, llevados por jueces disciplinarios, los cuales hasta ahora no se han establecido, y en cambio, por la prolongación de la transitoriedad constitucional, continúa funcionamiento una Comisión de Funcionamiento del Poder Judicial inicialmente creada por la Asamblea Constituyente en 1999.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se **legitima y regulariza esta transitoriedad**, al disponerse que “mientras no se constituyan los tribunales, estará a cargo de **una comisión judicial** integrada por los presidentes de las diferentes Salas del Tribunal Supremo. En ejercicio de la competencia disciplinaria, se podrá suspender o remover a los jueces provisorios o titulares” art. 267)

4. *Las reformas al Tribunal Supremo de Justicia*

La Constitución de 1999 creó el Tribunal Supremo de Justicia en sustitución de la Corte Suprema de Justicia, el cual funciona en Sala Plena y en Salas Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Penal y de Casación Social, cuya integración y competencia deben ser determinadas por su ley orgánica, regulándose sólo la competencia de la Sala Social en lo referente a la casación agraria, laboral y de menores (art. 262).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, sin embargo, se **elimina la enumeración de las salas del Tribunal Supremo**, remitiéndose la integración, competencia y funcionamiento de las mismas a la ley (art. 262, y art. 266). Ello implica, ante todo, **la eliminación del rango constitucional de la Sala Constitucional como el órgano de la Jurisdicción Constitucional**.

Por otra parte, en relación con el artículo 264 sobre el período de doce años de los magistrados del Tribunal Supremo, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se establece un período de seis

años para los magistrados, pudiendo ser **reelegidos por una sola vez** (art. 264).

Por otra parte, el artículo 263 de la Constitución establece con todo detalle los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, entre los que está el haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, o haber sido profesor universitario en materias jurídicas durante un mínimo de 15 años y tener el rango de profesor titular, o haber sido juez por un mínimo de 15 años

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se relajan estos estrictos requisitos, y se dispone que el requisito de ejercicio de la abogacía es **solo durante un mínimo de 10 años**; que el requisito de haber sido profesor universitario en ciencia jurídica es **solo durante un mínimo de diez años, eliminándose el requisito de ser profesor titular**; en cuanto al requisito de haber sido juez por un mínimo de 15 años, **se elimina, sustituyéndoselo por haberse desempeñado en el Sistema Judicial por un mínimo de 10 años** (art. 263).

5. *La eliminación de la Jurisdicción Constitucional (Sala Constitucional)*

El Tribunal Supremo de Justicia, ejerce, en exclusiva, a través de la Sala Constitucional la Jurisdicción constitucional (art. 334); es la máxima autoridad judicial en la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 259); resuelve los conflictos entre autoridades judiciales; conoce en exclusiva de los recursos de casación y de interpretación y tiene a su cargo declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento de altos funcionarios (art. 266).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en el artículo 266 sobre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, **se elimina la referencia a la Jurisdicción Constitucional** y se la sustituye por la de "competencia constitucional" (art. 266,1); en cuanto al **antejuicio de mérito** se agrega "a los **integrantes de los Parlamentos regionales** elegidos nacionalmente por voto popular, y en cuanto a los militares se precisa que se aplica solo a los **Almirantes y generales** (art. 266,3); en cuanto a la competencia para dirimir contro-

versias administrativas se agrega a las que se susciten entre **Consejos Comunales** de un mismo Estado (art. 266,4)

6. *Las reformas al sistema de gobierno y administración del sistema judicial*

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999 fue el atribuir al Tribunal Supremo de Justicia el “Gobierno y la Administración del Poder Judicial”, eliminando al Consejo de la Judicatura que como órgano con autonomía funcional ejercía estas funciones conforme a la previsión del artículo 217 de la Constitución de 1961.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca reformar el artículo 267 para establecer directamente en la Constitución que la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, lo ejercerá el Tribunal Supremo “a través de la **Magistratura**, cuyo titular será **designado por la Asamblea Nacional**, mediante el mismo procedimiento de nombramiento de los magistrados”. En esta forma, se **limita la potestad del Poder Judicial** en cuanto al gobierno y administración del Poder Judicial, con la intervención de la Asamblea Nacional.

En las Propuestas de reforma 2007, además, se atribuye a los tribunales disciplinarios, además de la jurisdicción disciplinaria sobre los jueces, “la **inspección y vigilancia de los Tribunales**”, eliminándose esta competencia de las que tiene el Tribunal Supremo. Sin embargo, como dichos tribunales no se han regulado y creado, en la propuesta de reforma 2007 se propone regular transitoriamente el tema disponiéndose que “mientras no se constituyan los tribunales, estará a cargo de una comisión judicial integrada por los presidentes de las diferentes salas del Tribunal Supremo” (art. 267).

Además, se busca **limitar una vez más el carácter del Tribunal Supremo de Justicia** como rector del sistema judicial, y se atribuye a la **Asamblea nacional** la competencia para **designar al titular del Sistema autónomo de Defensa Pública** con el mismo procedimiento como se designan los magistrados (art. 268).

En cuanto al sistema penitenciario, en las Propuestas de reforma 2007 se **elimina** tanto la necesidad de que se cree un ente penitencia-

rio con carácter **autónomo** y personal exclusivamente técnico y exigencia de su **administración descentralizada** a cargo de los gobiernos estatales, o municipales, como la **posibilidad de que sean sometidos a modalidades de privatización** (art. 272).

V. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER CIUDADANO

Otra innovación de la Constitución de 1999 fue declarar formalmente como formando parte de la distribución del Poder Público Nacional, además del Poder Legislativo Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial, tanto al Poder Ciudadano como al Poder Electoral (art. 136). En cuanto al Poder Ciudadano, el mismo lo ejercen dos órganos de rango Constitucional con tradición en el país, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (Fiscalía General de la República) y un órgano nuevo creado por la Constitución de 1999, el Defensor del Pueblo, en la orientación general de los organismos similares creados en toda América Latina.

De acuerdo con la Constitución, a los efectos del nombramiento de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano por la Asamblea Nacional, el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que debe estar integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **cambiar radicalmente** el régimen del **Comité de Evaluación del Poder Ciudadano**, atribuyéndose a la **Asamblea Nacional** la potestad de convocarlo, disponiendo su integración, **no por representantes de los diversos sectores de la sociedad** como exige el artículo 279 de la Constitución de 1999, sino **“por Diputados y voceros de los diferentes sectores del Poder Popular”** (art. 279). Se propone, además, la **eliminación** de la exigencia del nombramiento de los miembros del Poder Ciudadano por el voto favorable de las **dos terceras partes** de sus integrantes de la Asamblea Nacional, por sólo **la mayoría de sus integrantes**.

Por otra parte, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone que la Asamblea Nacional **pueda remover a los**

integrantes del Poder Ciudadano por la mayoría de sus integrantes. (art. 279).

Por último, en relación con la Contraloría General de la República (art. 287), dado su ámbito de control sobre ingresos, gastos y bienes nacionales, las funciones de la misma se establecieron en la Constitución “sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley”(art. 289,1); y en cuanto al control de la deuda pública, la misma la ejerce la Contraloría “sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la Ley”(art. 289,2).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se elimina toda referencia a que las funciones de la Contraloría General de la República se ejerce “**sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios**, de conformidad con la ley”(art. 289,1); o en materia de deuda pública, “**sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios**, de conformidad con la Ley”(art. 289,2)

Por otra parte, para asegurar el **predominio de la Contraloría General de la República** en materia de control fiscal, particularmente **sobre los Estados y Municipios**, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se propone agregar al artículo 290 que remite a la ley la regulación de lo relativo a la organización y funcionamiento de la misma, que: “las funciones de control de la Contraloría General de la República podrán extenderse de acuerdo con la ley a los institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y todos los demás entes en los cuales la República tenga participación o aporte fondos. La ley determinará así mismo, lo relativo al sistema nacional de control fiscal en los ámbitos nacional, estatal y municipal y proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los **Contralores Estadales y Municipales**, cuya **selección se hará mediante concurso público convocado por la Contraloría General de la República** y serán designados y destituidos por el Contralor General”.

VI. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER ELECTORAL

Otra innovación de la Constitución de 1999 fue que elevó al rango constitucional al órgano de control electoral, a cuyo efecto el artículo 292 dispone que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se elimina la competencia que el artículo 293,7 le asigna al Poder Electoral en materia de **Registro Civil**, y se **elimina**, además, **la potestad del Poder Electoral de intervenir en el funcionamiento interno de las asociaciones, proponiéndose** en la norma del ordinal 6 del artículo 293, que se asigne al Consejo Nacional Electoral, competencia sólo para **“asesorar** las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos **cuando estos lo soliciten”** así como para **“cooperar** en los procesos electorales de **otras organizaciones del Poder Popular a solicitud de estas**, o por orden del Tribunal Supremo de Justicia”.

Por otra parte, el artículo 296 exige que el Consejo Nacional Electoral debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; postulados por un Comité de Postulaciones Electorales de candidatos, el cual debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley (art. 295). Lamentablemente, la Ley Orgánica del Poder Electoral lo que organizó en lugar del Comité, fue una comisión parlamentaria ampliada, sujeta al parlamento.

En las **Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007**, se establece directamente que el Comité de Postulaciones Electorales, integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, **será designado por la Asamblea Nacional** (art. 295).

Además, en el artículo 296, se busca sustituir la postulación de unos miembros del Comité por **“la sociedad civil”**, como lo indica el artículo 296 de la Constitución, por **“los sectores sociales del pueblo organizado”**; y la postulación de otros en lugar de por **“las universidades nacionales”** por las **“universidades públicas”** (art. 296).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, además, se busca **eliminar** la necesidad del voto de las **dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional** para designar los miembros del Consejo Nacional Electoral, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus integrantes (art. 296).

VII. LAS REFORMAS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

En esta materia de los derechos constitucionales y, en particular, en relación con los derechos humanos, sin duda, la Constitución de 1999 fue un texto en el cual se incorporaron notables innovaciones signadas por la progresividad de la protección de los derechos humanos. Lamentablemente, en esta materia las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* tienen un notable carácter regresivo, completamente contrario al principio de progresividad que se establece en el artículo 19 de la Constitución, que configuran al Estado como un Estado Policial.

1. Los cambios en el régimen general de los Derechos Humanos

El artículo 19 de la Constitución de 1999 dispone que el Estado debe garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se busca agregar al artículo 19, como titulares de los derechos humanos que el Estado debe garantizar, además de a las personas, **“a las colectividades”**.

En el artículo 20 de la Constitución de 1999 se consagró el principio de la libertad, al establecer que “toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca ampliar las **posibilidades de imponer limitaciones** al ejercicio de los derechos constitucionales, al agregarse a las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social, las que puedan derivarse **“del interés general”** y de los **“deberes constitucionales”**.

Esta ampliación de las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos, los **deja a la merced de la política de Estado** que se establezca derivada de las **normas constitucionales de orientación ideológica** que se propone en la reforma. De manera que por ejemplo, al proponerse en el artículo 62 el deber constitucional del Estado y la sociedad de propiciar la participación del pueblo “para la construcción de la **sociedad socialista**”, los derechos humanos pueden ser **limitados para asegurar el cumplimiento de ese “deber” ideológico**, lo cual implica, con esta propuesta de reforma, la **posibilidad de “criminalizar” la disidencia**.

Por otra parte, los derechos humanos garantizados y protegidos conforme a la Constitución de 1999, no son sólo los enumerados en su texto sino todos los demás que sean inherentes a la persona humana no enunciados incluso en los instrumentos internacionales. Con ello, los derechos inherentes a las personas adquirieron una posibilidad y dimensión muy extensa. Sin embargo, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en el artículo 22 se reduce la **enumeración** de los derechos humanos para servir de parámetro en la identificación de derechos inherentes a las personas, sólo a los indicados en la **Constitución y en los tratados internacionales** sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República.

En la propuesta de reforma, además, se determina la posibilidad de establecer derechos inherentes no sólo de las personas como derechos individuales, sino también como **derechos colectivos**.

Igualmente en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se propone calificar el ámbito de los derechos en caso de falta de ley reglamentaria, al modificar la tradicional frase de que “la falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos” por la frase de que “la falta de ley que desarrolle estos derechos no menoscaba el **goce y el ejercicio real y efectivo** de los mismos”.

Por último, una de las grandes innovaciones de la Constitución de 1999 en esta materia de derechos humanos, fue el haberle otorgado rango constitucional a los **tratados internacionales** sobre derechos humanos, disponiendo la aplicación prevalente de los mismos

en relación con la Constitución y las leyes, si establecen normas más favorables; y además, la aplicación inmediata y directa de los mismos por los órganos que ejercen el Poder Público.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se busca reducir y minimizar los importantes efectos protectivos de derechos humanos establecidos en esta norma del artículo 23 de la Constitución de 1999, **eliminándose totalmente la jerarquía constitucional y su prevalencia sobre el orden interno**, al formularse la norma en el sentido de que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, **mientras se mantenga vigentes, forma parte del orden interno, y son de aplicación inmediata y directa por los órganos del Poder Público**”.

La eliminación de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y su valor prevalente sobre lo regulado en el orden interno, es un **duro golpe al principio de la progresividad** en la protección de los derechos que se recoge en el artículo 19 de la Constitución, que no permite regresiones en la protección de los mismos.

Además, en las propuestas de reforma 2007 se agrega a la norma del artículo 23 que “**Corresponde a los tribunales de la República conocer de las violaciones sobre las materias reguladas en dichos Tratados**”, lo que no tendría mayor efecto pues los tribunales tienen esa competencia, pero no exclusiva. Sin embargo, la propuesta de reforma no busca ratificar la competencia de los tribunales nacionales, lo que lamentablemente busca es establecer una **prohibición constitucional para la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos** para conocer de las violaciones de la misma. Con una norma de este tipo, Venezuela quedaría **excluida de la jurisdicción de dicha Corte internacional y del sistema interamericano** de protección de los derechos humanos.

2. *La regresión en el régimen general de las garantías constitucionales*

En la Constitución de 1999 también se incorporaron un conjunto de regulaciones muy importantes, relativas a las garantías constitu-

cionales de los derechos humanos, es decir, de los instrumentos que permiten hacer efectivo el ejercicio de los derechos.

En tal sentido en el artículo 21 de la Constitución se reguló ampliamente la garantía de la igualdad ante la ley con un contenido muy rico en contra de todo tipo de discriminaciones.

En las propuestas de reforma 2007 se busca ampliar el ámbito protectorio contra las discriminaciones al agregarse nuevos elementos en el ordinal primero del artículo, primero, para garantizar la no discriminación, no sólo por motivos fundados “en la raza, el sexo, el credo, la condición social” como dice la Constitución de 1999, sino además, en **la etnia, la nacionalidad, la condición económica o de salud, la edad, el idioma y la discapacidad**; y segundo, **para asegurar que no sólo no se admiten discriminaciones que en general, “tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”, sino las que “tengan por objeto o por resultado transgredir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, individual o colectivo en condiciones de igualdad, inclusión y solidaridad de los derechos y libertades de toda persona”.**

En la Constitución de 1999 se estableció, además, la garantía de la irretroactividad de la ley en relación con toda “disposición legislativa” (art. 24), cualquiera que pueda ser el contenido de su regulación, y por tanto, no sólo en materia penal. La consecuencia es que por supuesto, también en materia civil, laboral, administrativa, comercial o de cualquier otra índole la garantía de la irretroactividad es esencial para el ejercicio de los derechos humanos. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* lamentablemente se busca reducir la garantía de la irretroactividad de la ley, al **limitársela a la “materia penal”**, lo que también debe considerarse como una regresión y violación del principio de la progresividad.

En cuanto a la garantía de la nulidad de los actos violatorios de derechos constitucionales y de la previsión de la responsabilidad de los funcionarios que los dicten o ejecuten, la Constitución la reguló siguiendo la tradición constitucional (art. 25) anterior. En las *Pro-*

puestas de Reforma del CPRC, junio 2007, se cambia la redacción en algunos aspectos de la norma, y se propone disponer que son nulos los actos dictados en ejercicio del Poder Público cuando violen o menoscaben “**los derechos y garantías contemplados en la Constitución**”, en lugar de “**los derechos garantizados por esta Constitución**”, agregándose además del efecto de la nulidad, que dichos actos “**no generarán efecto alguno**”.

En cuanto a las responsabilidades de los funcionarios derivadas de ordenar o ejecutar dichos actos, en la propuesta de reforma se agrega a la responsabilidad penal, civil y administrativa, la responsabilidad **disciplinaria**, quizás sin percatarse que esta es una especie de la responsabilidad administrativa respecto de los funcionarios.

Por último, entre las garantías constitucionales, en el artículo 29 de la Constitución se estableció expresamente la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades; enumerándose una serie de delitos respecto de los cuales las acciones penales son imprescriptibles. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, sin duda confundiendo el sentido protectorio de la norma, se agregó que la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos no sólo se refiere a los cometidos por sus autoridades sino además, “**por los particulares**”, lo que es absolutamente inútil pues ello es de la **esencia de la función judicial y de los tribunales**. La norma, en realidad lo que persigue es garantizar que los delitos cometidos por funcionarios no queden impunes, amparados por la potestad estatal.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, además, en relación a la **imprescriptibilidad de la acción penal** en relación con los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra, se agrega “**las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la desaparición forzada de personas**”.

Además se propone sustituir la garantía judicial prevista en la norma, al proponerse cambiar la redacción de que “**las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investi-**

gados y juzgados por los **tribunales ordinarios**", por la frase de que "Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados por el **Ministerio Público** y juzgados por los **tribunales competentes**". Con la redacción que se propone de **sustituir la garantía de los "tribunales ordinarios" por los "tribunales competentes"**, lo que abre es la posibilidad de que se puedan establecer en esos casos, **tribunales ad hoc o que los tribunales militares** sean los que conozcan de esos delitos. Esta regresión también **afecta el principio de la progresividad**.

Por último debe mencionarse que el colorario internacional de las garantías constitucionales está en el artículo 31 de la Constitución, que regula el derecho de toda persona de acceder a la justicia internacional para solicitar la protección de los derechos humanos; estableciéndose además, la obligación para el Estado de adoptar, conforme a procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se cambia radicalmente el sentido de esta norma de la Constitución de 1999, eliminándose su efecto protectorio, en evidente violación del principio de la progresividad.

En efecto, en la propuesta de reforma, en primer lugar, se sustituyó el sentido del derecho previsto de "**solicitar el amparo** a sus derechos humanos" el de "**demandar violación** a sus derechos humanos"; en segundo lugar, se busca limitar el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para la protección de los derechos humanos, con el objeto de demandar violación a sus derechos humanos, "**siempre que hayan agotado las instancias nacionales**"; es decir, se pretende **constitucionalizar la limitación al acceso a las instancias constitucionales** al necesario agotamiento de las instancias nacionales, lo que puede hacer nugatorio el derecho de acceso a las instancias internacionales; y en tercer lugar, se propone sustituir la obligación del Estado **de adoptar** "conforme a procedimientos establecidos en

esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales”, por una obligación **de ejercer** “conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales **a través de los tribunales nacionales**”. Con ello, se busca restringir una vez más el ámbito de actividad protectoria de los tribunales internacionales.

3. *Los cambios en el estatuto de las personas*

A. *La eliminación del derecho humano a la nacionalidad originaria*

Una de las innovaciones fundamentales de la Constitución de 1999 en materia de nacionalidad, fue la previsión expresa de la nacionalidad por nacimiento como un derecho humano, razón por la cual se dispuso en el artículo 35 que los venezolanos por nacimiento “no pueden ser privados de su nacionalidad”. Es decir, no puede haber acto estatal alguno que disponga la pérdida de la nacionalidad venezolana por nacimiento.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se ha propuesto **eliminar la garantía constitucional del derecho humano a la nacionalidad originaria**, prevista en el artículo 35 de la Constitución, consistente en la prohibición de que mediante un acto estatal se pueda privar a alguien de su nacionalidad originaria. La propuesta de reforma es sin duda, contraria al principio de la progresividad que existe en materia de derechos humanos (art. 19).

La Constitución, por otra parte, establece la posibilidad de renuncia de la nacionalidad (art. 36), exigiendo por ejemplo, en caso de renuncia de la nacionalidad por nacimiento, que para su recuperación la persona entre otros requisitos se domicilie en el territorio por un lapso no menor de dos años (art. 36). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca agravar los requisitos para la recuperación en estos casos de la nacionalidad por nacimiento renunciada, exigiéndose que la persona se domicilie en el territorio por un **lapso no menor de diez años ininterrumpidamente**.

B. *Los cambios en el régimen de la extradición*

En cuanto a los extranjeros, el artículo 271 de la Constitución estableció el principio de que en ningún caso podrá ser negada la extradición de los mismos cuando sean “responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se cambia el régimen de protección frente a los delitos mencionados de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos; y se propone establecer en el artículo 271, solamente que la extradición de los extranjeros solo se debe conceder en cumplimiento de un **tratado o de una ley**, atendiendo al principio de reciprocidad, quedando **excluida de la extradición los delitos políticos y aquellos a los cuales corresponda la pena de muerte o condena a cadena perpetua**, según el derecho del Estado reclamante”.

4. *La regresión en el régimen de los derechos individuales*

La Constitución, por supuesto, entre los derechos individuales estableció la libertad personal con una serie de garantías entre las cuales, la más importante es que el arresto o detención de las personas sólo puede tener lugar “en virtud de orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti” (art. 44,1).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se cambia radicalmente el sentido de esta norma protectora de la Constitución de 1999, al pretender **definirse el propio texto constitucional el sentido de la flagrancia**, en una forma tan amplia, que la garantía de la intervención judicial desaparece, dando origen a la posibilidad de **detenciones administrativas, policiales y políticas**. En la propuesta de reforma de este artículo se propone agregar a la norma del artículo 44,1 de la Constitución de 1999 que “se entiende que hay flagrancia, cuando se sorprende al imputado en plena ejecución del delito,

o lo acabe de cometer y se le persiga para su aprehensión, o se le sorprenda a poco de haberse cometido el delito, cerca del lugar donde se produjo el hecho punible, con instrumentos u otros objetos que hagan presumir la autoría el mismo, o cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad, la víctima o el clamor público”.

Por otra parte, en la propuesta de reforma de nuevo en violación del principio de la progresividad, se busca autorizar constitucionalmente que **personas no investidas de autoridad puedan detener a otras personas**, al buscarse cambiar la norma que dispone que “En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”; por una que establece que “en este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la aprehensión que de él o ella hagan personas investidas o no de autoridad”.

Otro derecho individual importante regulado en la Constitución es el derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico a lo que se agregó la inviolabilidad de todo recinto privado (art. 47), con una serie de garantías específicas. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, también se busca cambiar radicalmente el sentido de esta norma protectora de la Constitución de 1999, sustituyendo el ámbito de la inviolabilidad del **hogar domestico y del recinto privado**, por la tradicional expresión **hogar o domicilio privado**, dejando fuera del alcance de la inviolabilidad los recintos privados distintos al hogar o al domicilio.

Por otra parte, la **restricción al allanamiento** establecida en el artículo 47 de la Constitución de 1999, en el sentido de que “no podrán ser allanados, sino mediante **orden judicial**” con la **restricción de que solo se puede dictar “para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales**, respetando siempre la dignidad del ser humano”, se pretende relajar, en el sentido de establecer en su lugar, que “será requerida orden de un juez competente para su registrado, inspección o allanamiento, respetando siempre la dignidad huma-

na” sin limitación, agregándose inconvenientemente que **“se exceptuará la presentación de orden judicial en aquellos casos en que se pretenda impedir la comisión de un delito”**, con lo que se deja abierta, materialmente sin límites y a la sola interpretación del funcionario policial, el allanamiento del hogar o domicilio.

Por otra parte, en las propuestas de reforma 2007, se busca **eliminar las limitaciones establecidas respecto de “visitas sanitarias”** en el sentido de que sólo pueden practicarse “previo aviso de los funcionarios que las ordenen o hayan de practicarlas”.

La Constitución de 1999 también reguló detalladamente la libertad de tránsito (art. 50), estableciendo entre otros aspectos la garantía de que en caso de establecerse el cobro de peaje en las vías públicas, debía asegurarse una vía alterna. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca eliminar la exigencia constitucional de que **“en caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna”**, eliminándose toda referencia a la posibilidad de concesiones de uso y explotación de vías públicas.

En relación con los derechos individuales, la Constitución garantiza, además, el derecho a la libre expresión del pensamiento (art. 57), prohibiendo el anonimato, la propaganda de guerra y los mensajes discriminatorios o que promuevan la intolerancia religiosa; y garantizó a los funcionarios públicos el derecho de dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca eliminar la prohibición que establece el artículo 57 de la Constitución de 1999, de los mensajes que específicamente promuevan la intolerancia religiosa, y se agregó la prohibición de los mensajes que promuevan **“la intolerancia, el odio o la incitación al delito”**.

Además, se busca eliminar del artículo 57 de la Constitución, **la prohibición de la censura a los funcionarios públicos** para dar cuenta de los asuntos bajos sus responsabilidades.

La Constitución también garantiza el derecho de los ciudadanos de tener acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en

materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada (art 143). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **ampliar este derecho** de acceso a los archivos y registros, no sólo administrativos, sino “**públicos y privados**, pero sólo “en los cuales consten derechos que específica y particularmente les conciernen y cuya prueba no podrían obtener de otro modo”.

Por otra parte se busca **omitir** la referencia limitativa respecto del acceso a **lo aceptable dentro de una sociedad democrática**, y en su lugar se propone establecer que los órganos de los poderes públicos **no pueden dar a conocer las materias de sus archivos relativos a la intimidad de la vida privada, investigación criminal y judicial en curso, seguridad y defensa, políticas financieras y fiscales**, y otras que la ley declare de contenido confidencial, reservado o secreto. Los funcionarios que divulguen informaciones a las cuales atribuyen carácter confidencial o secreto esta Constitución o las leyes incurrirán en responsabilidad civil, administrativa y penal de acuerdo con ellas”.

La Constitución, además, establece el derecho de toda persona de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y eventualmente solicitar judicialmente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos (art. 28). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se agrega a esta norma del artículo 28 de la Constitución que las “**personas naturales y jurídicas solo están autorizadas a suministrar a los particulares y poderes públicos las informaciones que deban rendirle de acuerdo a la ley**”; y en cuanto a las excepciones, se elimina toda referencia específica a las **informaciones periodísticas**.

La Constitución regula además, el derecho a la protección del honor y la intimidad (art. 60), disponiendo específicamente que la ley debe limitar “el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el

pleno ejercicio de sus derechos". En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **sustituir** el mandato de que la ley debe limitar "el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos" por la indicación de que la ley deba desarrollar "los mecanismos para **garantizar la protección y el ejercicio pleno de estos derechos**".

La Constitución garantiza además el derecho a la libertad de conciencia, como un derecho de ejercicio individual salvo que su práctica afecte la personalidad de la persona o constituya delito (art. 61). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se **amplían las excepciones** al ejercicio del derecho en el sentido de que no se pueda invocar no sólo cuando afecte su personalidad o constituya delito, sino cuando **afecta "a la sociedad" o una persona o grupo de personas**".

Por último, otra innovación de la Constitución de 1999 fue establecer el derecho de las personas a obtener protección por parte del Estado respecto de su integridad física y sus propiedades, además de respecto del disfrute de sus derechos (art. 55). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se **elimina la mención a las "propiedades"** de las personas, como objeto de protección, y se lo sustituye por la de "sus **bienes y posesiones**".

5. *Los cambios en materia de restricción ejecutiva de las garantías constitucionales de los derechos humanos*

En los casos en los cuales se decreten estados de excepción, conforme al artículo 317 de la Constitución, el Presidente de la República en Consejo de Ministros está facultado para restringir "temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles"

A esta lista de garantías constitucionales que no pueden restringirse en forma alguna, y que están reguladas en los artículos 43; 43,2; 46,1; 49, y 58, se deben considerar como "los demás derechos

humanos intangibles” cuyas garantías tampoco pueden restringirse, a los indicados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 4), y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 27), y que son: la garantía de la igualdad y no discriminación; la garantía de no ser condenado a prisión por obligaciones contractuales; la garantía de la irretroactividad de la ley; el derecho a la personalidad; la libertad religiosa; la garantía de no ser sometido a esclavitud o servidumbre; la garantía de la integridad personal; el principio de legalidad; la protección de la familia; los derechos del niño; la garantía de la no privación arbitraria de la nacionalidad y el ejercicio de los derechos políticos al sufragio y el acceso a las funciones públicas.

La Constitución de 1999, en todo caso, eliminó la posibilidad de que se pudiesen “suspender” las garantías constitucionales, como lo autorizaba el artículo 241, en concordancia con el artículo 190,6 de la Constitución de 1961, y que dio origen a tantos abusos institucionales, quedando la potestad de excepción, a la sola posibilidad de “restringir” (art. 236, ord. 7) las garantías constitucionales; y en ningún caso permite la suspensión de los derechos humanos en si mismos, que en un Estado democrático no son suspendibles.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en una **regresión asombrosa** en materia de derechos humanos, en la propuesta de reforma del artículo 337, no sólo se busca **volver a establecer la posibilidad de que se puedan por decisión Ejecutiva “suspender” las garantías constitucionales**, sino **más grave aún** que se puedan **“suspender” los derechos constitucionales** lo cual es inadmisibile en una sociedad democrática.

Por lo demás, en franca violación del principio de progresividad en materia de derechos humanos, se busca reducir los derechos y garantías que no pueden ser suspendidos, a **solo “los derechos a la vida y prohibición de incomunicación o tortura”, eliminándose la prohibición** que establece el artículo 337 de la Constitución de 1999 de que puedan **restringirse los derechos al debido proceso, a la información y los demás derechos humanos intangibles”**.

VIII. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

1. *La eliminación de los supuestos constitucionales de participación*

Las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, propugnan la eliminación de los únicos supuestos en los cuales está constitucionalmente regulada la participación de la sociedad civil en asuntos públicos. Se propone, así, en la reforma del artículo 127, la eliminación de la exigencia de que “es una obligación fundamental del Estado, **con la activa participación de la sociedad**, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Además, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone eliminar las formas de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos establecidas en la Constitución de 1999 para la postulación de los candidatos a los cargos de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de Miembros del Consejo Nacional Electoral, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República y del Fiscal General de la República, que deben hacerse ante la Asamblea Nacional por sendos Comités de Postulaciones integrados por “representantes de los diferentes sectores de la sociedad” (arts. 270, 295 y 279). En efecto, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, al establecerse, por ejemplo, que el Comité de Postulaciones Electorales se indica en el artículo 295, “**será designado por la Asamblea Nacional**”, con lo que se busca constitucionalizar la tendencia en convertirlos dicho Comité en una Comisión parlamentaria. En cuanto a la propuesta de reforma del artículo 297 se cambia la configuración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano para estar integrado en lugar de por representantes de los diversos sectores de la sociedad, “**por Diputados y voceros de los diferentes sectores del Poder Popular**”

2. *La limitación al derecho a la participación política mediante referendos y la restricción a la democracia directa*

Tanto el artículo 5° como el 62 de la Constitución de 1999 prevén el ejercicio del sufragio y del derecho a la participación política mediante la elección de representantes, o en forma directa a través de los mecanismos previstos en la Constitución y en la ley, en particular, además de los previstos en el artículo 70, mediante los referendos que son de cuatro tipos tal como se regulan en los artículos 71 a 74 de la Constitución, y que son el referendo consultivo, el referendo revocatorio, el referendo aprobatorio, y el referendo abrogatorio.

Lo importante de estas previsiones, además de regular mecanismos concretos de democracia directa, es **la consagración de la iniciativa popular** como medio de participación democrática para la formulación de la solicitud de la convocatoria a los referendos: en el 10 % de los inscritos en la circunscripción correspondiente para los referendos consultivos (art. 71); el 20 % de los inscritos en la circunscripción correspondiente para los referendos revocatorios (art. 72); el 15 % de los inscritos en el registro electoral para los referendos aprobatorios de ciertos tratados internacionales (art. 73); el 10% de los inscritos en el registro electoral para los referendos abrogatorios de leyes (art. 74); y el 5 % de los inscritos en el registro electoral para los referendos abrogatorios de decretos leyes (art. 74).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **limitar la participación de los ciudadanos en materia de referendos** al aumentarse el número de firmas requeridas para la iniciativa en la convocatoria de los referendos, así: **el 20 % en lugar del 10 %** de los inscritos en la circunscripción correspondiente para los referendos consultivos (art. 71); **el 30 % en lugar del 20 %** de los inscritos en la circunscripción correspondiente para los referendos revocatorios (art. 72); **el 20 % en lugar del 10%** de los inscritos en el registro electoral para los referendos abrogatorios de leyes (art. 74); y **el 20 % en lugar del 5 %** de los inscritos en el registro electoral para los referendos abrogatorios de decretos leyes (art. 74).

Además, en las propuestas de reforma se **busca eliminar completamente la iniciativa popular** para la solicitud de referendos

aprobatorios de ciertos tratados internacionales, que en la Constitución está prevista con el 15 % de los inscritos en el registro electoral (art. 73).

Por otra parte, específicamente en cuanto al **referendo revocatorio**, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se pretende **cambiar el sistema del mismo y hacerlo menos participativo y mas dificultoso: en primer lugar**, en vez de que la solicitud de convocatoria del mismo corresponda directamente, como un **derecho popular**, a un número no menor del 20 % de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción, con la propuesta de reforma se busca que **sea el Consejo Nacional Electoral**, el que “a solicitud de algún interesado, activará el mecanismo para que los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción del Registro Electoral, en un número no menor del treinta por ciento puedan solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”, distorsionando la iniciativa popular; y **en segundo lugar**, en lugar de solo exigirse que concurren al referendo un número de electores igual o superior al **25% de los electores** inscritos, para que se considere revocado el mandato, si votan a favor de la revocatoria un número igual o mayor de electores que los que eligieron al funcionario; en la propuesta de reforma se exige que concurren al referendo un número de electores **“igual o superior al número que participó en el proceso que lo eligió”**, lo que significa un porcentaje muy superior al previsto en la Constitución.

Adicionalmente en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **restringir la iniciativa popular** para la formulación de **enmiendas constitucionales** reguladas en el artículo 341, **aumentándose el porcentaje** de ciudadanos que la pueden requerir de **15% al 20%**; para la formulación de reformas constitucionales, **aumentándose el porcentaje** de ciudadanos que la pueden requerir de **15 % al 25 %** (art. 342); y para la solicitud de convocatoria de la **Asamblea Constituyente** **aumentándose el porcentaje** de ciudadanos que la requieran de **15 % al 30 %** (art. 348).

3. *Las reformas para el establecimiento de la reelección general*

En las Propuestas de reforma 2007, al contrario de lo dispuesto en estas normas constitucionales de 1999 que restringen la reelección, **se ha establecido el principio general de la reelección indefinida de los cargos de elección popular.**

En efecto, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en la misma orientación, se propone que los diputados a la Asamblea Nacional (art. 192); de los Gobernadores de Estado (art. 160); y de los Alcaldes (art. 174) puedan también ser electos de inmediato para nuevos períodos, sin límites. La única limitación que se propone reformar es la relativa a la reelección de los legisladores a los Consejos Legislativos de los Estados estableciéndose que es sólo “por dos periodos consecutivos como máximo” (art. 162). En cambio, en cuanto a la reelección de los **altos funcionarios del Estado, no electos**, es decir, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los miembros del Poder Ciudadano (Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, uniformemente, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se les ha buscado reducir el período y se ha dispuesto la posibilidad de **reelección por una sola vez** (arts. 164, 280, 284 y 288). Sin embargo, nada se propuso respecto de la reelección de los miembros del Consejo Nacional Electoral.

4. *Las reformas en el régimen de las elecciones internas de los partidos políticos y de las elecciones*

Otro aspecto que constituyó una innovación en la Constitución de 1999, como reacción contra la falta de democratización interna de los partidos políticos, y su conducción por cúpulas eternizadas de dirigentes, fue la previsión de que no sólo la designación de sus directivos de los partidos debía realizarse mediante elecciones, sino que, incluso, la escogencia de los candidatos de los partidos políticos a los cuerpos y cargos representativos, debe realizarse mediante votación interna democrática (art. 67), estando la organización de dichas elecciones internas a cargo del Consejo Nacional Electoral (art. 293, ord. 6).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **eliminar** esta exigencia del artículo 293,6 de la Constitución de la intervención del Consejo Nacional Electoral en la organización de las elecciones internas de los partidos políticos, de los sindicatos, y de los gremios profesionales, y sustituirla por una norma que atribuya al Consejo, solamente, la posibilidad de “asesorar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos **cuando estos lo soliciten**” y la posibilidad de “cooperar en los procesos electorales de otras organizaciones del Poder Popular que a solicitud de estas, o por orden del Tribunal Supremo de Justicia”.

Debe mencionarse, por último que en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, si bien se ratificó el derecho de los ciudadanos de concurrir a los procesos electorales postulando candidatos, se buscó agregar una disposición que no está ni en la Constitución ni en la Ley, y que **obliga a los candidatos** a que una vez inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, “es **obligatorio mantenerse en los procesos electorales**” a cuyo efecto “la ley preverá las sanciones y excepciones a esta norma”. Ello, sin duda, es una limitación inaceptable a la libertad política y al derecho pasivo al sufragio con libertad.

IX. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS SOCIALES

1. *Los cambios en materia de derechos sociales y de las familias*

En el campo de los derechos sociales y de las familias, la Constitución de 1999 contiene extensas y complejas declaraciones.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* en lo que se refiere a los derechos de los jóvenes, se propone sustituir la expresión respecto del derecho y deber de ser sujetos activos “**del proceso de desarrollo**”, por el “**del proceso de transformación social**”; y la obligación del Estado de crear oportunidades “**para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta**” por la de crear oportuni-

dades “para el desarrollo de sus capacidades y cualidades hacia el desenvolvimiento pleno de su vida adulta”.

La Constitución reguló, además, el derecho a la salud y a su protección con el deber de participar activamente en su promoción y defensa de la salud, y de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, “de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República” (art. 83). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007 se elimina toda referencia a los tratados y convenios internacionales* suscritos y ratificados por la República, que establezcan medidas sanitarias y de saneamiento que deben ser cumplidas por las personas.

En el artículo 85 de la Constitución se establece que es una obligación del Estado, el financiamiento del sistema público de salud, que debe integrar los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado, además, debe garantizar un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007, se elimina* la previsión del artículo 85 de la Constitución de 1999, sobre la **obligación del Estado de “garantizar un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”**; y **se sustituye** la indicación de que “**en coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará** una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud”, por la de que “**El Estado promoverá y desarrollará** una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud y garantizará un presupuesto que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”.

En cuanto al derecho a la seguridad social, regulado en el artículo 86 de la Constitución, las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* buscan **agregar**, la **prohibición** de que los remanentes netos del

capital destinado a la salud, a la educación y la seguridad social “se puedan invertir en actividades de riesgo”.

2. *Los cambios en relación con los derechos culturales*

La Constitución además, consagró una serie de derechos relativos a la cultura, como la libertad y la creación cultural y la propiedad intelectual con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia (art. 98). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone precisar en el artículo 98 que el Estado reconocerá y protegerá **en forma privilegiada la propiedad intelectual y material de creadores e investigadores** con las condiciones y excepciones que establezca la ley, **eliminándose** la referencia que hace la norma en la Constitución de 1999 a las condiciones y excepciones que establezcan **los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia**”.

Por otra parte, en cuando a las condiciones y excepciones que establezca la ley, se propone agregar en la norma que ello es “**en función del interés social y del derecho de la comunidad al conocimiento y disfrute de tales creaciones**”. Se propone además, agregar que “**el Estado tiene el derecho de declarar de interés público determinadas obras o creaciones o categorías de ellas a fin de asegurar a la sociedad su derecho al conocimiento y al desarrollo cultural**”.

La Constitución de 1999, además, definió los valores de la cultura y estableció como obligación del Estado el garantizar la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación, considerando los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación como inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 99). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **agregar** al artículo 99, la **potestad del Estado de “declarar patrimonio cultural determinados bienes, obras, productos del intelecto, personas, territorios u objetos”**.

En el artículo 100 de la Constitución se establecen los principios que deben guiar la protección de la cultura popular, respetándose la

interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas (art. 100). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007* se propone **agregar** al artículo 100, el reconocimiento de **la diversidad de las culturas** y de sus expresiones.

3. *Los cambios en relación con el derecho a la educación y con la autonomía universitaria*

En cuanto al derecho a la educación, el artículo 102 de la Constitución comienza estableciendo, en general, que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”. La consecuencia de lo anterior es la previsión del mismo artículo 102, en el sentido de imponer al Estado la obligación de asumir la educación como “función indeclinable” y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.

En consecuencia, constitucionalmente se declara a la educación como un servicio público; precisándose, sin embargo, que “el Estado estimulará y protegerá la educación privada que se imparta de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en las Leyes”.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **agregar** al artículo 102, la precisión de que la educación “está guiada por el principio de que **educar es formar voluntades para el ejercicio de la solidaridad y la participación ciudadana**”, y que entre sus fundamentos, está el desarrollo del “**pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo**”.

Se regula en la Constitución, además, el derecho a la educación integral, la gratuidad de la educación pública; y el carácter obligatorio de la educación en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario (art. 103).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **agregar** al artículo 103 que la educación también será gratuita en

“los **postgrados que determine** el Estado; y se propone **eliminar** del texto del artículo, primero, que la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación es “**sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones**”; segundo, la necesidad de que el Estado debe realizar “una inversión prioritaria, **de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas**”; y tercero, el principio de que “**las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva**”.

Además, la Constitución establece el derecho humano a fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura (art. 106). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone eliminar del artículo 106 la exigencia constitucional de que la persona para fundar y mantener instituciones educativas privadas **debe demostrar previamente su capacidad**.

Por otra parte, la Constitución establece en el artículo 108, que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana, precisándose que el Estado debe garantizar servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática; y que los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone sustituir en el artículo 108 el principio de que los medios de comunicación “deben contribuir a la formación ciudadana” por una declaración general de que “**los medios de comunicación social, públicos y privados, prestan un servicio público de interés general y están obligados a contribuir con el Estado y la Sociedad, en la formación y educación ciudadana, como uno de los requisitos para la utilización del espectro radioeléctrico**”. En esta forma se declara a los medios de comunicación en general, es decir, a la **prensa, la radio y la**

televisión, como servicios públicos, con todas las implicaciones regulatorias que ello implica en el derecho público.

En la Constitución de 1999, además, se constitucionalizó el régimen de la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. A tal efecto, la Constitución reconoció el principio de autogobierno de las Universidades, precisándose que la autonomía universitaria es para planificar, los programas de investigación, docencia y extensión, y reconociéndose la inviolabilidad del recinto universitario (art. 109).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se limita seriamente la autonomía universitaria, mediante los siguientes agregados que se propone incorporar al artículo 109 de la Constitución de 1999.

Primero, se precisa que la búsqueda del conocimiento mediante la autonomía universitaria debe hacerse para beneficio de la Nación, pero sujeta a la planificación nacional, agregando a la norma que es para privilegiar “la satisfacción de las necesidades de ésta en tales áreas, y en **coordinación con los planes de desarrollo nacional** sobre dichas materias y los requerimientos de profesionales y personal calificado de la República”.

Segundo, el privilegio del autogobierno universitario se encasilla, al proponerse agregar a la norma que garantiza que las Universidades se darán sus normas de gobierno, la expresión que ello debe ser “**de acuerdo con los principios de la democracia participativa y protagónica**”. Se propone, además, agregar al artículo los siguientes principios para las elecciones universitarias que la ley debe garantizar: **la igualdad entre el voto de los estudiantes y el de los profesores para elegir las autoridades universitarias; el derecho al sufragio a todos los docentes por concurso de oposición; y que las elecciones de rector, vicerrectores, secretario, decanos y directores de escuelas de las universidades se decidan por mayoría absoluta de los universitarios que concurren a votar**”.

Tercero, se limita el principio de la **inviolabilidad del recito universitario**, al disponerse que ello es “con las **excepciones que establezca la Ley**”, quedando la inviolabilidad a la merced del legislador, que fue lo que la Constitución de 1999 quiso evitar.

4. *Los cambios en materia de derechos ambientales*

La Constitución de 1999 también constituye una novedad en cuanto a la regulación de los derechos constitucionales relativos a los derechos ambientales, que precisan el derecho al ambiente como derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuentes obligaciones del Estado de protegerlo (art. 127).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone sustituir en el artículo 127 el párrafo que dispone la “**obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad**”, de “**garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación**, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”, por la declaración general de que “**El agua es un bien social y un recurso natural esencial para el desarrollo de la vida. El acceso al agua y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales**”.

Además, la Constitución destina normas para regular las cláusulas contractuales ambientales obligatorias (art. 129), respecto de lo cual, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar al artículo 129 sobre las cláusulas obligatorias en los contratos públicos que puedan afectar recursos naturales, el principio de que “**será nula y se tendrá por no escrita cualquier cláusula que pretenda obligar a la República o a los entes públicos a indemnizar a la contraparte por la falta de beneficios económicos esperados dentro de cierto lapso y menos cuando dicha ausencia de beneficios esperados o calculados se deba a disturbios públicos, conflictos laborales o mediadas de ejercicio de la soberanía o de defensa de los recursos naturales y la ecología**”.

5. *Los cambios en materia de derechos de los pueblos indígenas*

Otra de las innovaciones de la Constitución de 1999 fue la incorporación de un conjunto de normas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a cuyo efecto el artículo 119 reconoció la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Para evitar la conformación de las bases jurídicas de un Estado dentro del Estado, el artículo 126, dispuso que “Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional”, agregando que “El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional”.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, sin embargo, se propone eliminar del artículo 126 precisamente las últimas dos frases, es decir, que de conformidad con la Constitución los pueblos indígenas “**tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional**” y que “**el término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional**”.

Conforme al artículo 121 de la Constitución los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. A tal efecto se obliga al Estado a fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar al artículo 121, la precisión de que dicho régimen educativo **será implementado por el Estado en forma progresiva**; y además,

que “Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso, aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales, exceptuando los del subsuelo, dentro de su hábitat y tierras para sus actividades tradicionales, subsistencia y desarrollo económico con fines exclusivamente comunitarios...”.

X. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA ECONOMÍA

1. *Las propuestas en cuanto al régimen de las empresas petroleras públicas*

En la Constitución (art. 303) se estableció expresamente que por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional “el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A”, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A. En esta forma, lo que de acuerdo con la Constitución debe permanecer como propiedad de la República (no del Estado) son las acciones de PDVSA, es decir, del holding de la industria petrolera, pero no de las filiales, las cuales son, en realidad, las que realizan las actividades económicas en la industria.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca cambiar radicalmente la concepción de esta regulación, proponiéndose sustituirla por una que establece que “la Nación o el ente a través del cual ésta ejerza la industria de los hidrocarburos **conservará la totalidad de las acciones en las filiales de éste**. Y la mayoría accionaría decisiva que permita el control y dirección en las asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra persona jurídica que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A.”.

2. *Las propuestas en materia del régimen de la economía pública*

En la Constitución de 1999, también constituyendo una novedad, se incorporaron unas secciones sobre el régimen fiscal y presupuesta-

rio; el sistema monetario nacional y la coordinación macroeconómica; estableciéndose, además, en general, que los principios y disposiciones establecidas en la Constitución para la administración económica y financiera nacional, deben regular la de los Estados y Municipios, en cuanto sean aplicables (art. 311 a 317).

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar en el artículo 311 referido al régimen presupuestario, que el ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, además de destinarse a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud, debe también destinarse a financiar “**otros programas de inclusión social**”.

En el artículo 312, referido al endeudamiento público, se propone **eliminar** la previsión de que “la ley **fixará límites al endeudamiento público** de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública”; y se propone **agregar** que, “los **Estados y Municipios no podrán contraer deudas públicas**, aparte de los contratos de gestión continuada y ordinaria que abarquen varios ejercicios fiscales”. Esta prohibición se propone también, en forma reiterativa, en las propuestas de reforma de los artículos 162,183 y 317.

En el artículo 315, referido a la ejecución presupuestaria, al establecerse que los presupuestos públicos anuales de gastos deben establecer de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido los resultados concretos que se espera obtener, se propone **eliminar** la necesidad de indicar, también a los **funcionarios públicos responsables para el logro** de tales resultados.

3. *Los cambios en el régimen de los bienes públicos*

La Constitución declara como bienes del dominio público a los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, (art. 12). La misma norma del artículo 12 de la Constitución dis-

pone que las costas marinas son bienes del dominio público; entendiéndose por tales costas, la parte de la ribera que baña el mar, es decir, la playa o zona que está entre la alta y la baja marea, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone agregar a la misma norma del artículo 12, que son del dominio público “**las playas adyacentes y las vías para el libre acceso a ellas**”.

Por otra parte, en el artículo 304 de la Constitución se dispone que todas las aguas son bienes del dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. Corresponde a la ley establecer las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca consagrar en la norma sobre el dominio público de las aguas, **la reserva a la República, lo que elimina la competencia municipal en la materia, “del servicio de potabilización y distribución de las aguas bajo principios de interés social”, con la prohibición establecida en la Constitución de que tales servicios se puedan “privatizar ni ceder en concesión”**.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, por otra parte, en el artículo 181 de la Constitución se busca calificar expresamente a los ejidos como bienes del dominio público.

XI. LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ESTATALES

Además de constitucionalizar el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, la Constitución de 1999 estableció el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, configurándose claramente al Tribunal Supremo de Justicia, **como Jurisdicción Constitucional**, ejercida por la sala Constitucional, (art. 262, 266,1) a la cual el artículo 334 le asignó la competencia exclusiva de “**declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley**”.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **eliminar la noción de Jurisdicción Constitucional** y sustituirla por “competencia constitucional” y se propone, además, eliminar del texto constitucional, la existencia de la **Sala Constitucional** del Tribunal Supremo de Justicia (art. 262 y 266).

Por otra parte, entre las atribuciones de control concentrado de la constitucionalidad, el artículo 339 de la Constitución establece el que se refiere a los Decretos que declaren Estados de Excepción que deben ser presentados ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, para que se pronuncie sobre su inconstitucionalidad. Por ello, el artículo 336 le atribuye a la Sala, competencia expresa para dicha revisión, que puede ejercer aun de oficio. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **eliminar** del artículo 336,6 de la Constitución, la potestad constitucional atribuida al Tribunal Supremo de **controlar de oficio estos decretos de Estados de excepción**.

XII. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

El Capítulo II del Título relativo a la “Protección de la Constitución”, está destinado a regular las circunstancias excepcionales que pueden originar situaciones de excepción que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas, y que ameritan la adopción de medidas político-constitucionales para afrontarlas.

A tal efecto, la Constitución establece, entre otros aspectos que los estados de excepción tienen que tener un límite de tiempo variable de hasta treinta, sesenta o noventa días, pudiendo ser siendo prorrogables. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **eliminar** del artículo 338 **los lapsos de duración** de los estados de excepción de **30 días** para los **estados de alarma**, **60 días** para los **estados de emergencia económica** y **90 días** para los **estados de conmoción interior o exterior**, con la posibilidad de sólo por un lapso igual, y en su lugar establecer pura y simplemente que los estados de excepción **durarán “mientras se mantengan las causas**

que dieron origen a la medida”, lo que los puede convertir en estados de excepción de duración ilimitada.

Por otra parte, en esta materia, como se dijo anteriormente, en las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en una regresión asombrosa en materia de derechos humanos, no sólo se busca volver a establecer la posibilidad de que se puedan por decisión Ejecutiva “suspender” las garantías constitucionales, sino más grave aún que se puedan “suspender” los derechos constitucionales (art. 337) lo cual es inadmisibles en una sociedad democrática.

XIII. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

En la Constitución de 1999 se establecieron tres mecanismos institucionales para la revisión constitucional que se distinguen según la intensidad de las transformaciones que se proponen, y que son las Enmiendas constitucionales, las Reformas Constitucionales y la Asamblea Nacional Constituyente.

El procedimiento de las Enmiendas Constitucionales para la reforma constitucional, tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental (art. 340).

De acuerdo con el artículo 341,1 la iniciativa para la Enmienda puede partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral; o de un treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente de la República en Consejo de Ministros. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca restringir la iniciativa popular para las enmiendas, aumentándose, en el artículo 341, el porcentaje de ciudadanos que la requieran de 15 % al 20 %.

Por otra parte, en la regulación sobre el referendo aprobatorio de las Enmiendas (art. 341,3 y 4), se dispone que al mismo debe concurrir al menos el 25% de los electores inscritos, bastando para la aprobación que haya mayoría de votos afirmativos (art. 73). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, sin embargo, se propone agregar en el artículo 341,3 de la Constitución que “el Poder

Electoral someterá a referendo el **proyecto de enmienda aprobado por la Asamblea Nacional**, a los treinta días siguientes a su recepción forma”, lo que pudiera dar lugar a interpretar que todo proyecto de enmienda, incluso el que se proponga por iniciativa popular debe ser previamente aprobado por la **Asamblea Nacional**, lo que sería contrario a la participación popular.

Por otra parte, la Constitución exige que las enmiendas sean numeradas consecutivamente, y se publiquen a continuación de la Constitución sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó. En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se propone **modificar las formalidades de publicar las enmiendas** al final del texto con indicación al pie de los artículos enmendados, y en su lugar, se propone que el artículo 341, diga pura y simplemente que “las enmiendas serán numeradas y se incorporarán como un solo cuerpo al texto constitucional”.

En cuanto a las **Reformas constitucionales**, conforme al artículo 342 de la Constitución, tienen por objeto una **revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional**.

De lo anterior resulta que la diferencia entre la Enmienda y la Reforma es muy sutil: aquella tiene por objeto “la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental”; ésta tiene por objeto, “la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional”. En definitiva, podría decirse que la Enmienda tiene por objeto “añadir o modificar” unos artículos y la Reforma la “sustitución” de unos artículos, pero en uno u otro caso, sin alterar o modificar la estructura fundamental de la Constitución.

En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, en el artículo 342 en cuanto al objeto de la reforma de revisión parcial de esta Constitución, se propone que además de que pueda consistir en “la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la es-

estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”, se agregue también la posibilidad de “supresión y adición” de una o varias normas.

Las reformas pueden tener su origen en la iniciativa popular a solicitud de un número no menor del 15 % de los electores inscritos en el registro civil y electoral (art. 342). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **restringir la iniciativa popular** para las reformas constitucionales, **aumentándose**, en el artículo 342, **el porcentaje** de ciudadanos que la requieran de **15 % al 25 %**.

Para la votación en referendo de las reformas constitucionales, el pueblo en principio se debe pronunciar en conjunto sobre la reforma, pero puede votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprueba un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente de la República o un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral (art. 344). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **aumentar el porcentaje** de los electores que pueden solicitar la votación separada de las reformas constitucionales que se regula en el artículo 344 del 5% a “un número no menor del que se requiere para su iniciativa”, es decir, del **25%** que en la propuesta de reforma 2007 se propone para ello.

Por último, como mecanismo de revisión constitucional, la Constitución de 1999, prevé el mecanismo de la Asamblea Constituyente en cuando se trate de “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (art. 347), cuya convocatoria también puede tener iniciativa popular cuando sea solicitada por el quince por ciento de los electores inscritos en el registro electoral (art. 348). En las *Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007*, se busca **restringir la iniciativa popular** prevista en el artículo 348 para la solicitud de convocatoria de la Asamblea Constituyente **aumentándose el porcentaje** de ciudadanos que la requieran de **15% al 30%**.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

**EL NUEVO FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN: LA PROPUESTA DE
"TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y CREACIÓN DE UN NUEVO
ORDENAMIENTO JURÍDICO" PARA ESTABLECER UN ESTADO
CENTRALIZADO, SOCIALISTA, POLICIAL Y MILITARISTA,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
"REFORMA CONSTITUCIONAL"**

PRIMERA PARTE

**LOS CAMBIOS EN LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN
DEL ESTADO: DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DESCENTRALIZADO AL ESTADO
SOCIALISTA CENTRALIZADO**

I.	LA DOCTRINA BOLIVARIANA COMO SUPUESTA DOCTRINA DEL ESTADO SOCIALISTA	23
II.	LA SUSTITUCIÓN DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA POR EL ESTADO SOCIALISTA	25
III.	LA ELIMINACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO	28
IV.	LA FRAGMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.....	31
V.	EL ABANDONO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y DE LA UNIDAD DEL TESORO	32

SEGUNDA PARTE:

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA POLÍTICO: DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA SUPUESTA PARTICIPACIÓN POPULAR CONDUCTA POR EL PODER CENTRAL

I.	LA ELIMINACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A NIVEL LOCAL Y SU SUSTITUCIÓN POR UNA SUPUESTA “PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA”	35
II.	LA ELIMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ALTERNABILIDAD REPUBLICANA CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN INDEFINIDA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	40
III.	EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE ASOCIACIÓN POLÍTICA Y EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS ACTIVIDADES ELECTORALES	41

TERCERA PARTE:

LOS CAMBIOS EN LA FORMA DEL ESTADO: DE LA FEDERACIÓN CENTRALIZADA A LA CENTRALIZACIÓN TOTAL DEL ESTADO

I.	EL DESMORONAMIENTO DE LA FORMA FEDERAL DEL ESTADO	43
1.	<i>El vaciamiento del contenido territorial de la federación.....</i>	43
2.	<i>La nueva división territorial de la República sujeta al Poder Central y con autoridades no electas.....</i>	45
3.	<i>La nueva concepción de la Ciudad Capital sin autonomía política ni gobierno democrático local</i>	49
4.	<i>El sistema nacional de ciudades y el derecho a la ciudad.....</i>	51
II.	EL ABANDONO DEL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL PODER PÚBLICO EN NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL CON LA INCORPORACIÓN DEL PODER POPULAR.....	51
III.	LA “NACIONALIZACIÓN” DE COMPETENCIAS QUE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 ATRIBUYE A LOS ESTADOS.....	53
IV.	LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE DESPRENDERSE (DESCENTRALIZAR) SUS COMPETENCIAS Y TRANSFERIRLAS EN LOS ÓRGANOS DEL PODER POPULAR.....	60
V.	LA LIMITACIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.....	62
VI.	LA SUSTITUCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO POR UN CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO	62

CUARTA PARTE

LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PODER NACIONAL: LA ACENTUACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO

I. LA EXTENSIÓN DEL PERÍODO PRESIDENCIAL	65
II. LOS NUEVOS ÓRGANOS EJECUTIVOS: LOS VICE PRESIDENTES.	65
III. LA EXTENSIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	66
IV. LA TRANSFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO	69

QUINTA PARTE

LOS CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA: DE UN ESTADO SOCIAL Y PROMOTOR DE ECONOMÍA MIXTA, A UN ESTADO SOCIALISTA, DE ECONOMÍA ESTATAL CENTRALIZADA Y CONFISCATORIA

I. LA ELIMINACIÓN DE LA LIBERTAD ECONÓMICA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL AL LIBRE EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	72
II. LA ELIMINACIÓN DE LA GARANTÍA DE LA PROPIEDAD PRIVADA	76
III. LA ELIMINACIÓN DEL LATIFUNDIO	79
IV. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA	82
V. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN FISCAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO	84
1. <i>La eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela</i>	84
2. <i>El control de las Reservas Internacionales por el Ejecutivo</i>	87

SEXTA PARTE

LOS CAMBIOS EN LOS DERECHOS LABORALES: UNA "REFORMA" CONSTITUCIONAL INÚTIL

SÉPTIMA PARTE

LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA FUERZA ARMADA: DE UN ESTADO CIVIL A UN ESTADO MILITARISTA

OCTAVA PARTE

EL SENTIDO DE LO QUE PUEDEN SER LAS "FUTURAS" REFORMAS CONSTITUCIONALES YA ANUNCIADAS.

I. REFORMAS EN EL RÉGIMEN GENERAL DEL PODER PÚBLICO....	100
1. <i>Las nuevas orientaciones en materia de relaciones internacionales</i>	100
2. <i>Las reformas en cuanto al régimen tributario</i>	100

3.	<i>Las reformas al régimen de la responsabilidad del Estado.....</i>	102
4.	<i>Las propuestas de reformas sobre prohibiciones a los Estados.....</i>	103
5.	<i>Las propuestas de reformas sobre limitaciones a los municipios</i>	104
II.	PROPUESTAS DE REFORMA SOBRE EL PODER EJECUTIVO NACIONAL.....	105
1.	<i>Los cambios respecto de la jefatura del Estado</i>	105
2.	<i>La búsqueda de la permeabilidad política entre el Ejecutivo y el Legislativo.....</i>	106
3.	<i>La dilución de la responsabilidad del Ejecutivo en los Estados de excepción.....</i>	107
4.	<i>La creación de la figura de los vicepresidentes territoriales.....</i>	107
III.	LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL: LA ASAMBLEA NACIONAL	109
1.	<i>La Asamblea del Poder Popular</i>	109
2.	<i>Los cambios en materia de revocación de mandato de diputados.....</i>	110
3.	<i>Los cambios en el procedimiento de formación de las leyes y la eliminación de los mecanismos de consulta.....</i>	110
4.	<i>Los cambios en materia de control parlamentario</i>	111
IV.	LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL.....	112
1.	<i>La restricción de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.....</i>	112
2.	<i>La eliminación de las jurisdicciones en la Constitución.....</i>	112
3.	<i>La absurda constitucionalización de la ausencia de jurisdicción disciplinaria</i>	114
4.	<i>Las reformas al Tribunal Supremo de Justicia</i>	114
5.	<i>La eliminación de la Jurisdicción Constitucional (Sala Constitucional)</i>	115
6.	<i>Las reformas al sistema de gobierno y administración del sistema judicial</i>	116
V.	LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER CIUDADANO ...	117
VI.	LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER ELECTORAL.....	119
VII.	LAS REFORMAS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES.....	120
1.	<i>Los cambios en el régimen general de los derechos humanos</i>	120
2.	<i>La regresión en el régimen general de las garantías constitucionales</i>	122
3.	<i>Los cambios en el estatuto de las personas</i>	126
A.	<i>La eliminación del derecho humano a la nacionalidad originaria.....</i>	126
B.	<i>Los cambios en el régimen de la extradición.....</i>	127

4.	<i>La regresión en el régimen de los derechos individuales</i>	127
5.	<i>Los cambios en materia de restricción ejecutiva de las garantías constitucionales de los derechos humanos.....</i>	131
VIII.	LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.	133
1.	<i>La eliminación de los supuestos constitucionales de participación</i>	133
2.	<i>La limitación al derecho a la participación política mediante referendos y la restricción a la democracia directa</i>	134
3.	<i>Las reformas para el establecimiento de la reelección general.....</i>	136
4.	<i>Las reformas en el régimen de las elecciones internas de los partidos políticos y de las elecciones.....</i>	136
IX.	LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS SOCIALES ..	137
1.	<i>Los cambios en materia de derechos sociales y de las familias</i>	137
2.	<i>Los cambios en relación con los derechos culturales.....</i>	139
3.	<i>Los cambios en relación con el derecho a la educación y con la autonomía universitaria.....</i>	140
4.	<i>Los cambios en materia de derechos ambientales.....</i>	143
5.	<i>Los cambios en materia de derechos de los pueblos indígenas</i>	144
X.	LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA ECONOMÍA....	145
1.	<i>Las propuestas en cuanto al régimen de las empresas petroleras públicas</i>	145
2.	<i>Las propuestas en materia del régimen de la economía pública.....</i>	145
3.	<i>Los cambios en el régimen de los bienes públicos</i>	146
XI.	LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ESTATALES.....	147
XII.	LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN	148
XIII.	LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN.....	149

